

Envío

AÑO 18 • N° 62 • AGOSTO 2020

- Emergencia, pandemia e incertidumbre sin final previsible
Ismael Moreno SJ
- Las revelaciones de la pandemia
Marvin Barahona
- El derecho a la verdad en la adquisición de bienes y servicios en la emergencia sanitaria: Caso Invest-H
Rafael Jerez Moreno
- El (des)gobierno de la crisis: Un llamado a radicalizarnos
Marcela Arias Moncada
- La lucha contra la corrupción antes y durante la vigencia de la MACCIH
Joaquín A. Mejía Rivera y Carlos Joaquín Méndez
- Cuarenta años después del Informe MacBride y el tratamiento informativo de la Covid-19
Lucila Funes Valladares
- ¿Es posible una nueva realidad después de la Covid-19?
Efraín Díaz Arrivillaga
- La respuesta estatal y empresarial ante la Covid-19 y los derechos de las trabajadoras de la maquila en el Triángulo Norte
Yadira Minero Rodas y Abogados sin Fronteras Canadá

REVISTA DEL EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN (ERIC)
EL PROGRESO, YORO, HONDURAS



Esta edición de la Revista *Envío-Honduras* es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

© ERIC-SJ
Apartado Postal N° 10
Teléfonos: (504) 2647-4227
Fax: (504) 2647-0907
El Progreso, Yoro, Honduras
enviohonduras@eric-sj.org
www.eric-sj.org

Consejo de redacción:
Ismael Moreno SJ, Isolda Arita,
Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R.
y Eugenio Sosa.

Colaboran en este número:
Ismael Moreno SJ, Marvin Barahona,
Rafael Jerez Moreno, Marcela Arias
Moncada, Joaquín A. Mejía Rivera,
Carlos Joaquín Méndez, Lucila Funes
Valladares, Efraín Díaz Arrivillaga,
Yadira Minero Rodas y
Abogados sin Fronteras Canadá.

Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita

Diagramación: Marianela González

Impresión:
Editorial Guaymuras,
Tegucigalpa, Honduras.
Tiraje: 1000 ejemplares

• Emergencia, pandemia e incertidumbre sin final previsible.....	1
• Las revelaciones de la pandemia.....	10
• El derecho a la verdad en la adquisición de bienes y servicios en la emergencia sanitaria: Caso Invest-H.....	22
• El (des)gobierno de la crisis: Un llamado a radicalizarnos.....	29
• La lucha contra la corrupción antes y durante la vigencia de la MACCIH	34
• Cuarenta años después del Informe MacBride y el tratamiento informativo de la Covid-19.....	41
• ¿Es posible una nueva realidad después de la Covid-19?	47
• La respuesta estatal y empresarial ante la Covid-19 y los derechos de las trabajadoras de la maquila en el Triángulo Norte.....	51

El individuo no se salva solo

(...) Cuando en San Pedro Sula atacó una epidemia de fiebre amarilla (1905), tras haberse extinguido los efectos de otra previa de 1892, la gente apedreaba las casas de los infectados, los aislaba y nadie ayudaba a los enfermos, mucho menos extraer los cuerpos de los fallecidos en sus casas.

Entonces apareció un personaje hoy mítico, Chale Vilay, quien asumiendo una misión que nadie le había pedido (si bien bajo la falsa creencia de que a los negros y mulatos la peste no los atacaba), iba de barrio en barrio, con una carreta, recogiendo los muertos para llevarlos al nuevo cementerio municipal del sur de la urbe, donde se abrían ya fosas masivas y comunes...

Tales reacciones obedecen a dos pobres conceptos: ignorancia y falta de solidaridad. Ignorancia del elemento sanitario preventivo, pues en San Pedro Sula nadie sabía que el *Aedes aegypti* transmitía el virus, y segundo por someterse al principio de “sálvese quien pueda”, sin tener en cuenta que el individuo no se salva solo, ya que para hacerlo ocupa la ayuda de la comuna. Es parte de los enormes desafíos y errores que tenemos que comprender y corregir, en específico: agradecer a quien nos ayuda, que son los médicos y sanitarios.

JULIO ESCOTO

Entrevista en *En alta voz*, 28 de mayo de 2020



Emergencia, pandemia e incertidumbre sin final previsible

ISMAEL MORENO SJ*

*No es cierto que la Covid-19 sea una oportunidad para avanzar.
El saqueo de los recursos destinados a atender a los enfermos,
indica que algo profundo ya estaba roto en nuestra sociedad.
El virus solo destapó la podredumbre.*

*Esto supone encarar colectivamente temas clave como la corrupción
y la impunidad, la ilegalidad del régimen político y las profundas reformas
que exige el proceso electoral para que sea legítimo y creíble.*

AFLORAN NUESTROS TEJIDOS ROTOS

Las lecturas entusiastas de las primeras semanas, y quizás los primeros tres meses de la pandemia y el confinamiento que la acompañó, han debido dar paso a una lectura más mesurada y un análisis más prudente, frío y más bien pesimista del presente y sobre lo que podemos esperar de un futuro todavía incierto. No es cierto que la Covid-19 sea una oportunidad que necesitamos descubrir. Sobre todo es crisis y una ocasión para destapar las podredumbres de todas nuestras crisis y todos nuestros tejidos rotos.

Que lo que abunda hoy sea el saqueo de los recursos destinados a atender a los enfermos, en lugar

del compromiso que se debiera esperar de funcionarios públicos obligados por sus cargos a servir a la población, indica que algo profundo estaba ya roto en nuestra sociedad. El virus solo fue el detonante de ese sentimiento de egoísmo, que se destapó con toda su podredumbre.

Por eso no debe causar asombro que el caso más debatido del momento sea la compra de los “hospitales móviles”, que se convirtió en ocasión para una estafa por parte de funcionarios, cuya responsabilidad era, paradójicamente, hacer lo debido para proteger la vida de la población. Esto nos indica que los hilos de la solidaridad y del compromiso por el bien común ya estaban rotos, y que cuanto más elevada es la responsabilidad de las personas en sus funciones públicas, mayor es su avaricia y su afán por aprovecharse de los bienes públicos.

El caso hondureño es uno de los más extremos del mundo; no en vano se cataloga al país como uno de los tres con mayor desigualdad socioeconómica en el planeta, superado solo por Sudáfrica y Haití; en tanto que los índices de percepción de la corrupción pública nos ubican entre los más afectados en el mundo por este flagelo. Es tan extremo el caso hondureño, que por donde suene el nombre del país se le asocia inmediatamente con el narconegocio conducido por las más altas autoridades gubernamentales.

UN DETERIORO PLANETARIO DE LA CONCIENCIA

Siendo el virus una pandemia, el planeta entero ha dado signos de deterioro en su condición humana, social, ecológica, cultural y espiritual. El virus ha sacado a flote muy

* Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

GARÍFUNAS CONTINUÁN DESAPARECIDOS

El 29 de julio, a diez días de la desaparición forzada de Alberth Snider Centeno Tomás, presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cáliz, Milton Joel Martínez Álvarez y Junior Rafael Juárez Mejía, las autoridades estatales aún no daban respuesta.

Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, reiteró que la población no debe olvidar que los cinco jóvenes fueron sacados de sus hogares el día que solo los cuerpos de seguridad tienen permiso de circular.

Además, recordó que la comunidad Triunfo de la Cruz fue favorecida con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2015, que el Estado aún no cumple por falta de "voluntad política", y que ha provocado más conflictividad en los territorios garífunas por la avaricia de las empresas del sector turismo.

Por su parte, la Coalición contra la Impunidad exigió que la investigación de los garífunas desaparecidos no esté a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), en vista de que los testimonios sobre los hechos coinciden en un aparente involucramiento de esta institución.

buenas iniciativas en diversos grupos, pero, sobre todo, ha desnudado lo peor del ser humano.

La globalización de los capitales, impulsada desde hace varias décadas, no ha pasado impunemente. Ha dejado huellas de deshumanización, patentes en presencia de la Covid-19; por ejemplo, la insensibilidad de personas que, no obstante saber cómo se produce el contagio, han hecho caso omiso, conduciendo a la masificación del contagio y a la muerte de decenas de miles de personas, mayoritariamente en condiciones de elevada vulnerabilidad.

Es un signo de los tiempos. Es pérdida de solidaridad, por mucho que se afirme lo contrario. Si la pandemia hizo que se manifestaran sentimientos solidarios entre los pueblos, esto no es lo que ha predominado en estos meses. En su lugar se impuso la insolidaridad y la lógica del sálvese quien pueda.

Se sabe que una vez que los países europeos y Estados Unidos decidieron reiniciar sus actividades económicas, los veraneantes desoyeron el llamado a las medidas de prevención y se lanzaron en masa a las playas, restaurantes y bares. La recreación, por encima de la necesidad de protección.

El resultado ha sido un feroz rebrote del virus, que ha causado muchas nuevas víctimas en esas naciones. La Covid-19, entonces, deja al descubierto que los seres humanos hemos alcanzado un desarrollo tecnológico impresionante, pero hemos avanzado muy poco en desarrollar la solidaridad. La sensibilidad se ha reducido a exacerbar la satisfacción individual, a costa de perder la sensibilidad social.

NEGOCIO Y LUCRO

En cuanto a la vacuna contra el Coronavirus, expertos creíbles sostienen que no es cierto que esta no se pueda crear y producir a corto plazo. Sin embargo, la ambición de las empresas farmacéuticas de controlar la patente y el multimillonario negocio que eso supone, así como las negociaciones políticas entre grandes potencias y las multinacionales, estaría retrasando la aparición de un fármaco que vendría a salvar las vidas de millones de personas.

Capitales, negocios y lucros, por encima de la vida humana, representan hoy la globalización universal de la muerte. En el caso hondureño, es obvio que en la atención a la emergencia han predominado los criterios económicos de los más poderosos empresarios y de los políticos —sobre todo de los más corruptos— por encima del criterio sanitario.

Cuando en el mes de junio se aprobó e implementó la llamada "apertura inteligente", las voces médicas advirtieron que se estaba haciendo en el momento de expansión del contagio; sin embargo, se abrió la industria maquiladora y los negocios vinculados con la gran empresa privada y las transnacionales.

¿Qué supuso esa decisión? Que unas semanas después los pacientes contagiados se multiplicaran y que mucha gente, incluyendo al personal de salud, fueran muriendo por el contagio. Los expertos sanitarios coincidieron en señalar esa decisión político-económica como la responsable de esa mortandad.

Pero la apertura no se detuvo; por el contrario, se mantuvo a pesar de las protestas y presiones de varios alcaldes decididos a esta-

blecer en sus municipios un cerco epidemiológico. Pero ya no se podía controlar el virus y los centros hospitalarios ni siquiera podían dar una atención mínima a los pacientes, que desde ese momento rebasaron la precaria capacidad del sistema sanitario público. Se volvió a cerrar, regresando a la fase cero en las ciudades y los municipios más afectados.

LAS CRISIS A LA VISTA

El escenario hondureño, con sus injusticias y desigualdades, está en sintonía con el escenario mundial. Tal y como lo señala el Secretariado para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, resumiendo las encuestas de abril, el Coronavirus ha desnudado crisis que ya venían agudizadas y que con la pandemia se han profundizado, y es previsible que se sigan agudizando.

La primera crisis. Es la crisis de la desigualdad que, sin duda, seguirá profundizándose. No es cierto que por efecto del virus pasaremos de inmediato a un escenario que transforme las relaciones de poder y el modelo basado en ganancias, lucro y concentración de riquezas, cuya contrapartida es el empobrecimiento y la marginalidad de extensos conglomerados humanos.

Todos los signos apuntan a que con la Covid-19 se seguirán empoderando los grupos e individuos que sostienen el modelo económico y político vigente, a la vez que se condena a una miseria aún mayor a quienes ya estaban excluidos del disfrute de oportunidades para sobrevivir. No existen señales de cambio de rumbo ni de timonel. Los líderes que conducían el capi-

tal siguen al frente de los rubros más pujantes de la economía, y son notorios en la industria maquiladora, las industrias extractivas, la agroindustria de exportación, la industria farmacéutica, tecnológica y mediática.

No hay un solo signo que apunte en otra dirección. Y todo lo que se diga o se escriba sobre comportamientos y dinanismos distintos de los que prevalecen, no es más que la expresión de buenos deseos, sazonzados con cierto entusiasmo, pero que no resisten ante los fríos cálculos del más alto empresariado ni ante las baldosas del poder que ejerce el gran capital. El Coronavirus vino a destapar lo que había, y lo que había era podredumbre añejada por el tiempo que, ahora con las tapas abiertas, apesta.

La concentración de las decisiones, de los capitales y del poder en grupos cada vez más reducidos, así como el masivo empobrecimiento, con más desempleados y miserables en las calles, parece ser el paisaje que dominará los escenarios futuros. Con el agravante de que al menos una parte importante de la carga económica producida por la reducción de la producción deberá asumirla el Estado, incluyendo las “pérdidas” de la gran empresa privada. Las desigualdades quedarán así instaladas por tiempo indefinido.

Esta crisis nos coloca ante un desafío inevitable: identificar el origen y las fuentes donde se generan estas desigualdades; es decir, tocar la llaga del modelo neoliberal capitalista, con sus dinanismos económicos productores de desigualdades, exclusiones y violencia.

Al llegar al núcleo del modelo neoliberal, se llega también a la

ENTRE ESPERANZAS Y MIEDOS

El 30 de mayo, en su 40 aniversario, el ERIC presentó la décima edición del Sondeo de Opinión Pública, que da cuenta de las valoraciones de la población sobre los principales problemas y sueños de la sociedad hondureña.

Sobre la confianza que deposita en el gobierno central, el 82.5% manifestó no tener confianza en este; solo el 17.4 dijo tenerla. La certeza de que la corrupción está extendida en esa instancia, se expresa en la nota de **3.69** que se le asignó a JOH por su desempeño, en una escala de 0 a 10.

El problema fundamental identificado es la crisis económica (51.7%), que se expresa en desempleo, pobreza y alto costo de la vida; el segundo es la inseguridad y violencia (23.5%) y, el tercero, la corrupción y la impunidad (13.2%).

A la pregunta: “Cuando piensa en el futuro del país, ¿qué es lo primero que siente, esperanza o miedo?”, el 54.1% dijo sentir esperanza, el 40.9 manifestó sentir miedo, y el 4.8% dijo no sentir ni esperanza ni miedo. Así, los sentimientos se reparten entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.

INDIGNADO

Michael G. Kozak, subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, manifestó su indignación ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras de sobreseer a 22 implicados en el caso Pandora.

El funcionario expresó su rechazo en su cuenta oficial de Twitter, donde se refirió a Pandora como un "caso emblemático de corrupción". A la vez, apoyó el anuncio del fiscal general Óscar Chinchilla de interponer un recurso de amparo contra el fallo de sobreseimiento definitivo a los acusados.

Pandora se le denominó al caso judicializado por la Maccih-Ufecic, por el desvío de L 282 millones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, destinados a proyectos de desarrollo rural, que fueron entregados a diputados de los partidos Nacional y Liberal para, supuestamente, financiar la campaña política de 2013.

En el fallo emitido por la Corte de Apelaciones a favor de los 22 acusados, solo se confirmó el auto de formal procesamiento contra cuatro de los implicados, entre los que se encuentra el ex ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado.

masa de sus víctimas y a la necesidad de acentuar nuestra cercanía con sus necesidades, porque serán estas las que cargarán con todo el peso de las consecuencias de la crisis. Es decir, cualquier propuesta de solución a la crisis de desigualdad ha de pasar por la solidaridad y cercanía con las poblaciones campesinas, urbano-marginales, los pueblos originarios, la juventud desempleada y marginalizada, las poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas y las mujeres.

Este desafío de unir la identificación de los resortes que mueven al neoliberalismo y disparan la desigualdad, con la exclusión y el sufrimiento de sus millares de víctimas, es lo que debiera ser el quehacer fundamental de universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales, iglesias y otros sectores que estén dispuestos a construir una nueva sensibilidad social y política ante las desastrosas consecuencias del modelo de sociedad en que vivimos.

Las poblaciones sufrientes y que cargan con los productos empobrecedores del neoliberalismo, han de ser el factor que convoque a la unidad y las acciones conjuntas de los sectores sociales interesados en llevar a cabo una lucha frontal por reducir las desigualdades, desde propuestas alternativas al modelo que las produce.

EL DETERIORO SE PROFUNDIZA

La segunda crisis: la profundización del deterioro y la degradación ambiental-ecológica. No es cierto que con la pandemia automáticamente se recompondrán los capitales con el fin de reorientarlos hacia programas que expresen una

relación amistosa con el ambiente, como lo desean ardorosamente los ambientalistas de muy buen y hondo sentir.

Por el contrario, proseguirán el despojo de la naturaleza y la expropiación de las comunidades; y los proyectos extractivos seguirán definiendo las políticas prioritarias de inversión, como va quedando claro con la continuidad de las explotaciones mineras en el norte y occidente del país. Entonces, se puede prever mayor conflictividad, por una parte, entre las comunidades y organizaciones defensoras del ambiente y, por otra, los empresarios y políticos que impulsan proyectos agroindustriales y, sobre todo, de extracción de las riquezas naturales.

El agua seguirá siendo fuente creciente de conflicto, y su control definirá quiénes tienen el poder real en la sociedad. Tras las primeras semanas del cierre de las maquilas en Choloma, en el valle de Sula, los habitantes se maravillaron porque de pronto el cauce del río Choloma comenzó a llenarse. Y como por encanto, la población se dio cuenta de que la industria de la maquila consumía toda el agua de su municipio.

La gente se había hecho la idea de que el cambio climático, ese asunto del que hablan los expertos, había arrasado con las aguas y los acuíferos de la zona. Desde hace décadas, las viviendas, todas, apenas reciben agua —a cuentagotas— en las noches o dos veces por semana. El Coronavirus hizo el milagro de las aguas. El agua no se la había chupado la tierra. La chupan las máquinas de la industria maquiladora.

Nadie sospechaba sobre el abundante consumo de agua que necesita esa industria para funcio-

nar. En pocas décadas, la maquila convirtió una zona fértil en árida y en camino a ser desértica. Muchos ambientalistas han centrado el extractivismo en la minería, en el control de ríos y aguas para construir represas, que a su vez están en íntima relación con la industria minera.

Muchos expertos nos hablan del extractivismo, pero muy pocos lo relacionan con la industria maquiladora, o lo han hecho marginalmente. Sin embargo, importantes estudios científicos vinculan las enfermedades de muchas trabajadoras con la práctica industrial que las obliga a hacer movimientos repetitivos. De igual manera, han establecido que es una industria donde no se respetan los derechos laborales y solo en escasas ocasiones se permite el derecho a la sindicalización; es una industria con un régimen salarial que, en lugar de regirse por la legislación nacional, queda condicionado a sus propios requerimientos, en detrimento de trabajadoras y trabajadores.

La industria maquiladora ha sido una de las definidoras de la llamada “apertura inteligente”, y la que ha impuesto el criterio económico-empresarial por encima del sanitario, al menos en la zona industrial de la Costa Norte. Igual liderazgo ejercen los empresarios beneficiados con concesiones de ríos, zonas mineras y bosques. Esta será también la tonalidad del próximo futuro y, por consiguiente, el deterioro y la degradación ambiental y ecológica se profundizará, con todas las consecuencias que esto supone para la calidad de vida de la población.

Esta segunda crisis de deterioro y degradación ambiental y ecológica

abre a su vez un segundo y enorme desafío: articular entre diversos sectores sociales, eclesiales, ambientalistas, académicos y políticos, el compromiso con la lucha por proteger el ambiente y los derechos de la naturaleza; y, especialmente, un puente de solidaridad con las comunidades expulsadas o amenazadas por los proyectos extractivos.

Este desafío supone, a la vez, investigaciones que toquen los dinámicos depredadores del ambiente e identificar, para acentuar el compromiso, las regiones y territorios en donde más exponencialmente se amenaza la vida de las poblaciones y los bienes naturales. Ninguna respuesta puede resultar efectiva para el bien común y la vida de la naturaleza y de las poblaciones campesinas e indígenas, si no se aborda el conflicto fundamental del país entre quienes promueven e impulsan los proyectos extractivos, y la defensa de los territorios y los bienes naturales sustentada por las comunidades y las organizaciones ambientalistas y ecológicas.

La defensa del ambiente y de los territorios campesinos e indígenas es incompatible con los proyectos extractivos. Sin embargo, los actores que impulsan el extractivismo, tanto el expresado en los bienes naturales como en la industria maquiladora, tienen argumentos basados en un plan de desarrollo respaldado por los actores políticos, y han logrado contar con el respaldo de sectores de base. Mientras tanto, no todos los sectores defensores del ambiente han elaborado una propuesta alternativa coherente, creíble y atractiva ante las poblaciones involucradas. En este desafío ambiental y ecológico es imprescindible una alianza estratégica entre sectores ambienta-

DESIDIA, INCAPACIDAD, DESPERDICIO

La doctora Karla Pavón, jefe de Vigilancia y Virología de la Secretaría de Salud, informó el 9 de agosto, en el programa 30/30 de TSI, que cien mil kits de pruebas PCR para tomar muestras de Covid-19, adquiridas en Corea del Sur por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), se arruinaron en una bodega al no cumplir con la cadena de frío.

La Comisión Interventora de INVEST-H admitió en un comunicado que se gestionó la compra de 250 mil kits, y que INVEST-H recibió y entregó los primeros cien mil el 21 de abril a la Secretaría de Salud.

Pero al momento de recibirlos, los técnicos de Salud constataron que la temperatura ambiente en que debían estar los kits no estaba conforme a las normas establecidas. Y lo mismo sucedió con los 150 mil restantes, que llegaron posteriormente.

En suma, en las bodegas de INVEST-H se encuentran 250 mil kits para diagnosticar Covid-19 dañados e inservibles, que además llegaron incompletos y por los que el pueblo hondureño pagó L 46 millones.

UNOS EN LA BULLA...

El 9 de julio, aprovechándose de la emergencia por la Covid-19, el Congreso Nacional aprobó, en sesión virtual, dos contratos de compra de energía eléctrica a la empresa Lufussa, propiedad de los hermanos Eduardo, Schucry y Luis Kafie.

Sin considerar el descalabro financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los diputados aprobaron el contrato 15-2018, que es un acuerdo de suministro de potencia firme y energía de 70 MW en el sur del país, durante dos años; y el contrato 04-2018, que consiste en el suministro de potencia y energía asociada de 240 MW por diez años.

Los contratos fueron presentados al Congreso el 12 de diciembre de 2019, pero diputados de la oposición impidieron su aprobación, considerando que eran lesivos para los intereses nacionales. Entonces quedaron en suspenso, a la espera del momento propicio para su aprobación.

Schucry Kafie estuvo involucrado en el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuando era accionista de la Distribuidora Metropolitana S.A (DIMESA) que, de acuerdo a la Unidad de Apoyo Fiscal, suscribió contratos con el IHSS en los que sobrevaloraron insumos y servicios por más de L 1,286 millones.

listas, tanto expertos como de base, con sectores académicos y centros de investigación, con el propósito de formular un plan ambiental de bienestar social y colectivo, que exprese tanto la protección de las comunidades como los derechos de la naturaleza. Esta sería una visión programática orientada hacia un desarrollo social, ambiental y político basado en el bien común, que asegure el bienestar personal, comunitario y social.

LA DEGRADACIÓN DE LA DEMOCRACIA

La tercera crisis: la profundización de la degradación de una democracia que ha resultado damnificada a lo largo del presente siglo, y que ha arrasado con la institucionalidad del Estado de derecho. En el contexto de la pandemia, en lugar de surgir aperturas hacia una mayor búsqueda participativa, la tendencia es al cierre de espacios a la democracia y a la consolidación de proyectos autoritarios liderados por militares, caudillos y dictadores.

Esta crisis de gobernabilidad nos sitúa ante un tercer desafío: abordar de frente el problema político, identificando los factores que producen el deterioro de la institucionalidad, como tierra fértil para los populismos, el autoritarismo y la dictadura.

Tocar de frente el tema del poder como paradigma dominante de exclusión en la democracia hondureña, y a la vez identificar experiencias que alienten la construcción de alternativas de democracia, desde las bases, es una tarea ciudadana. Es ahí donde hemos de situar parte de nuestro quehacer en estos inciertos tiempos, cuando una pandemia

llegó para quedarse por mucho más tiempo del que supusimos a comienzos de marzo.

En el reciente estudio del PNUD sobre el estado de la democracia — realizado mediante una encuesta implementada a inicios de año y presentado a finales de junio—, los consultores concluyen que la gravedad del deterioro político hondureño es de tal envergadura, que no se ve cómo se resolverá porque, además del colapso institucional y de la corrupción, la gente, incluso la que podría tener capacidad de incidir, se siente excluida de todos los espacios donde se toman las decisiones.

El estudio advierte que, en los hechos, nos encontramos ante cuatro hipotéticos escenarios: el primero, el de una necesaria transformación, pero que es negada o bloqueada por los actores políticos responsables de las principales decisiones desde el poder del Estado.

Un segundo escenario, el de una reforma parcial o progresiva, aunque bajo la égida de quienes sostienen el actual estado de cosas, permitiría cambios parciales o reformas que, al menos, dejarían algunas puertas abiertas para impedir el atasco de los procesos que podrían facilitar una apertura política democrática. El tercer escenario, el más optimista, pero sin un sustento de posibilidad, sería el de la transformación incluyente.

El cuarto escenario sería el único que claramente apunta a un cambio, pero orientado hacia un mayor autoritarismo. La tendencia que se advierte tras el Coronavirus, es el cruce articulado entre el primer escenario de transformación negada o bloqueada, y el último en el que predomina el cambio autoritario.

La situación es tan aguda, que incluso un destacado miembro de una ONG que se presenta a sí misma como representante de la sociedad civil, pero que goza de la venia oficial, ante los resultados del estudio del PNUD afirmó taxativamente que “la capacidad de hacer cambios democráticos en Honduras es cada vez más estrecha”.

QUÉ DICE LA GENTE

Este marco coincide con la sensación que producen los datos del último sondeo de opinión pública que el ERIC socializó en la primera quincena de julio. La sociedad no advierte caminos nuevos y provechosos para la vida de la gente, al menos en el corto y mediano plazo. En esta décima edición, la población consultada ratificó su desconfianza en todos los tomadores de decisión y, en general, en todas las instituciones del Estado. La desconfianza sobrepasa el 80 por ciento en el caso de los partidos políticos, el Congreso Nacional, el Gobierno Central, las instancias responsables del proceso electoral y la institucionalidad de justicia.

La sociedad hondureña, en sintonía con los resultados de la última encuesta del PNUD, sin ver claramente una salida a la crisis de gobernabilidad, sigue prefiriendo la democracia, aunque no se casa con ella. El 45.5 por ciento prefiere la democracia como proyecto político, pero el 40 por ciento estaría dispuesto a aceptar cualquier otro proyecto político que no sea el democrático, si este le garantiza empleo, seguridad, salud y un uso transparente de los recursos públicos, lo que equivale a controlar eficazmente la corrupción.

Si se unieran las tendencias identificadas en estos dos estudios,

coincidirían en una población que percibe que en la democracia le ha ido muy mal, y que no encuentra salida con el actual gobierno. En esta circunstancia prefiere, sin dudarlo, un cambio de gobierno, aunque el que lo reemplace fuese aún más autoritario, siempre y cuando resuelva sus demandas postergadas.

Es evidente que, en diez años consecutivos de sondeos de opinión pública, y con percepciones muy similares en todas sus ediciones, queda muy establecido que los tomadores de decisión en los más altos cargos de responsabilidad institucional, no escuchan y no están dispuestos a escuchar a la sociedad. La escucha es entre sus propios y más cercanos círculos, en lógica de autoprotección, adulación y sectarismo.

En lugar de servidores públicos, en todos los años transcurridos desde 2010 —cuando inició este ejercicio de consulta pública—, lo que se ha configurado en la institucionalidad del Estado es una logia que se ha especializado en protegerse de los demás, para la que toda opinión crítica es una amenaza y, por tanto, hay que acallar.

POR UN ESCENARIO DE TRANSICIÓN

Al no advertir un escenario ideal, ni siquiera deseado, surge la oportunidad de contribuir a la construcción de un escenario de transición, en el que se conjuguen varios factores esenciales. Por una parte, es obligación ética que en el corto plazo se junten las voces más acreditadas para proponer una respuesta institucional a la debacle sanitaria, siguiendo primordialmente el criterio de salud por encima de los criterios económicos y políti-

MÁS ENDEUDAMIENTO

A finales de julio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional dos propuestas de nuevos créditos, a los que el Legislativo dio trámite de inmediato y con la dispensa de dos debates.

El primero es por un monto de 59 millones 200 mil dólares, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); se pagará en 40 años y gozará de 5 años de periodo de gracia. La tasa de interés será de 1.75%.

Se dijo que se destinará para ejecutar el Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, que consiste en asignar fondos para la reactivación económica y la conservación de empleos.

El segundo es con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por 50 millones de dólares, destinados al Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el Covid-19 y de Reactivación Económica.

Ante los cuestionamientos de algunos diputados, la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, dijo que “la responsabilidad de cómo se ejecuta es de las instituciones a las que se les ha asignado presupuesto... cada entidad tiene que informar al respecto...”. Agregó que el Tribunal Superior de Cuentas es el que debe aclarar las dudas de la población.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

“Nos hemos convertido en el cajero automático del Poder Ejecutivo y eso es grave y lamentable; no hay transparencia, no se sabe el uso del dinero que antes se aprobó (...). Seguirnos endeudando no es la solución, sino ser transparentes con todo el dinero que hay”, expresó el diputado de Libre, German Altamirano, cuando se discutía en el Congreso la aprobación de los dos nuevos préstamos.

El diputado del PINU, Tomás Ramírez, dijo que, ante la falta de detalle en la ejecución de los préstamos aprobados, la bancada de su partido también votaría en contra.

La nacionalista Gladis Aurora López dijo que el gobierno ha sido responsable, que los ingresos tributarios han disminuido, por lo que el Congreso debe seguir apoyando las solicitudes del Ejecutivo. Finalmente, la aplanadora nacionalista se impuso y dio luz verde para que Finanzas suscriba ambos préstamos.

El Consejo Nacional Anticorrupción afirma que el gobierno ha obtenido más de L 90,000 millones para hacer frente a la pandemia. El 10 de agosto, un mensaje que se ha hecho viral en redes sociales, amaneció plasmado en el puente a desnivel del bulevar Suyapa: **¿Dónde está el dinero? #Honduras lo exige.**

cos. Detener el contagio y reducir el número de muertes deben ser prioridades en este escenario de transición.

Una segunda respuesta institucional —sin duda prioritaria—, debe atender al enorme reto que representa el hambre que ya se manifiesta en la precaria situación de miles de familias, y es previsible que siga aumentando en la misma medida que se reducen sus ingresos y oportunidades de empleo. Que la conducta de los hambrientos haya dado hasta hoy muestras sorprendentes de pasividad y paciencia, no significa que al apretar el hambre este factor no pueda convertirse en un nuevo generador de inestabilidad política y convulsión social.

Una condición para asumir las tareas de corto plazo, es situarse en un estado de Debate y Búsqueda según el desarrollo de los acontecimientos y sus correspondientes escenarios. Es imprescindible promover encuentros entre diversos actores sociales y políticos, para definir líneas estratégicas de acción que permitan superar la trampa del corto plazo y la sordera del gobierno actual con su fuerte carga de autoritarismo.

Esto supone encarar colectivamente temas clave para la sociedad hondureña como la corrupción y la impunidad, la ilegalidad del régimen político y las profundas reformas que exige el proceso electoral para ser legítimo y creíble. Animar un debate que conlleve a asumir el consenso de que la continuidad de Juan Orlando Hernández y su equipo significan agravar mucho más la situación, incluso en el más corto plazo, por lo que esta sería una condición para salir del estancamiento en que se encuentra el país.

LLAMAMIENTOS HUMANOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONALES

- 1) *Un llamado a romper con las soluciones focalizadas en el corto plazo.* Es cierto que atender a las personas enfermas y responder a la demanda de alimentos son la prioridad del momento, pero no por eso la preocupación social debe estancarse en ese punto. Se debe mantener el dedo en la llaga de la corrupción y su impunidad, para encontrar soluciones de largo alcance ante estos flagelos, interrumpiendo su reproducción continua en la institucionalidad del Estado. Dejar que el desamparo social, la corrupción y la impunidad sigan determinando los hechos —como sucede actualmente—, es dejar el campo abierto para que se ensanche, con más fuerza, el proyecto autoritario que se viene consolidando a lo largo de este siglo, pero que se aceleró tras el golpe de Estado de junio de 2009.
- 2) *Un llamado a mantener el equilibrio entre la “virtualidad” y la “presencialidad”.* La tendencia del sistema impuesto por el capital es a confinarnos, para que sea el miedo el sentimiento que domine a la sociedad y la incapacite para que sus males-tares y su repudio se canalicen en presiones sociales públicas. El peligro es acostumbrarnos a nuevos encierros, sin siquiera caer en la cuenta de que venimos de prolongados encierros a lo largo de muchos años. Hoy estamos ante los encierros de la tecnología y de la sospecha en las relaciones humanas, por

miedo a contaminarnos. Condicionar a los sectores sociales medios y académicos a estar a gusto con la virtualidad y a desconfiar de todo lo que puede amenazar “mi” espacio de encierro personal y familiar, es una tendencia que conviene contrarrestar con propuestas creativas y novedosas, para recuperar nuestra “presencialidad” en acciones públicas y territoriales.

- 3) *Un llamado a reflexionar sobre la diferencia entre “normalidad dominante” y “normalidad subversiva”.* La normalidad dominante es la que se define y regula desde los intereses del capital y el poder político. La normalidad dominante va de la mano con la norma impuesta por quienes controlan la economía, la institucionalidad oficial y las decisiones desde la fuerza y el miedo. Vivir y aceptar esta normalidad vuelve “normales” a los seres humanos que convivimos en un territorio, y los hace sentir “aceptados” por la colectividad. En esta normalidad, se vuelven “anormales” quienes no aceptan las reglas dominantes y no encajan en ellas, incluso por sus características físicas particulares. Es anormal tanto el “cieguito”, el “enfermito”, el “loquito”, la “viejita”, el “negrito” y el “pobrecito”, como quienes protestan contra los despidos masivos injustificables, o quienes se oponen a la explotación indiscriminada del agua o la minería y quienes

exigen respeto por los derechos humanos y ambientales. Los primeros “anormales” son aceptados mientras no reclamen, y son percibidos, desde una relación de superioridad, a partir de la lástima que los “normales dominantes” sienten de ellos, llegando a ser sujetos de la limosna y la caridad pública.

Pero los segundos “anormales” estorban, molestan; por eso son estigmatizados como revoltosos, subversivos, desadaptados sociales, contrarios al desarrollo. Así como el primer grupo de “anormales” es aceptado desde la marginalidad de su condición social, el segundo grupo es rechazado por una normalidad dominante que busca su eliminación. Lo que previsiblemente se avecina es una confrontación entre esa normalidad basada en la norma impuesta, condicionada por el modelo productor de desigualdades y la lógica del “sálvese quien pueda”, y la “normalidad subversiva”, que se construye desde la solidaridad, la lucha por el “decrecimiento” tecnológico, desde la lógica del “salvarnos en racimo”, como lo dijo el mártir jesuita salvadoreño, Rutilio Grande.

- 4) *Un llamado a apostar por el camino que conduzca y fortalezca la normalidad “subversiva”,* que no es sino el llamado a la comunidad como propuesta alternativa ante el individualismo y la lógica del “sálvese quien pueda”. Es un llamado que ya

han comenzado a promover comunidades del valle del Aguán y del valle de Sula, de la zona atlántica y del occidente del país, a partir de la necesidad de promover una producción autogestionaria para hacer frente a la realidad del hambre que se advierte para los próximos meses.

Todo comienza con la búsqueda de respuestas inmediatas para asistir a familias y comunidades que no han podido realizar sus cultivos en estos tiempos de pandemia, y avanzan hacia la producción a partir de cultivos con semillas criollas que han logrado conservar comunidades agrarias e indígenas. Y quieren seguir avanzando hacia propuestas de mediano y largo plazo, basadas en la soberanía alimentaria y la autogestión que integra el cultivo de la tierra con la producción artesanal de la micro, pequeña y mediana empresa. Todo esto en la lógica de “salvarnos en racimo”. “Vamos a la milpa”, entendida no como cultivo de subsistencia, sino como una propuesta para recuperar el amor por la tierra, por la comunidad y la autogestión solidaria.

Entonces, en el campo y la ciudad, estas comunidades han iniciado una propuesta que debe comprenderse como: sembraremos la milpa, defendamos la milpa, compartamos la milpa, solidaricémonos con la milpa, desde la comunidad definida como el camino.



Las revelaciones de la pandemia

MARVIN BARAHONA*

El avance progresivo de la Covid-19 creó el escenario propicio para el despliegue de respuestas gubernamentales y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de la enfermedad.

En este contexto, los efectos de la pandemia no solo han sido devastadores en el plano humano, sanitario y económico, sino también en el comportamiento general del país y, sobre todo, en las respuestas del aparato gubernamental.

INTRODUCCIÓN

Las múltiples y complejas interacciones que se produjeron desde el 15 de marzo —cuando se decretó la cuarentena— hasta la actualidad, representan una coyuntura creada a imagen y semejanza de los dos factores que moldearon el comportamiento gubernamental y colectivo: la pandemia y la forma distorsionada que asume el ejercicio del poder político en Honduras.

Entre estos se constituyó una interdependencia, en la cual resulta aventurado decir que el fenómeno de la pandemia instituyó en la realidad hondureña todas las carencias y las incompetencias que caracterizaron la conducta gubernamental en los primeros cien días de la cuarentena, o si por el contrario, fue el antecedente de ilegitimidad, corrupción y abandono social en el que el país se desenvuelve, el que configuró la Covid-19 como una tragedia inédita de la que unos pocos podían extraer ganancias extraordinarias, igualmente inéditas.

Las “revelaciones” surgen de las interacciones, interdependencias y complementariedades que se

produjeron en la coyuntura actual, entre la pandemia como fenómeno específico y global, y los rasgos predominantes en la gestión política, económica y social de Honduras. Así se conformó el escenario oportuno para que la pandemia dejara al descubierto las realidades más profundas de un país en el que el mal gobierno resulta inexplicable si no se considera el papel determinante de la corrupción pública, la manipulación de las conciencias y el ejercicio de una dictadura que, en presencia de la pandemia, resulta hoy inocultable: la dictadura de la corrupción y del mal gobierno.

Este artículo aborda la manera específica en que el presente de la pandemia parece haber determinado los acontecimientos, si no fuese porque en Honduras el pasado sigue determinando el presente, y también el futuro de sus 9 millones de habitantes.

LO MÁS SONADO, QUE EL GOBIERNO NO SUENA

Desde que la Covid-19 se perfiló como una amenaza, ha sido evidente la ineficiencia de las instituciones gubernamentales, particularmente de las que rectoran las áreas de salud y educación, aunque no son la excepción. En general, la institucionalidad del Estado se muestra inoperante, por lo que reiteradamente es señalada por

* Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de *Evolución histórica de la identidad nacional*, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y *Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica*, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

su incompetencia ante problemas de organización, comunicación y logística. A esto se suma una evidente falta de planificación y una conducta negligente ante las necesidades y prioridades en las áreas señaladas, en particular la desprotección del personal sanitario.

La ineficiencia gubernamental responde a un antecedente lejano de abandono de las obras públicas y las instituciones, hasta que estas se convierten en “elefantes blancos” por quedar inconclusas, o resultar inútiles para el servicio público, como ocurrió recientemente con un lote de “respiradores mecánicos” adquiridos por el gobierno —con mucha pompa publicitaria y el desplazamiento del avión presidencial hasta los Estados Unidos para trasladarlos— que, según los médicos, no se pueden utilizar en las labores de emergencia por no corresponder sus características al equipo requerido. La causa: quienes los compraron “no sabían nada” sobre las especificaciones que debían tener estos insumos para atender a los contagiados por Covid-19, como explicaron algunos especialistas ante los medios de comunicación.

Esta fue la primera de varias decisiones que, en la práctica, resultaron erróneas, pero que indicaron claramente la inconsistencia de las respuestas gubernamentales ante la pandemia, a la que siguieron varias otras sobre el traslado de pacientes y fallecidos, el uso de equipo de bioseguridad, la ausencia de oxígeno, “manómetros y flujómetros”, la adquisición de mascarillas, y una larga como recurrente discusión sobre “el tratamiento” más adecuado para atender a los contagiados.

EL ESCÁNDALO MAYOR

Con el camino pavimentado por estos fracasos, se decidió adquirir, fuera de Honduras, siete hospitales móviles a un costo cercano a los 48 millones de dólares; la transacción efectuada, según investigaciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presenta irregularidades¹. Entre estas, el pago —por anticipado, sin garantías ni facturas— a un intermediario en la compra. Más de tres meses después, los hospitales seguían sin llegar al país.

La sospecha de corrupción en tal adquisición fue casi inmediata en entidades como el CNA, que inició

investigaciones sobre la conducta de las instituciones designadas por el Ejecutivo para adquirir equipos e insumos para el sistema sanitario público, de las que resultaron varios informes divulgados para el conocimiento público².

Desde ese momento, toda la actuación gubernamental relativa a “compras” e “inversiones” para tal finalidad quedó expuesta al escrutinio público y a la mirada vigilante de algunas organizaciones y la opinión pública. Mientras tanto, el Ejecutivo hizo que el Congreso Nacional aprobara la adquisición de créditos hasta por 2,500 millones de dólares³, que serían facilitados principalmente por organismos financieros multilaterales.

En la misma espiral de endeudamiento público, el gobierno colocó en el mercado financiero “bonos soberanos” por 600 millones de dólares⁴ para —según lo informado por las autoridades— responder ante los acreedores de una monumental deuda contraída en los últimos años por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

LAS DECISIONES EN UN SOLO PUÑO

Esta coyuntura ha puesto a prueba el funcionamiento de una burocracia cuya inoperancia refleja una elevada centralización de las decisiones en manos del gobernante. Los resultados obtenidos responden a debilidades comparables con las identificadas en las últimas décadas en los sistemas públicos de salud y educación en cuanto a calidad, cobertura, eficacia y eficiencia. Estas fueron palpables en la decisión gubernamental de echar marcha atrás en la distribución de la “bolsa solidaria” con alimentos básicos, en principio asignada a las Fuerzas Armadas y poco después transferida a las autoridades municipales.

En este y en otros casos, como resultó evidente en el desabastecimiento de los hospitales y la exclusión total durante casi toda la cuarentena de los departamentos

¹ Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), *La corrupción en tiempos del Covid-19, Parte V*, “Compra de hospitales móviles de aislamiento por parte de Invest-H ¿Necesidad o improvisación?”, Tegucigalpa, junio de 2020, disponible en: https://www.cna.hn/wp-content/uploads/2020/06/La-corrupcio%CC%81n-en-tiempos-del-COVID-19_tomoV.pdf

² Hasta julio de 2020, el CNA ha publicado ocho informes, correspondientes a la serie: *La corrupción en tiempos del Covid-19*.

³ Véase: “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19”, Sección Segunda, Artículo 8, Decreto No. 33-2020, del 3 de abril de 2020, Diario Oficial *La Gaceta*, disponible en: <https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto-33-2020.pdf>

⁴ Secretaría de Finanzas (SEFIN), “Congreso Nacional autoriza a la SEFIN para la colocación de seiscientos millones de dólares en Bono Soberano para reestructuración de la ENEE”, Tegucigalpa, 3 de junio 2020, consultado en: <https://www.sefin.gob.hn/congreso-nacional-autoriza-a-la-sefin-la-colocacion-de-600-millones-de-dolares-en-bono-soberano-para-reestructuracion-de-la-enee/>

de Islas de la Bahía y Gracias a Dios en la distribución de insumos biomédicos⁵, la centralización de los recursos y las decisiones no garantizó la cobertura total del territorio nacional, pero sí generó conflictos con las poblaciones locales, que se consideraron excluidas o marginadas de la obtención de recursos estatales.

La excesiva centralización en la figura del mandatario es una de las causas principales de la insensatez de muchas de las decisiones decretadas por el gobierno, como el control absoluto sobre los recursos públicos y su orientación, así como la exclusión recurrente de actores clave a escala local y nacional. El riguroso centralismo contribuyó a profundizar la ausencia de consenso respecto de la gestión de la pandemia, respaldada por la evidente ausencia de cohesión social en la población.

El impacto de la deficiente actuación gubernamental en la percepción pública ha sido casi unánime: al gobierno le importa poco la suerte de la mayoría de la población. Simultáneamente, creció la convicción de que en Honduras existen varias categorías de ciudadanos, y que la porción menos beneficiada es la mayoría de la población.

Así, el primer “distanciamiento social” se produjo entre la población y el gobernante, revelando que la brecha que separa a los gobernantes de los gobernados se ubica en coordenadas políticas que reflejan las enormes desigualdades sociales que separan a la mayoría de la población de las elites políticas y económicas.

UN BARCO A LA DERIVA

A inicios de mayo, la educación pública era considerada “un barco a la deriva” por una de las principales organizaciones gremiales de los maestros que, en un comunicado, señaló la ausencia de una dirección precisa de la educación pública, por lo cual responsabilizó al gobierno central⁶.

Igual se pensaba en los gremios de la salud pública y hasta en los medios de comunicación, que se quejaban

por la falta de organización y coherencia en las decisiones que se asumían y por las incesantes “cadenas de radio y televisión”, muchas veces improvisadas y con información desactualizada o irrelevante.

EL RETORNO DE LO PÚBLICO

Lo esencialmente nuevo durante la Covid-19 es la relevancia adquirida por “lo público” en la conciencia nacional, por haberse visibilizado, como en pocas ocasiones en el pasado, su carácter estratégico para la protección y reproducción de la vida humana, especialmente en cuanto a bienes públicos como la salud y la educación.

Sin embargo, esta conciencia no se presentó como un conflicto con “lo privado”. El énfasis recayó más bien en la necesidad de fortalecer la infraestructura social, evidente en las expectativas generadas en la población por el anuncio gubernamental de construir más de 90 hospitales; o cuando el Legislativo aprobó multimillonarias sumas para, supuestamente, adquirir insumos y equipamiento para los hospitales.

La demagogia oficial hizo fracasar las expectativas en torno de la mejora del sistema público de salud, hasta el extremo de que la evidente precariedad hizo que expresiones como “sálvese quien pueda”, fuese dicha ante medios de comunicación por el alcalde de una ciudad importante del occidente del país, expresando así la zozobra en la que ya se encontraban los hospitales.

La proclama neoliberal de la salvación individual, que condena a centenares de personas a una muerte segura, visibilizó, como nunca antes, la necesidad urgente de ejecutar políticas públicas con una visión reconstructiva de largo alcance para fortalecer los sistemas públicos de salud, educación y vivienda, entre otros que pueden contribuir a reducir la desigualdad y potenciar el acceso a los recursos públicos para la mayoría de la población.

Quedaba al descubierto el obstáculo ideológico más importante en el camino de la transformación que el país necesita. Sin embargo, aún no se encuentra el camino para establecer un diálogo fructífero sobre desigualdades, exclusiones, demandas sociales y las políticas públicas que las puedan enfrentar exitosamente.

¿Puede un diálogo sobre esas realidades ayudar a reconstruir los tejidos sociales rotos y aumentar así el potencial de vida de la población? La reconstrucción de lo público se encuentra entre las coordenadas más importantes para identificar la respuesta. En esa perspectiva, las políticas sociales —no las asistenciales—,

5 En la última semana de julio, la Secretaría de Salud (Sesal) anunció una asignación de L 20 millones y el abastecimiento de algunos insumos de bioseguridad para atender las crecientes demandas de la pandemia en el departamento de Gracias a Dios, el segundo departamento en extensión territorial del país, mayoritariamente poblado por los pueblos miskito y tawahka, y en menor proporción, por los pueblos pech y garífuna. Consultado en: <http://www.salud.gob.hn/site/index.php/component/k2/itemlist/category/12-covid19>

6 Comunicado de la Junta Central del Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), leído el 7 de mayo en el programa radial “Colprosumah Informativo”, Tegucigalpa, Radio América, 8-9 am.

pueden convertirse en un importante factor de cohesión social, de consenso político sobre las prioridades vitales y una puerta abierta al bienestar social sostenible.

EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

Ante la pandemia, el comportamiento institucional del Estado y la conducta colectiva de la ciudadanía han evidenciado varias pautas a escala local y nacional. En el primer caso destaca la reafirmación de los patrones de exclusión y desigualdad socioeconómica, vinculada con las decisiones gubernamentales sobre la asignación de recursos públicos para atender la emergencia.

En el segundo, fue relevante el estallido de brotes de inconformidad e intolerancia, en medios urbanos y rurales, que generaron respuestas desde las diversas corrientes de opinión constituidas en torno de lo que se consideró la “estigmatización” de personas, vivas o fallecidas, sospechosas de haber sido contagiadas por el coronavirus. Así se reprodujo el patrón de intolerancia y exclusión prevaletante en la sociedad hondureña, vinculado también con el rechazo de la pluralidad, de la diversidad en todas sus manifestaciones y de todo acto de disidencia.

A este patrón se sumó la escasez de alimentos y el clientelismo político utilizado en muchos casos como criterio para distribuir los limitados recursos públicos puestos a disposición de la población más vulnerable (bolsa solidaria de alimentos, mascarillas de protección), que además de su poca efectividad incluso para mitigar temporalmente la precariedad económica, dejó al descubierto una identidad visual que en la misma imagen reunió la desigualdad económica, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Familias completas se lanzaron a las calles a pedir trabajo, dinero o alimentos; otras se apostaron en los accesos principales de las urbes más pobladas para interrumpir la circulación de vehículos y demandar dinero, frutas o cualquier otro comestible que les permitiera llevar algo de comer a sus hogares. Así se abrazaron la exclusión y la desigualdad con la lucha por la supervivencia, como tres hermanas huérfanas de solidaridad y justicia social.

LA INCERTIDUMBRE ACECHA, EL MIEDO SOMETE

La tendencia principal durante la pandemia fue dominada por la incertidumbre y el miedo, sostenidos sobre las mismas bases que han mantenido a la pobla-

ción hondureña agitada y temerosa durante los más de veinte años consecutivos de violencia, destrucción y muerte que han prevalecido en las ciudades y barrios más populosos: la existencia de enemigos visibles o invisibles que acechan contra la vida porque se nutren de esta. Los imaginarios de violencia y muerte se renovaron y se impusieron sobre una conciencia ciudadana frágil y debilitada, ahora llevada al extremo de su capacidad de resistencia.

Según Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, en 2020 se contabilizan nueve homicidios diarios, principalmente en centros urbanos densamente poblados, pero la criminalidad tiende a extenderse por todo el país. Desde mediados de marzo hasta mediados de julio, la violencia doméstica creció exponencialmente, produciéndose más de 40 mil denuncias o llamadas al sistema de atención de emergencias 911. El promedio es alarmante, 260 llamadas diarias entre enero y julio de 2020.

Las principales afectadas son las mujeres, que en tales denuncias aparecen como víctimas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. Otros datos no son menos alarmantes: los homicidios se sitúan en 44 por cada cien mil habitantes, y solo en el primer semestre de 2020 se produjeron 23 homicidios múltiples con 80 víctimas mortales⁷. Si a la actividad homicida se agregan los miles de casos de extorsión de que es objeto la población en barrios y colonias por las actividades de las maras, se completa un cuadro de violencia multidimensional y una población victimizada a escala nacional.

LA VERDAD Y LA RESISTENCIA ANTIGUBERNAMENTAL

El rumor que desde el 9 de junio recorría la capital hondureña, sobre el despido del doctor Osmín Tovar como director del Hospital Escuela Universitario (HEU), una información que nunca fue confirmada ni desmentida por las autoridades de salud, provocó un respaldo inmediato de los trabajadores de dicha institución, que dejó claro que el espíritu gremial se había fortalecido desde que se decretó la cuarentena.

En este caso, lo relevante no fue el respaldo que el doctor Tovar recibió de sus colegas, sino la causa

⁷ Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, entrevistada en los noticieros de la radioemisora HRN, Tegucigalpa, 18 de julio de 2020, 12:10 M.

que estos invocaron para hacerlo: que se le despedía “por haber dicho la verdad sobre la precaria situación prevaleciente en el HEU”, reavivando ante la opinión pública el tema relacionado con los defensores y los detractores de la verdad, de notorio interés público durante la pandemia.

Poco tiempo después, la visita de una “comisión de veeduría social” del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) a las instalaciones del HEU trajo el tema nuevamente a la discusión pública. Antes incluso de elaborar un informe escrito pormenorizado de los resultados de la visita, el portavoz de la comisión apareció ante los medios de comunicación para “informar” que “se descubrieron 50 camas en el tercer piso del hospital, mientras muchos pacientes son atendidos en una carpa fuera del hospital...”, lo cual —según declaró— lo había “indignado”.

Al desmentir las autoridades hospitalarias que las camas “descubiertas” estuvieran ocultas para negarles su uso a los pacientes de la carpa, una doctora especialista en neumología se limitó a decir que el vocero del Fonac “no sabe nada sobre lo que se necesita para atender a un paciente contagiado por Covid-19”. La especialista detalló el equipo indispensable para atender a tales pacientes, y que el hospital no poseía, a pesar de las enormes sumas aprobadas en el Congreso Nacional para que el Ejecutivo respondiera ante las necesidades en salud.

En este pequeño acto —cuyo escenario fue el principal centro asistencial del país—, quedó al descubierto que la verdad sobre los hechos estaba reñida con la voluntad del Ejecutivo de atender las demandas sanitarias a cuentagotas. Poco después surgieron interrogantes sobre la legitimidad que asistía al Fonac para llevar a cabo labores de veeduría pública, siendo una entidad dependiente del Ejecutivo, con una dudosa autonomía.

LA SALUD Y EL SISTEMA PENITENCIARIO

La crisis en salud se produce paralelamente a otras crisis, como la que enfrenta el sistema penitenciario, un universo en el que los conflictos que estallan rutinariamente es sus recintos llegan hasta la opinión pública divididos en “versiones” distintas sobre un mismo hecho. Prevalece una percepción construida sobre la incertidumbre acerca de las causas de inexplicados homicidios contra privados y privadas de libertad, a la que ahora se sumaban las denuncias de los familiares de

los reclusos según las cuales el número de contagiados por Covid-19 en las cárceles era mucho mayor que el reconocido por las cifras oficiales.

Como ocurre también con el cuestionamiento de los datos oficiales relativos al número de pruebas que se practican a los supuestos contagiados, con la cifra actualizada del número de fallecidos por esta enfermedad y las cifras exactas de los fondos asignados por el gobierno para atender la pandemia, en el sistema penitenciario prevalece igual incertidumbre sobre la veracidad de la información oficial relativa a este ámbito de la actividad gubernamental.

Lo novedoso en lo revelado por la pandemia en este caso, es que el enfrentamiento entre diversas “versiones” de la realidad en cada microcosmos de la sociedad hondureña tiene presencia y reconocimiento en el espacio público, porque es en este y en los medios de comunicación donde se escenifican debates que, además de convocar el interés público, también forman parte de un proceso de reapropiación social del espacio público a través de una participación política identificada con la ética y los derechos ciudadanos.

En esta sonora pugna en torno a “la veracidad de la información”, entre portavoces oficiales y actores ciudadanos, la pandemia redescubre la falta de confianza de la ciudadanía en el gobierno, así como la indiferencia, el desconocimiento o el menosprecio gubernamental ante la información que se produce en organizaciones, medios alternativos de comunicación y espacios de participación ciudadana.

Sin embargo, esta descalificación mutua entre actores clave del debate público va más allá de los niveles habituales de desconfianza ciudadana —por lo general superiores al 80 por ciento⁸—, para reflejar que durante la pandemia se profundizó la precariedad de los vínculos entre autoridades gubernamentales y ciudadanía.

Así, el debate público o el enfrentamiento entre “versiones” contrapuestas de la realidad, se convirtió en un indicador del agotamiento de una gobernabilidad basada en el control absoluto de los poderes del Estado, de las decisiones, los recursos públicos y un modelo de información construido sobre verdades a medias o mentiras completas.

8 Véase, por ejemplo, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), Sondeo de Opinión Pública, décima edición, Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2020, El Progreso, julio de 2020.

EL DERECHO A SABER

Para muchos, la información creíble es la que cuestiona la verdad de las cifras oficiales. En el trasfondo de muchas dudas e inquietudes, que forman parte del debate público, se encuentra la reivindicación ciudadana del derecho a saber, a ser informada y a recibir información veraz y transparente sobre la gestión pública.

Aunque a primera vista estos temas no son de vida o muerte, tratan sin duda sobre la vida y la muerte, el tema principal durante la pandemia. Sus consecuencias impactan en la conciencia pública y construyen las percepciones que esta elabora sobre lo que ocurre en la realidad cotidiana.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha producido un debate específico o una reflexión colectiva sobre la producción de información institucional de interés público, como hecho social y acto de responsabilidad por parte del Estado.

EXCLUSIÓN Y DISPUTA DE “SABERES”

El saber y el conocimiento sobre la Covid-19 fueron contruidos, fundamentalmente, como riesgo y amenaza de origen desconocido. La primera reacción pública ante la pandemia fue la duda y el descreimiento sobre su existencia “real”. Aún el 12 de junio, a tres meses de iniciada la cuarentena, los medios de comunicación reproducían llamados y mensajes de instituciones y personalidades que aconsejaban “tomar en serio” la pandemia, utilizar mascarillas y todos los medios de protección que sugería la campaña oficial sobre la “responsabilidad personal” ante la Covid-19.

En algún momento, pareció que se llevaba a cabo un plebiscito que obligaba a tomar posición, a favor o en contra, sobre la existencia del virus. Así se fue configurando el comportamiento colectivo ante la pandemia, con acentuadas manifestaciones de “descuido” o “indiferencia”, que pronto se convirtieron en una avalancha de respuestas poco amistosas para calificar la conducta “del hondureño”. Se dijo entonces que es “desobediente”, “ignorante”, “rebelde”, “burro”, “valeverguista”, “irrespetuoso” y “arbitrario” en su comportamiento social.

En el extremo opuesto, se comenzó a hablar sobre el trabajo que realizaban “científicos hondureños” dedicados a encontrar un tratamiento para combatir, o al menos disminuir “la carga viral” del contagio. Así se llegó a presentar dos combinaciones de medicamentos,

para ser utilizadas según la etapa en que se hallara la enfermedad.

De ahí derivaron el “tratamiento MAIZ” y el “tratamiento Catracho”. Como sucedió en el momento inicial de la pandemia, la opinión pública se dividió en bandos a favor y en contra sobre la eficacia de los tan publicitados tratamientos. Y también se les convirtió en artículo de la desconfianza pública, argumentando incluso que “los tratamientos” no eran ningún “descubrimiento”, resultado de largos procesos de investigación científica, sino que ya existían “en los protocolos de la secretaría de Salud”.

Entonces, la curiosidad se fue focalizando en la sospecha —muy presente en el ambiente durante toda la cuarentena— de la existencia de algún interés privado en promover la adquisición de los medicamentos incluidos en ambos tratamientos. A pesar de que el uso de estos se formalizó en la mayoría de los centros hospitalarios del país, no hubo unanimidad respecto de la eficacia y las virtudes de la receta local para reducir “la carga viral” de la Covid-19.

Sin embargo, se aceptó que era la única alternativa disponible en el sistema de salud pública, aplicada y distribuida gratuitamente. Así, el saber quedó asociado al momento de la pandemia y la desconfianza pública a la etapa anterior a esta, en que “la verdad oficial” ya carecía de toda credibilidad.

Esta forma de construir la realidad, a partir de un saber que puede ser cuestionado en su forma y contenido, condujo a falsos dilemas y decisiones erradas, que también se transformaron en estrategias incoherentes y con costos económicos adicionales, como ocurrió con una breve “apertura de la economía” y su “cierre” poco tiempo después.

El conocimiento preexistente sobre la precaria situación de las instituciones públicas de salud, el diagnóstico, fue ignorado al momento de elaborar las respuestas gubernamentales para enfrentar la Covid-19, con enormes costos para el erario y la salud pública. Se evadió focalizar la respuesta estatal en mejorar la precaria infraestructura; por ejemplo, los 1,700 centros de salud que en todo el país requieren ampliaciones y mejoras. Tampoco se quiso “convertir” el HEU en un “hospital Covid”, como sugería el personal de este centro asistencial y el Colegio Médico; ni invertir en otros hospitales públicos que asumieron la mayor carga en la atención de los miles de contagiados.

El conocimiento efectivo de la situación de las instituciones sanitarias, en poder del personal de salud, utilizado como punto de partida para sus propuestas, orientadas principalmente hacia una inversión pública con resultados sostenibles para el sistema público de salud, cayeron en saco roto.

En su lugar, con un ostensible despliegue de grandilocuencia y proselitismo político, el gobierno anunció, primero, su intención de construir más de 90 hospitales en todo el país; y después anunció la adquisición de siete “hospitales móviles”, incumpliendo así el anuncio inicial de construir los 90 hospitales. Asimismo, se ignoró la sugerencia de invertir recursos en labores de prevención de la Covid-19 y, a la vez, elaborar una estrategia de prevención de enfermedades ya endémicas, como el dengue tradicional y grave.

RESULTADO: SUSPICACIA GENERALIZADA

En lugar de atender el conocimiento implícito en la experiencia y la ubicación in situ del personal de salud, el gobierno optó por invertir casi 48 millones de dólares en adquirir siete “hospitales móviles”. La polémica que hoy envuelve esta decisión, por las sospechas de corrupción que recaen sobre la transacción realizada, demuestra que las decisiones erróneas no responden, necesariamente, a una construcción deficiente o poco informada sobre la realidad. Más bien, puede tratarse de una visión que no fundamenta la toma de decisiones relacionadas con la inversión pública pensando en satisfacer la demanda social y las prioridades de esta, sino en utilizar las necesidades reconocidas previamente como un recurso para encubrir fines que hasta la fecha no han sido declarados públicamente.

Desde la perspectiva anterior, el resultado obtenido es una construcción dolosa de la realidad objetiva de la demanda y las carencias sociales que, en este caso, se convirtieron en el fundamento de las respuestas, las estrategias y decisiones sustentadas por el gobierno durante la pandemia.

Los informes de investigación y veeduría presentados por organismos como el CNA y la ASJ respaldan la suspicacia generalizada sobre los propósitos “reales” detrás de las decisiones gubernamentales que —como en el caso de los 90 hospitales— generaron expectativas favorables en la ciudadanía.

Por tanto, a más de cien días de iniciada la cuarentena, la reacción colectiva se concreta en una vi-

va condena contra la corrupción que se sospecha de algunas entidades públicas y contra las estrategias gubernamentales ante la pandemia. Los resultados de estas pueden evaluarse en los dos ámbitos principales de dichas estrategias: la salud y la economía.

LA SALUD

La Covid-19 encontró al sistema de salud pública como un condenado a muerte, en espera del tiro de gracia que lo liquidara de una vez, como se preveía años atrás cuando una nueva legislación amenazaba con privatizarlo. Sin embargo, se le condenó a morir a fuego lento, a padecer de calamidad el resto de sus años en el abandono, sometido a un deterioro progresivo hasta su parálisis total. Y no podía ser de otra manera, este moribundo sistema de salud no es un monumento a la equidad social, sino el emblema de la desigualdad social; precario en casi todo, incluso en la modesta apariencia de la mayoría de sus instalaciones. Su destrucción sistemática sigue siendo el símbolo de una orientación y una elección consciente, del Estado, para erradicar “lo público” de su agenda de responsabilidades.

Para responder a la pandemia, el gobierno aplicó una receta neoliberal de principio a fin, cuya característica principal fue otorgar un apoyo a cuentagotas al sistema sanitario y ninguna al sistema educativo público. En parte, este fue uno de los generadores de los conflictos, desencuentros, rechazos y condenas del personal de salud contra la desatención y el abandono del sistema sanitario público por las decisiones gubernamentales. Algunas de estas causaron asombro y repudio en la opinión pública, como la de dotar de manera insuficiente de equipo de bioseguridad a los médicos y enfermeras, así como la demora de hasta dos meses en el pago de salarios en algunos hospitales, según lo denunció el personal del Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.

La propuesta de asesoramiento del Colegio Médico siguió sin ser escuchada por el gobernante, que tardíamente incorporó a un reducido número de médicos especialistas en algunas labores de apoyo. El escándalo en la adquisición de los “hospitales móviles” representa una bofetada al personal de salud, que por diversos medios sugirió la ampliación y mejora de los centros hospitalarios existentes. Así se acumularon las críticas, los resentimientos, las exigencias y los desentendimientos del personal de salud con el gobierno, sin pausa durante la pandemia.

Algunos fabricantes locales, especialmente de San Pedro Sula, también presentaron sus reclamos, afirmando que podían haber construido “hospitales modulares” en Honduras, a un costo mucho menor y, a la vez, generar empleo y dinamismo en las industrias locales.

Se quejó también el Colegio de Arquitectos que, al estallar el escándalo, informó que varios meses atrás elaboró y presentó ante Invest-H una propuesta con sugerencias concretas para mejorar el ordenamiento y la distribución del espacio interior en los hospitales nacionales, pero su propuesta tampoco fue atendida.

Así se configuró un contexto en el que, a las sospechas de irregularidades o malos manejos, que motivaron al CNA a llevar a cabo una serie de investigaciones y a denominar sus respectivos informes como “Corrupción en tiempos del Covid-19”, se sumó la información divulgada sobre la existencia de un fideicomiso administrado por una institución bancaria, con experiencia en la adquisición de insumos médicos, que tampoco fue consultado para adquirir los referidos hospitales. De hecho, en ese preciso momento se juntaron los ingredientes con los que se sazónó la crisis de la pandemia: incertidumbre, sospecha y desconfianza.

HÉROES Y VILLANOS ENTRAN EN ESCENA

El personal de salud apareció ante la opinión pública en una doble condición; primero como héroes por su abnegado desempeño en la atención de miles de pacientes contagiados, y después como víctimas de la mezquindad de la receta neoliberal que los convirtió en parias de un sistema que reiteradamente les negó los equipos de protección indispensables para efectuar sus labores, que les hizo trabajar hasta la extenuación para evitar la contratación de personal de reemplazo, y cuando cumplían un “doble turno” continuo debían utilizar pañales para no despojarse de sus trajes al acudir a un lavabo. Percibieron que el gobierno les ve únicamente como generadores de costos para el erario, desconociendo así que la principal responsabilidad del Estado es velar por la protección de sus ciudadanos y ciudadanas.

Los escándalos de corrupción contribuyeron a acentuar este sentimiento en el personal de salud, como parias damnificados del neoliberalismo al confrontar su precaria situación con las millonarias sumas que el gobierno recibía en calidad de préstamo de los organismos multilaterales de crédito, y que se gastaban a manos llenas con las consecuentes denuncias de irregularidades en las transacciones efectuadas.

En este escenario de asistencialismo por goteo y clientelismo por costumbre, de abandono y precariedad, se desaprovechó la oportunidad para llevar a cabo una inversión pública sostenible y duradera en el área de salud. Por el contrario, la insistencia gubernamental en mantener el sistema sanitario en la penuria sirvió para reafirmar el carácter excluyente de toda decisión estatal relacionada con las necesidades sociales, porque no ve en la inversión social ganancias y beneficios tangibles.

Esta conducta gubernamental instituyó el conflicto, y a la vez al actor social —los “héroes” vestidos de blanco— que hoy cuestionan la mala gestión de la pandemia, la corrupción y la sordera oficial ante sus propuestas, sugerencias y reclamos. Una frase de los galenos lo resumió todo en una mordaz paradoja: “Ojalá hubiera suficiente oxígeno en los hospitales, como hay gas lacrimógeno en los cuarteles”, acompañada de una imagen del mandatario y en el fondo una foto con imágenes de represión contra una protesta popular.

LA ECONOMÍA, OTRA TRAGEDIA ANUNCIADA

A finales de junio, la mayoría de los observadores del comportamiento económico de Honduras coincidieron en señalar que las perspectivas, a distintos plazos, son muy limitadas. Algunos, como el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, Rafael Medina, ubicaron el mayor impacto económico de la crisis en la micro y pequeña industria, partiendo de que el 90% del “parque industrial” del país lo constituyen las pequeñas empresas, y que el 70% de la economía se concentra en la informalidad.

Por tanto, la crisis que ahora apenas asoma impactará principalmente en los agentes económicos cuya supervivencia depende del ingreso diario. La especulación en los precios, la reducción de los empleos y los ingresos, el incremento del costo de vida, y sobre todo la falta de alternativas inmediatas o en el futuro cercano, configuran un periodo de crisis que puede prolongarse hasta una fecha todavía incierta.

La política gubernamental ante la pandemia, calificada por sus críticos como “errática” e “incoherente”, ha contribuido a incrementar las consecuencias económicas de la cuarentena por la falta de planificación, de coordinación con otros actores y de tolerancia ante opiniones que cuestionan las decisiones gubernamentales, incluyendo entre estas las de importantes actores de la empresa privada.

El primer gran momento del descontento empresarial se produjo cuando a mediados de junio se dio marcha atrás en la “apertura inteligente” de la economía en su primera fase, sin considerar —según los empresarios— los gastos de reapertura y la inversión económica en medidas de bioseguridad y el pago de salarios, a cargo de los propietarios de negocios. La tragedia sanitaria se estaba convirtiendo en tragedia económica.

LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU FUNCIÓN SOCIAL

El desborde de los hospitales públicos condujo a una discusión sobre el papel del sistema de salud privado y, en consecuencia, sobre el carácter social de la propiedad, particularmente al plantearse sugerencias respecto de la función social que debe tener la infraestructura hospitalaria de carácter privado.

En el núcleo de esta discusión subyace la pregunta sobre el papel que debe jugar el sector privado en las condiciones particulares de una emergencia sanitaria, así como el papel que le corresponde al Estado en tanto que regulador de la actividad empresarial y, a la vez, garante de la salud de la población.

La decisión de la mayoría de los hospitales privados fue no atender pacientes de Covid-19, con diferentes argumentos, como los costos de la atención a tales pacientes, aparte de que decidieron focalizar sus actividades en atender otras patologías. Una circunstancia de esta naturaleza, inexistente en contextos anteriores, vino a demostrar súbitamente que la privatización de los servicios sociales, particularmente los de salud, no es la panacea que vendría a resolver las insuficiencias de la salud pública. En ese contexto, cabe preguntar: ¿Habrían podido, los hospitales y clínicas privadas, afrontar solos la emergencia de la pandemia?

El debate sobre los temas de interés público se configuró en torno de la proporción de recursos que la sociedad puede disponer por medio de los bienes y servicios públicos a su disposición. En coyunturas anteriores, cuando se ha discutido su apropiación privada tras un proceso de privatización, argumentando la necesidad de mejorar, modernizar y aumentar su eficiencia, han surgido agudos conflictos con los gremios laborales de la salud que defienden la institucionalidad pública en salud y la reivindican como un derecho legítimo de la población. No obstante, lo que ha prevalecido ha sido una imagen desfavorable para las entidades de salud

pública, cuya precariedad y carencias han devenido un carnet de identidad para sus instituciones.

En el contexto de tales conflictos, el Estado es cuestionado por ambas partes, siendo señalado como un privatizador neoliberal por los defensores de lo público, y como un sector ineficiente por los promotores de la privatización. En el trasfondo de estas discusiones se encuentran dos posturas enfrentadas: la aspiración ciudadana a ejercer sus derechos legítimos, con salud gratuita y de calidad; y el afán privado de convertir la salud en un negocio lucrativo, excluyente y al margen del cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población.

UN CAMBIO DE PERCEPCIÓN

En esta coyuntura, la percepción pública sufrió un cambio radical al identificar las fortalezas del sistema público de salud y, simultáneamente, las debilidades de los servicios de salud privados. Resultó evidente que el sistema sanitario público asumió casi la totalidad de la responsabilidad en la atención de los contagiados por Covid-19, en tanto que los pocos centros privados que estuvieron dispuestos a atender estos pacientes fueron señalados por tener precios prohibitivos para la mayoría de la población, que no tendría otra opción que dejarse morir.

Esta experiencia es una referencia indispensable para considerar, desde una perspectiva de derechos adquiridos y con la intermediación reguladora del Estado, otros temas de interés público como la educación y el acceso a servicios indispensables como el agua, la energía eléctrica, la conectividad a Internet o la infraestructura de carreteras, que sumados a los servicios de salud constituyen un núcleo estratégico para la supervivencia de la población.

En la coyuntura que seguirá a la finalización de la pandemia, estos temas pueden ser prioritarios en una agenda política y social que se proponga llevar a cabo transformaciones que conciban al ser humano como la principal razón de existencia de las políticas públicas y la acción protectora del Estado, con mucha mayor justificación ahora que el país debe enfrentar un contexto dominado por múltiples carencias y nuevas exclusiones.

EL INDIVIDUO Y LA LEY, ¿QUIÉN DEBE SER PRIMERO?

La “ignorancia” y el “analfabetismo” invocados en el debate público como causas de “desobediencia” a las normas establecidas en torno a la cuarentena, se explican en la medida que el modelo neoliberal de sociedad nunca se propuso “educar ciudadanos”. Si tuvo algún propósito, este fue el de convertir a los ciudadanos en “individuos”, que devienen obligados a asumir el costo de su propia existencia como un acto de responsabilidad individual. Sin embargo, en el contexto en que se desenvuelve este “individuo” existe un antecedente, según el cual, las leyes no han sido hechas para cumplirlas, sino para transgredirlas.

Desde esa perspectiva, la voluntad disciplinaria y la coacción implícitas en las disposiciones gubernamentales, son cuestionadas desde una voluntad similar para desconocer el imperio de la ley, de la misma forma en que desde el poder se legitima una elección presidencial ilegítima o se manipula la legislación nacional para “blindar” la corrupción.

Durante la pandemia, este desacato a la ley recorrió un amplio espectro de temas, que fueron desde la especulación y el incremento del precio de los alimentos, los medicamentos y otros productos esenciales, hasta las denuncias de que la circulación de vehículos se multiplicó por la existencia de “salvoconductos” falsos.

La misma voluntad de desacato —aunque no siempre por la misma razón— generó actos de irresponsabilidad social en muchos ámbitos, desde el rechazo del uso de mascarillas de protección y las aglomeraciones en los mercados, hasta las transacciones de adquisición denunciadas por el CNA y la ASJ como sospechosas de corrupción.

Por tanto, la percepción del fenómeno del desacato y la transgresión de la ley cambia cuando se considera un espectro más amplio de los temas más visibles en el comportamiento de los individuos en la sociedad y de los individuos en las instituciones estatales.

El resultado no puede ser otro que la confrontación de los intereses individuales en el ámbito de la sociedad y del Estado; sin embargo, sus consecuencias —y sus costos— son de orden social, como se deduce en los efectos de la multiplicación del número de contagiados y la masiva destrucción de recursos públicos implicada en actos de corrupción como el ya corroborado en el IHSS y los que ahora están siendo investigados.

En suma, el individuo que en la sociedad neoliberal suplanta al ciudadano en las esferas mencionadas y que concibe el interés privado por encima del interés público, ha constituido con sus actos —antes y después de la pandemia— un obstáculo para la cohesión y el consenso en la sociedad hondureña. El resultado visible: la reducción del potencial para enfrentar la pandemia colectivamente y con abundantes recursos públicos.

HACIA UN BALANCE PROVISIONAL

LA CRISIS CONSTRUIDA

La crisis sanitaria y socioeconómica se ha construido en lo cotidiano, en el día a día de su desenvolvimiento; desde la incertidumbre y en la forma de un experimento con episodios de ensayo y error. El protagonista principal ha sido el Estado, con lo cual se acentuó el carácter político de las decisiones asumidas, así como sus consecuencias. Estas pueden llegar a ser catastróficas, por el agotamiento de los recursos disponibles y de las alternativas de solución tanto en el sector público como en el privado, siendo esta su consecuencia principal. En este contexto, se puede afirmar que el rasgo esencial y común a todas las discusiones públicas durante la pandemia fue en torno de la corrupción y el mal gobierno.

LA CORRUPCIÓN CONTINUADA

Los límites de la corrupción son los mismos que tiene el Estado de excepción: se enmarca fuera de la ley, pero actúa como si fuese legal. Así, las redes subsidiarias de la corrupción, de las que se sospecha están ocultas tras los negocios que se generan en el Estado, se ubican también por encima de la ley y constituyen desde su posición privilegiada una estructura de poder que actúa en el ámbito nacional e internacional, amparada por la impunidad predominante en el país. Este es el principal logro y el cambio más significativo que se ha operado en el proceso de transición del Estado-botín al Estado fallido, lo cual está conduciendo a una acelerada disolución del modelo republicano de gobierno y de sus instituciones, entre las cuales la más importante es el imperio de la ley y la igualdad de los ciudadanos ante esta.

Este proceso está culminando con la imposición de un nuevo Código Penal, cuestionado por flexibilizar las penas para delitos de corrupción, entre otros que se señalan por el mismo motivo. Como sostiene el ex Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, en una semblanza del gobierno actual

...inició un proceso agresivo de privatización de funciones y servicios públicos, y para asegurar el continuismo amplió la legislación represiva y fortaleció los cuerpos armados, acompañada de una amplísima normativa protectora de sus acciones dolosas, entre las que destacan las conocidas popularmente como “ley de secretos”, “ley de inteligencia”, “ley del pacto de impunidad”, “ley del blindaje” y, la joya de la corona de la impunidad, el Código Penal⁹.

Así se ha impuesto un proceso de suplantación permanente de las leyes, los principios y las instituciones, debilitando profundamente el Estado de derecho. Esta vía de suplantación ha conducido, además, a establecer en lo político un poder absoluto, cuya institucionalidad no responde a las necesidades de la sociedad, sino a los imperativos de la corrupción. Como lo está demostrando la coyuntura de la pandemia, cuando se trata de las necesidades sociales o de una administración eficiente de los recursos públicos, este poder es totalmente ineficaz.

Por esta vía, el antiguo “Estado-botín” se está transformando en un “Estado fallido” al servicio exclusivo de la corrupción, que en los últimos años ha ganado terreno para legalizar sus fines ilegítimos en la forma de leyes formalmente legítimas. En esto consiste el pacto de corrupción e impunidad que hoy es la voluntad de la casta gobernante, sancionada como ley en el nuevo Código Penal.

LA VERDAD EXIGE LO SUYO

Si la verdad reclama hoy sus derechos y sus créditos sociales, es porque la ficción que le daba sustento a la república, la democracia y el Estado de derecho, fracasó por completo. En la circunstancia de la pandemia, se exige la restitución de la realidad en el lugar que hoy ocupa la ficción fracasada.

Los primeros pasos en esa dirección están en marcha desde el momento en que se interroga y cuestiona a una democracia que ha mantenido en harapos su sistema sanitario y educativo, y cuando los productores agrícolas reconocen que el país no es capaz de producir los alimentos que su población consume.

EL CUENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Una revelación fundamental de la pandemia es la de visibilizar el carácter ficticio de la transparencia administrativa y la rendición de cuentas, del acceso a la información pública y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de la población.

Esta visibilidad es el resultado del plebiscito al que la pandemia sometió a cada una de las construcciones políticas que sustentan el sistema republicano de gobierno; entre otras, la existencia de instituciones contraloras del Estado, la autonomía de los poderes de este, la funcionalidad y capacidad de respuesta de las instituciones y, sobre todo, la existencia de ciudadanía.

Fueron las sospechas de corrupción, insertas en el debate público durante la coyuntura de la pandemia, las que convocaron a este plebiscito sobre la finalidad última del ejercicio del poder en Honduras, haciendo desaparecer cualquier ficción preexistente sobre la institucionalidad de los órganos republicanos y poniendo en cuestión incluso el próximo proceso electoral.

La existencia en esta coyuntura de un “vacío político”, por la ausencia del poder legítimo que ha sido suplantado por la corrupción, es solo la consecuencia lógica del proceso precedente por el que se ha “desmontado” las instituciones, se les ha sustraído o recortado sus funciones y se ha puesto todo su poder al servicio de la ilegalidad y la ilegitimidad.

UNA PANDEMIA CON TRES JINETES

El autoritarismo, la intolerancia y la violencia son tres rasgos de la vida cotidiana en Honduras, que en la coyuntura de la pandemia se concretaron en hechos tales como el rechazo explícito de los contagiados por Covid-19, vivos y muertos, crímenes individuales y masacres, violencia doméstica y femicidios, incluso el secuestro de cinco jóvenes garífunas en el municipio de Tela¹⁰.

Su continuidad —incluso su combinación en la cotidianidad de la pandemia— demuestra que tales rasgos constituyen manifestaciones específicas de las formas de ejercicio del poder que más se reproducen en la sociedad hondureña, convirtiéndose así en factores constitutivos de una realidad opresiva y desgarradora.

9 Edmundo Orellana, “Transparencia”, *La Tribuna*, 22 de junio, 2020.

10 La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofranch) denunció este hecho, que se produjo en las últimas semanas de julio, en un comunicado que da cuenta del secuestro de los cinco jóvenes; entre estos, el presidente del Patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Hasta el 26 de julio se desconocía su paradero.

LA DOLOROSA CONCIENCIA DE LA IDENTIDAD NACIONAL

En ningún otro momento de la historia de Honduras, como en los primeros cien días de esta pandemia, se ha escuchado decir en los medios de comunicación —con tanta insistencia y a tantas personas— que lamentan el hecho de “ser hondureños”, reconociendo sentir vergüenza por tal motivo.

Las causas esenciales del deterioro de la conciencia nacional: la corrupción pública, la falta de oportunidades, el menosprecio por la protección de la vida por parte de las autoridades, la ausencia de justicia y el ultraje a la dignidad individual y colectiva, entre otras que obligan a la población a huir de “su” país o a refugiarse en una resignación paralizante.

LA POBREZA Y LA CORRUPCIÓN, SIN MASCARILLA

Hoy, la pobreza y la corrupción pueden sentarse a hablar de negocios, estando a un metro de distancia, y no porque así lo demande el nuevo protocolo, sino más bien porque se han aproximado lo suficiente como para verse las caras y decidir si continúan atadas o no al mismo contrato social y político.

En pocas ocasiones de su historia, Honduras se ha sentido tan miserable como en esta danza de millones de dólares obtenidos a nombre de la pandemia y de las

enormes carencias de la población. En ese contexto surgió la firme convicción de que la abundancia de recursos solo beneficiará a unos pocos, los mismos de siempre, que pronto se transformó en una amarga sensación de exclusión social y menosprecio en la mayoría de la población.

Esto es lo que está induciendo a que una porción cada vez mayor de la opinión pública considere que llegó el momento de fortalecer los sistemas públicos de salud y educación, y en general “lo público”, que implicaría un giro importante hacia una concepción más integral de este. Lo cual apunta a que la inversión pública y el Presupuesto General de la República se constituirán, en el corto plazo, en un nuevo campo de conflicto, presionando sobre los recursos públicos disponibles.

El agravamiento de estos factores, en presencia de la pandemia, demuestra que lo que está en cuestión es el paradigma neoliberal de economía y sociedad, que produce y reproduce las condiciones que le dan vigencia a la desigualdad y la exclusión social.

En la ruptura de este paradigma puede jugar un importante papel el debate sobre el interés público y el interés privado, entre la necesidad de construir bienes públicos y el imperativo de revalorar el peso del aporte del interés privado en la construcción de la sociedad hondureña.

El antiguo “Estado-botín” se está transformando en un “Estado fallido” al servicio exclusivo de la corrupción, que en los últimos años ha ganado terreno para legalizar sus fines ilegítimos en la forma de leyes formalmente legítimas.



El derecho a la verdad en la adquisición de bienes y servicios en la emergencia sanitaria: Caso Invest-H

RAFAEL JEREZ MORENO*

Las compras multimillonarias realizadas por Invest-H no dejan de asombrar en un país que ya debería estar curado de espantos. Aquí se abordan los hallazgos de una auditoría social realizada por la ASJ sobre los procesos de adquisiciones de 450 ventiladores pulmonares mecánicos y 250 mil pruebas de detección de Covid-19. Los incumplimientos de la normativa interna son inocultables, lo que da lugar a la comisión de “presuntos” actos de corrupción.

Desde que inició la propagación del virus Covid-19 en el territorio nacional, los poderes Ejecutivo y Legislativo, conscientes de la precariedad del sistema de salud pública, y su débil capacidad instalada para enfrentar una pandemia de esta naturaleza, procedieron a declarar un estado de emergencia sanitaria y, posteriormente, la restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales para mitigar los efectos del virus. No obstante, sabían que eso no sería suficiente.

Para un régimen constantemente acusado de participar en actividades ilícitas, y con niveles de legitimidad y confianza ciudadana en constante declive, la coyuntura también supuso una oportunidad para re-

cuperar un poco de credibilidad. La magnitud del riesgo que suponía la pandemia propició que, durante las primeras etapas de propagación, el gobierno recibiera el apoyo de algunos sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil.

Con el paso de los días, el Congreso Nacional otorgó facultades a la Secretaría de Salud (Sesal), a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y a la Secretaría de Estado en el Despacho de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Sinager), para adquirir bienes y servicios destinados a atender la emergencia sanitaria.

Después de una serie de denuncias ciudadanas por presunta corrupción en las adquisiciones realizados por Invest-H, esta institución suscribió un acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) para efectuar una auditoría social sobre cinco procesos de adquisiciones. De los hallazgos de la ASJ, se extraen conclusiones que dan cuenta de inconsistencias que funcionarían como terreno fértil para la comisión de actos de corrupción.

* Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Investigador de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Columnista en diario *La Tribuna*. Este análisis es producto de un estudio científico personal, y no refleja necesariamente la posición institucional de la ASJ.

Sin menoscabo de las investigaciones que deben realizar los órganos constitucionalmente facultados para ello, es preciso analizar la preservación de condiciones de integridad en los procesos de contratación pública, especialmente cuando se trata de adquisiciones encaminadas a garantizar la prestación de un servicio público, el pleno goce y disfrute de un derecho humano, como es la salud, en el contexto de la emergencia sanitaria.

El propósito del presente artículo es analizar los hallazgos de la ASJ sobre dos procesos de adquisiciones llevados a cabo por Invest-H: uno de 450 ventiladores pulmonares mecánicos y otro de 250,000 pruebas de detección de Covid-19, en relación con los lineamientos de adquisición establecidos en su normativa interna, y los efectos de potenciales actos de corrupción a raíz de las inconsistencias detectadas en dichos procesos y la protección del derecho humano a la salud.

INVEST-H EN EL ORGANIGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Un mes después de haberse iniciado la propagación del virus a escala mundial, el 10 de febrero de 2020, mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020, el Poder Ejecutivo procedió a declarar un Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, control y garantía de la asistencia médica para las personas afectadas por el dengue y ante “la probable ocurrencia de infección por coronavirus”.

Unos días después, el 11 de marzo de 2020, se confirmaron los dos primeros casos de Covid-19 en Honduras. Posteriormente, el Poder Ejecutivo declaró la restricción de derechos constitucionales mediante el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, entre ellos los establecidos en los artículos 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 de la Constitución de la República, al tenor de su artículo 187, el cual dispone la procedencia de la restricción de derechos en casos de invasión al territorio nacional, perturbación grave de la paz, epidemia o cualquier otra calamidad general.

El 13 de marzo de 2020, el Congreso Nacional emitió el Decreto No. 31-2020, que contiene la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19; y, el 2 de abril de 2020, mediante el Decreto No. 33-2020, aprobó la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19.

En ambos cuerpos normativos, el Congreso autorizó a la Sesal, Invest-H y Sinager a efectuar las compras de obras, bienes y servicios necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia provocada por la Covid-19, mediante el mecanismo de contratación pública directa.

¿CÓMO SURGIÓ INVEST-H?

Antes de analizar las irregularidades de dos de las compras realizadas por Invest-H hay que preguntarnos ¿cómo surgió esta institución? El primer antecedente proviene del Decreto No. 233-2005, a través de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio, cuyo objeto era establecer el marco normativo de ejecución del Convenio del Desafío del Milenio (en adelante el Convenio), suscrito en Washington, D.C., el 13 de junio de 2005, entre los representantes del gobierno de los Estados Unidos, actuando por medio de la Corporación del Desafío del Milenio y el Poder Ejecutivo de la República de Honduras.

El Convenio tuvo como objetivo contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible del país a través del incremento de la productividad y las habilidades comerciales de los agricultores, y la disminución de los costos del transporte entre los centros de producción y los mercados nacionales, regionales y mundiales.

Para tal efecto, el Convenio contempló la creación de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-Honduras), compuesta por dos instancias: el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva. Para el ejercicio de sus facultades, estas entidades estarían sujetas a lo dispuesto en el Convenio y la Ley.

La Ley, en su artículo 38, determinó que su vigencia estaría sujeta a lo dispuesto en el Convenio, el cual estableció un plazo inicial de cinco años, finalizando el 20 de septiembre de 2010. Posteriormente, el Congreso Nacional determinó ampliar el funcionamiento de la Cuenta del Desafío del Milenio, el 23 de mayo de 2013, mediante el Decreto Legislativo No. 87-2013, por un plazo de seis años, hasta el 14 de junio de 2019.

En este contexto, el 6 de marzo de 2014, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. PCM-006-2014, determinó el cambio en la denominación de Cuenta del Desafío del Milenio a Invest-H (Inversión Estratégica de Honduras). Cabe mencionar que, con el transcurso del tiempo, Invest-H ejecutó proyectos con

fondos nacionales, y con fondos de diferentes organismos de cooperación y de financiamiento externo, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Finalmente, mediante el Decreto Legislativo No. 16-2017, del 23 de mayo de 2017, el Congreso Nacional determinó ampliar indefinidamente la vigencia de la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio, quedando Invest-H adscrita a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

LA AUDITORÍA SOCIAL SOBRE LAS ADQUISICIONES DE EMERGENCIA

Como se dijo al inicio, el análisis se centrará en dos procesos de adquisiciones ejecutados por Invest-H en el marco de la pandemia de Covid-19. Es preciso aclarar que la vigencia de un Estado de restricción de derechos constitucionales, no implica la sujeción de las compras efectuadas por Invest-H a una legislación especial. Sus procedimientos deben cumplir con lo dispuesto en la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio y su reglamento, y lo señalado en el Convenio. Asimismo, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), mediante opinión legal No. 001-2020, manifestó que

salvo mejor criterio considera que los procesos de contratación que realiza INVEST-H se realizan bajo la normativa de MCC/La Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-Honduras) autorizada por decreto legislativo para utilizar la normativa y los lineamientos de adquisiciones de MCC, diferentes a lo que establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento¹.

Con lo anterior esclarecido, y ante las denuncias ciudadanas de corrupción en las compras efectuadas, Invest-H suscribió un Acuerdo de Cooperación para la Asistencia Técnica, Veeduría y Auditoría Social con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras.

El acuerdo tuvo como objetivo que la ASJ llevara a cabo actividades de veeduría y auditoría social sobre los procesos de adquisiciones de emergencia ejecutados por Invest-H. La auditoría social de la ASJ comprende

cinco dimensiones de análisis: a) cumplimiento de la normativa aplicable y las buenas prácticas en contratación pública en el contexto de la emergencia global, b) verificación de los precios y condiciones de mercado, c) análisis de las especificaciones técnicas de los bienes adquiridos, d) valoración de los tiempos de entrega, y e) el detalle de las empresas adjudicadas.

LA COMPRA DE 450 VENTILADORES MECÁNICO PULMONARES

El primer ejercicio de veeduría y auditoría social recayó sobre la compra directa de 450 ventiladores mecánicos pulmonares, por un monto de L 342.4 millones, equivalente a USD 13.8 millones. De las 450 unidades, 150 fueron compradas a Dimex Médica, S.A. de C.V. (en adelante Dimex) por un valor de USD 4,732,537.20, y 300 unidades a Sistemas e Imágenes Médicos, S. de R.L. (en adelante Simedic) por un valor de USD 9,101,988.38.

Ninguna de las dos empresas cuenta con experiencia previa en la venta de este tipo de equipo, y tampoco formó parte de su catálogo de productos antes de la pandemia. Otro hallazgo de la auditoría social, es que cada ventilador se compró por un precio de USD 31,000.00, un valor más accesible que los adquiridos por la República de Costa Rica, a USD 34,000 cada ventilador.

No obstante, no se encontró evidencia sobre quién y cómo se definieron los precios de mercado. Inicialmente, en el proceso de compra se adquirirían 100 ventiladores, pero, por decisión —injustificada— del subsecretario del despacho de Salud, el Dr. Roberto Cosenza, se hizo un incremento de 350 unidades, para un total de 450. Dimex prometió un plazo de entrega de los ventiladores de entre 90 a 120 días, y posteriormente lo modificó unilateralmente a una entrega escalonada durante siete meses, entre junio y diciembre².

LA COMPRA DE 250,000 PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID-19

Con respecto a los 250,000 kits de pruebas de detección de Covid-19, las inconsistencias también se produjeron en las etapas a cumplir en el proceso de compra. En este caso, Invest-H adquirió las pruebas en la empresa Bioneer Corporation Ltd. (en adelante Bioneer), por un precio total de L 46.5 millones (USD 1.85 millones), y USD 7.50 la unidad, un precio razonable en

1 Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras. (2020). Opinión Legal sobre los Procesos de Contratación de INVEST-H, p. 2.

2 Al respecto, véase: Asociación para una Sociedad más Justa (2020). Resumen Ejecutivo: Compra de 450 ventiladores mecánicos pulmonares, Emergencia Covid-19. Tegucigalpa. Enlace: <https://bit.ly/37nkBGG>

comparación con el de las adquiridas por el Gobierno de Costa Rica, de USD 78.00 cada prueba.

Bioneer determinó que la entrega se realizaría en tres intervalos: el primer lote entre el 10-15 de abril, el segundo el 17 de abril y, el tercero, el 24 de abril. Finalmente, hizo la primera entrega el 21 de abril, y las últimas dos el 15 de mayo de 2020. Un aspecto relevante es que, sin menoscabo de que las pruebas de detección fueron compradas y entregadas, en el proceso no se contempló la adquisición de kits de extracción, indispensables para su uso.

En ninguno de los dos procesos mencionados, se incluyeron cláusulas referentes a la imposición de penalidades por la entrega tardía de los insumos.

PARÁMETROS LEGALES DE INVEST-H PARA EFECTUAR CONTRATACIONES DIRECTAS

Para comprender las omisiones mencionadas, es preciso remitirnos a las bases legales a las que se obliga Invest-H para realizar las adquisiciones mediante el mecanismo de contratación directa.

Ante una declaratoria de Estado de emergencia sanitaria, y la posterior restricción de los derechos constitucionales, el Gobierno Central debió elaborar un Plan Estratégico General de acuerdo al contexto, las demandas y necesidades presentadas por la pandemia.

El Código de Salud, contenido en el Decreto Legislativo No. 65-1991, dispone que la Sesal es la institución encargada de desarrollar la política nacional de salud, su planificación y coordinación en todas las actividades públicas y privadas en la materia. Sin embargo, el Gobierno inició la toma de decisiones sin una planificación como punto de partida³.

Ante este vacío, Invest-H, como la institución facultada para realizar compras mediante la figura de la contratación directa, apegándose a lo dispuesto en la Ley de la Cuenta del Desafío del Milenio, su reglamento y el Convenio, debió remitirse a lo señalado en la sección P2.1.1 de los Lineamientos de Adquisiciones del Programa Millennium Challenge Corporation sobre la preparación periódica de un Plan de Adquisiciones.

Este documento es una herramienta de gestión mediante la que se supervisan las adquisiciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Invest-H. Los Li-

neamientos también permiten el uso de la contratación directa en casos excepcionales, como es la pandemia de Covid-19; no obstante, aun cuando se producen contrataciones directas en contextos de emergencia, la sección P2.1.7. (b) de los Lineamientos, determina que se debe efectuar una modificación en el Plan de Adquisiciones cuando “se agrega una nueva adquisición con un valor estimado de USD 5,000.00 o más, y el contratista o consultor será seleccionado por contratación o selección directa”⁴; y los dos procesos de adquisiciones analizados, ascienden a USD 15.65 millones.

Seguidamente, en los hallazgos se detalla que, según el Acta No. 68 de fechas 27 y 28 de abril de 2020, el Consejo Directivo de Invest-H manifestó que, para ninguno de los dos procesos de adquisiciones analizados, se solicitó su aprobación como la máxima autoridad encargada de velar por el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del Gobierno de Honduras a través de Invest-H.

Esta omisión se extiende al incumplimiento del artículo 10.b.1 del Reglamento de la Ley, sobre las atribuciones de este Consejo, que tendrá que aprobar por mayoría simple de votos, cualquier asunto que requiera su autorización de conformidad con los Lineamientos de Adquisiciones. Sobre esto, los Lineamientos determinan, en su sección P2.1.6. sobre las Modificaciones a Planes de Adquisiciones, que Invest-H deberá proponer una enmienda al plan, asegurando su aprobación del Consejo Directivo antes de comenzar la acción de adquisición mediante contratación directa, hecho que no ocurrió.

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD EN EL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL

La Constitución de la República reconoce el derecho a la protección de la salud, y el deber de todos y todas de participar en su promoción y preservación, a nivel social y colectivo. Adicionalmente, el Código de Salud expresa en su artículo número 1, que “la salud considerada como un estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico es un derecho humano inalienable y corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su protección, recuperación y rehabilitación”⁵.

3 Asociación para una Sociedad más Justa. (2020). Proceso de Adquisición de Kits de Pruebas de Infección por Coronavirus COVID-19, pp. 11-13. Tegucigalpa.

4 Programa MCC Lineamientos de Adquisiciones (2018), p. 57.

5 Congreso Nacional de Honduras. Código de Salud (Decreto No.65-91), 1991.

La protección al derecho humano a la salud no se agota con lo dispuesto en las disposiciones mencionadas; el artículo 63 de la Constitución abre las puertas al reconocimiento de declaraciones, derechos y garantías no establecidas taxativamente en su contenido, que emanan de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y la dignidad humana, como es el caso de lo dispuesto en los tratados internacionales, instrumentos que forman parte del derecho interno conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 constitucionales.

Al respecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) establece en su artículo 11 el derecho que tiene toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a (...) la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el derecho a la salud se encuentra protegido en el marco del artículo 26, relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (DESCA), haciendo la salvedad de que la efectiva realización del bien jurídico se desarrollará conforme a los recursos disponibles en el Estado, y de manera progresiva. Sobre esta progresividad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que

la dimensión progresiva de protección de los DESCAs, si bien reconoce una cierta gradualidad para su realización, también incluye un sentido de progreso, que requiere la mejora efectiva de las condiciones de goce y ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de grupos vulnerables⁶.

En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha expresado que todos los servicios e instalaciones de salud deben cumplir con los requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

La disponibilidad hace alusión al número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud. La accesibilidad desarrolla: a) la obligación de no discriminación, b) la accesibilidad física en términos

geográficos a todos los sectores de la población, c) la accesibilidad económica, asegurando la proporcionalidad en el pago de los servicios de salud conforme al principio de equidad, y d) el acceso a la información sobre las decisiones tomadas con respecto a la provisión de la salud como derecho humano y servicio público a la vez. La aceptabilidad conlleva la preponderancia de la ética médica en el respeto a la diversidad cultural de las personas, teniendo como objetivo brindar una atención de calidad. La calidad enfatiza en el rigor científico y médico de los servicios de salud⁷.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras estableció, en la sentencia recaída en el expediente No. AA 587-2013 de fecha 1 de abril de 2014, que al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar la prestación del derecho a la salud atendiendo a los principios de eficacia, universalidad y solidaridad⁸.

Por ello, sin menoscabo de la subsistencia de un Estado de restricción de derechos fundamentales, la declaratoria de un Estado de emergencia sanitaria y la restricción de derechos fundamentales, tienen como objetivo central la adopción de las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria de las personas ante la propagación del virus de Covid-19.

Ante los incumplimientos de Invest-H de su normativa interna sobre procesos de adquisiciones, surge la pregunta: estas actuaciones, ¿podrían catalogarse como actos de corrupción? Según el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, la exposición del sector sanitario a la corrupción se debe a características como:

- a) las asimetrías de poder o las disparidades de información entre los proveedores sanitarios y los pacientes, y entre los organismos públicos, el sector privado y los titulares de los derechos y b) la incertidumbre inherente a la selección, la supervisión, evaluación y la prestación de servicios de atención sanitaria (...)⁹.

Por ende, al hablar de contrataciones directas, la corrupción prospera donde hay falta de apertura, trans-

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2020). *Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*, No. 28, p. 10. San José, C.R.

7 *Ibid.*, pp. 8-9.

8 AA 587-2013. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2014, p.13.

9 Puras, D. (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, p. 6. Nueva York.

parencia, información, competencia, incentivos, normas y reglamentos claros que se apliquen estrictamente, y ausencia de sanciones¹⁰.

La ausencia de una planificación estratégica con base en las necesidades detectadas en los establecimientos sanitarios, el incumplimiento de la normativa vigente para los procesos de contratación directa de Invest-H, la ausencia de sanciones a los proveedores ante el incumplimiento de los plazos establecidos, la falta de documentación de respaldo para la toma de decisiones, la adquisición de un número elevado de pruebas y ventiladores que no corresponde a la capacidad instalada del sistema sanitario, ciertamente ocasiona un perjuicio al Estado de Honduras y a la garantía del derecho a la salud de sus ciudadanos.

En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado que la amplia discrecionalidad en la toma de decisiones y la falta de control de los actos de las autoridades, generando la poca transparencia y rendición de cuentas, por ende, son condiciones que facilitan la corrupción¹¹.

La discrecionalidad vislumbrada en la toma de decisiones de Invest-H ante la ausencia de una planificación de esta institución y del Poder Ejecutivo, incidió negativamente en la obligación del Estado de hacer uso del máximo de los recursos disponibles para garantizar progresivamente el derecho a la salud, ya que, como lo ha manifestado la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

la falta o desvío de recursos públicos por actos de corrupción afectan no solo las obligaciones inmediatas de los Estados para la realización de tales derechos, además tienen un correlato particular con la obligación de progresividad para su realización plena, e incluso, pueden significar la existencia de regresiones concretas en su disfrute¹².

LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES DEL ESTADO Y EL DERECHO A LA VERDAD

En 2018, Honduras fue catalogada como el tercer país más desigual del mundo¹³. Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el 60% de la población vive en situación de pobreza, y el 38% en situación de extrema pobreza, por lo que el disfrute de los derechos humanos está condicionado por el sexo, estrato social, etnicidad y área geográfica¹⁴.

La presencia de estos flagelos, y su proliferación en el contexto de la pandemia, representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de derecho y restringe el pleno goce de los derechos humanos que la CADH reconoce a toda persona¹⁵.

Sobre los efectos de la corrupción en una sociedad, el Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos efectuó unas acotaciones en relación con su impacto en los diferentes segmentos de la población. Por una parte, la corrupción puede afectar a personas, en un sentido individual, impidiendo el acceso a un servicio público, en términos de alimentación, vivienda y salud. También puede generar afectaciones a grupos específicos e identificables de personas, es decir, a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, las personas de edad, los pobres, entre otros. Finalmente, la corrupción puede afectar a toda la sociedad, al producir una reasignación de recursos que puede interferir con el efectivo respeto de los derechos humanos¹⁶.

En razón de lo anterior, cuando se trata de presuntos actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios para combatir los efectos de la pandemia, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público (MP), tienen el mandato constitucional de adoptar las medidas necesarias para deducir las responsabilidades de orden administrativo, civil y penal, en aras de garantizar la consecución del derecho a la verdad. Siendo este, la obligación del Estado de Hon-

10 Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (2005). La corrupción y sus repercusiones en el pleno disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, p. 15. Nueva York

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). *Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos*, p. 52.

12 *Ibid.*, p. 65.

13 Sennewald, A. (2018). *Global inequality: an overview of concepts and trends*, p. 1. KFW Development Research.

14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). *Situación de derechos humanos en Honduras*, pp. 71-72, párr. 128.

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). *Resolución 1/18: Corrupción y derechos humanos*, pp. 5-6. Bogotá.

16 Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (2015). Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, pp. 7-8, párr. 20.

duras de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto, sobre las violaciones graves de los derechos humanos¹⁷.

No podemos obviar que las capacidades investigativas del MP han sido limitadas por diferentes acciones provenientes del Congreso Nacional; entre estas, la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales. Fue aprobada el 16 de octubre de 2019 (Decreto 116-2019), y le otorga al TSC la facultad de eximir de responsabilidad administrativa, civil y penal a quien haya causado un perjuicio económico al Estado en la gestión de recursos públicos.

Esta legislación es aplicable a las adquisiciones efectuadas por Invest-H en el marco de la pandemia, y podrían suponer el riesgo de que los presuntos actos de corrupción cometidos en el marco de los procesos de adquisiciones descritos, queden en la impunidad, produciendo un caso potencial de responsabilidad del Estado de Honduras, por violaciones al derecho humano a la salud de sus ciudadanos.

CONCLUSIONES

La pandemia de la Covid-19 evidenció la fragilidad del sistema de salud pública y la incapacidad de las instituciones encargadas de efectuar las adquisiciones para dotar de los recursos necesarios al Estado, que permitieran mitigar los efectos de la crisis.

Los hallazgos de la auditoría social de la ASJ sobre los procesos de adquisiciones de ventiladores pulmonares mecánicos y pruebas de detección del virus, ejecutados por Invest-H, dan cuenta de claros incumplimientos de su normativa interna, generando un terreno fértil para la comisión de presuntos actos de corrupción, y, por consiguiente, violaciones al derecho humano a la salud de la población, especialmente de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Sin menoscabo de su naturaleza jurídica particular, Invest-H forma parte del organigrama de la administración pública hondureña, lo que traslada la obligación al Tribunal Superior de Cuentas, y en su defecto al Ministerio Público —tomando en cuenta la vigencia de cuerpos normativos que condicionan su actuar— para proceder con el ejercicio de la acción penal con miras a deducir las responsabilidades pertinentes.

El deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad a sus ciudadanos es un imperativo en un contexto en el que cientos de hondureños han perdido la vida en medio de serios cuestionamientos a la accesibilidad, disponibilidad y calidad del sistema de salud.

En un Estado de derecho, es inaceptable que la corrupción e impunidad en el proceder del Gobierno se posicionen entre los flagelos que subsisten en un contexto en el que la ciudadanía ha sido golpeada con la agudización de otros flagelos como la pobreza, el desempleo y la pérdida de vidas humanas.

Ante los incumplimientos de Invest-H de su normativa interna sobre procesos de adquisiciones, surge la pregunta: estas actuaciones, ¿podrían catalogarse como actos de corrupción?

17 Ballesteros de León, G. (2014). Derecho a la verdad en contextos de violaciones graves a los derechos humanos. En: J. Mejía Rivera, G. Ballesteros, L. Pérez Casas, V. Bengtsson, N. Sandoval & G. Donoso, *Tres miradas latinoamericanas a la justicia penal internacional: Colombia, Honduras y México* (pp. 34-35). Editorial Casa San Ignacio.



El (des)gobierno de la crisis: Un llamado a radicalizarnos

MARCELA ARIAS MONCADA*

*Desde el momento en que se decretó el estado de excepción,
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager),
Juan Orlando Hernández y las autoridades que lo acompañan,
han construido una narrativa que, basada en el miedo,
genera una imagen ficticia de la situación del país,
ante la cual se debe tener mucho cuidado de no reproducir.*

El 28 de junio se cumplieron once años del golpe de Estado en el que se instalaron grupos de poder que, hasta hoy, responden a un proyecto que ha beneficiado únicamente a las élites económicas, políticas y religiosas nacionales y transnacionales.

El desarrollo de este proyecto no se detiene por una pandemia, así que además de la actualización estadística diaria y la instalación de una mesa de trabajo propagandística, existe una serie de situaciones que nos muestra la otra cara del (des)gobierno de la crisis y que se debe tener presente de cara a lo que está por venir.

Los efectos de la pandemia deben ser analizados desde la dimensión sanitaria, sí, pero también es cierto que la Covid-19 se ha convertido en un fenómeno social y político, que adquiere más sentido en los países con mayor desigualdad.

Ampliar el panorama significa comprender que la pandemia ha confirmado que las estructuras de los Estados siguen siendo las instancias con mayor capacidad de respuesta a las crisis, y precisamente por esta razón, es oportuno señalar el papel que han jugado, considerando los hechos más allá de las narrativas oficiales.

Después de todo, de esto depende que “la nueva normalidad” no signifique la tolerancia de estados de excepción perpetuos, de políticas públicas excluyentes, de la mercantilización de servicios públicos o del continuismo de gobiernos ilegítimos.

¿QUÉ PASA FUERA DE LAS CADENAS NACIONALES?

A. MILITARIZACIÓN, REPRESIÓN Y ABUSO DE LA FUERZA

Desde el momento en que se decretó el estado de excepción, las fuerzas militares y policiales fueron las encargadas de “poner en ejecución los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden y sobre todo la salud...”¹. Sin embargo, esto no significa que la función histórica de represión y violencia de las fuerzas militares y policiales haya cesado.

Ante la insuficiente respuesta del gobierno para garantizar las condiciones mínimas de vida para las grandes mayorías, se registraron 83 protestas por alimentos en el lapso comprendido desde mediados de marzo hasta la primera semana de abril.

* Feminista y abogada graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene 24 años y labora en el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

1 Presidente Constitucional de la República en Consejo de Secretarios de Estado (2020). PCM-021-2020. Diario Oficial *La Gaceta*. 9-13.

Contrario a la función previamente establecida, las fuerzas militares y policiales desarticularon las protestas haciendo uso de la fuerza. El 23 de abril, el Comisionado de Policía Jair Meza anticipó que “si no se aplica en algunos casos la fuerza, esto seguirá avanzando y habrá más infecciones... al final de esto, a muchos policías nos van a acusar por abuso de los Derechos Humanos”².

En Omoa, Cortés, un vendedor de pan de 32 años falleció a causa de las heridas de bala ocasionadas por agentes de la Policía Militar, al ser detenido junto a su hermano, quien también resultó herido, por no portar mascarilla³. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció, además, la represión contra mujeres de al menos 25 familias que se declararon en huelga de hambre durante varios días en El Progreso, Yoro, y en protestas llevadas a cabo en Tela, Atlántida⁴.

B. MÁS PROPAGANDA

El limitado apoyo a las mayorías del país en la crisis sanitaria ha consistido en entregar bolsas solidarias e insumos de bioseguridad, como geles desinfectantes y mascarillas. Las bolsas solidarias han sido cuestionadas por las mismas personas de las comunidades, que denuncian que los productos están sobrevalorados, que no son suficientes para más de siete días⁵ y, en ocasiones, que son distribuidas principalmente a simpatizantes del partido en el gobierno⁶.

2 *Proceso Digital* (23 de abril de 2020). Muchos policías serán acusados por violaciones de derechos humanos según comisionado Meza. Disponible en: <https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/muchos-policias-seran-acusados-por-violaciones-de-derechos-humanos-segun-comisionado-meza.html>

3 *Diario La Prensa* (26 de abril de 2020). Panadero resulta muerto y su hermano herido en retén militar. Disponible en: <https://www.laprensa.hn/sucesos/1375550-410/panadero-resulta-muerto-y-su-hermano-herido-en-ret%C3%A9n-militar>.

4 Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (abril de 2020). Mujeres defensoras de Honduras ante el COVID 19. Boletín Informativo. Disponible en: <https://im-defensoras.org/2020/06/boletin-mujeres-defensoras-de-honduras-ante-el-covid-19-abril-2020/>

5 Silva, F. (2020). Bolsas de promesas para la pandemia en Honduras. *Contracorriente*. Disponible en: <https://contracorriente.red/2020/04/11/bolsas-de-promesas-para-la-pandemia-en-honduras/>

6 En abril de 2020, el Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, Estudios para la Dignidad: Bufete de Derechos Humanos, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y FUNDAMBIENTE presentaron una Acción de Amparo a favor del pueblo Tolupe de San Francisco de Locomapa en Yoro puesto que, a través del programa “Honduras Solidaria”, llegaron a las comunidades pero las bolsas solidarias fueron entregadas únicamente a las personas afines al partido de gobierno y a quienes están a favor de las empresas extractivas.

C. VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL CONTRA LAS MUJERES

Con un promedio de 20,523 denuncias anuales, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de las mujeres del CDM, el 93% de las denuncias por violencia doméstica son presentadas por mujeres⁷ y el 86% de víctimas de delitos sexuales son mujeres⁸; los agresores son hombres de la familia o conocidos en un 83% de los casos. Es decir que, para muchas mujeres, la medida de aislamiento o encierro representa un grave peligro, al encontrarse conviviendo con el agresor o agresores.

Además de la impunidad estructural, la revictimización y la ausencia de la perspectiva feminista y de género que caracteriza la administración de la justicia en Honduras, este contexto representa mayor vulnerabilidad para las mujeres.

Así lo evidencian los casos de violencia expuestos por el Foro de Mujeres por la Vida⁹, que señaló las fallas institucionales identificadas en tres casos de violencia sexual y de aborto en tiempos de cuarentena. Su característica común: el desinterés e incapacidad del Estado cuando se trata de proteger víctimas de violencia y, en contraste, el interés y capacidad del Estado cuando se trata de criminalizar mujeres por el delito de aborto.

D. SAQUEO, DESPOJO Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

El despojo de los territorios, el saqueo y la explotación de recursos naturales tampoco se ha detenido durante la pandemia. Apenas dos semanas después de que se había decretado el estado de excepción, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente creó una plataforma digital para procesar las solicitudes y renovaciones de licencias ambientales en línea “... en aras de promover la inversión en el país y continuar con el proceso de regularización ambiental...”¹⁰, con aún menos monitoreo por parte de las comunidades afectadas.

En mayo se inauguró Roatán Próspera, “el primer Centro de Desarrollo Económico... que permite un

7 Centro de Derechos de Mujeres (2019). *Violencia doméstica contra las mujeres en 2017 y 2018*. Tegucigalpa.

8 Centro de Derechos de Mujeres (2019). *Violencia sexual en Honduras: el impacto de las políticas de negación de los derechos de las mujeres*. Tegucigalpa.

9 El Foro de Mujeres por la Vida presentó un Boletín Especial de Violencia Sexual y Aborto en Cuarentena.

10 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Comunicado (27 de marzo de 2020). Tegucigalpa.

nuevo modelo de desarrollo económico que es sostenible localmente e integrado globalmente en una de las islas más bellas del Caribe... que ofrece nuevas oportunidades de crecimiento en Honduras a empresas y personas...”¹¹; en realidad, representa la entrega del territorio nacional (administración de política fiscal, seguridad y resolución de conflictos) a inversionistas bajo la promesa de crear empleos¹² que, atendiendo al modelo económico neoliberal, contribuyen a la precariedad laboral.

Lamentablemente, continúan los asesinatos contra defensores y defensoras de territorios. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció el asesinato de Iris Argentina Álvarez, y señaló como responsable a la Policía Nacional, protagonista del desalojo violento que se llevaba a cabo cuando dispararon contra la defensora.

También denunció el asesinato de Edwin Fernández, “... miembro de OFRANEH y encargado de la vigilancia del portón que fue instaurado como medida de bioseguridad para el control del COVID19 en la comunidad garífuna de Río Tinto, Atlántida”; y agresiones en perjuicio de defensoras que se manifestaban contra la minería en Guapinol donde, según sus relatos, la tala masiva de árboles continúa a diario.

La OFRANEH denunció el asesinato de Antonio Bernárdez, líder de la comunidad de Punta Piedra, quien fue encontrado sin vida luego de seis días de haber desaparecido. Menos de un mes después, el 27 de julio, la OFRANEH denunció la desaparición forzada de cuatro miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz; entre ellos, el presidente del patronato de la comunidad.

En diciembre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias a favor de los derechos colectivos de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz; determinó que el Estado de Honduras es responsable de haber violado el derecho a la propiedad colectiva, y estableció una serie de medidas que deben adoptarse para la reparación de ambas comunidades, como la demarcación y titulación de tierras, la investigación de las violaciones de derechos humanos y la compensación colectiva a través de fondos de desarrollo comunitario.

Sin embargo, lejos de darle seguimiento y cumplimiento a ambas sentencias, el gobierno de Honduras es

señalado por las organizaciones sociales como implicado directamente en los hechos denunciados.

E. LA VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PENAL

Se debe tomar precauciones respecto de la manera en que se desarrolla esta discusión. El hecho de cuestionar la vigencia del nuevo Código Penal, no implica aceptar la afirmación de que “mayores las penas, mayor es el control del delito”. Esta afirmación proviene de una campaña desmovilizadora y engañosa, que asegura que una vez aumenten las penas, habrá mayor control del delito. Tampoco se comparte la afirmación de que “menores penas, aseguran mayor disuasión del delito”; esta es una conclusión carente de contexto político y de sensatez, respecto de las poblaciones más afectadas del país.

La entrada en vigor del nuevo Código Penal debe traer consigo la renovación de la discusión sobre justicia penal y justicia social. La presencia de grupos de poder ilegítimos, apoyados por fuerzas militares y policiales que reprimen y hacen un uso desproporcionado de la fuerza, nunca ha necesitado de instrumentos normativos para encarcelar o asesinar a personas por razones políticas. Casos como el de Berta Cáceres, el de Edwin Espinal o el de Rommel Baldemar Herrera, son ilustrativos de cómo opera el poder punitivo cuando es ejercido desde intereses que responden a proyectos políticos y económicos ajenos a principios democráticos.

F. NUEVOS VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

En marzo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó acusaciones de conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos contra el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, a quien también se le señala de haber estado a cargo de “tareas especiales”, que incluyeron asesinatos, asignadas por el presidente Juan Orlando Hernández¹³.

En junio, los hermanos guatemaltecos Otto y Ronaldo Salguero, acusados de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por el uso y tráfico de armas¹⁴, se sumaron a la lista de testigos de una reunión, en 2013, en la cual se hizo entrega de un millón de dó-

11 Disponible en: www.propsera.hn/roatan

12 Congreso Nacional de la República (2013). Decreto Legislativo No. 120-2013. Diario Oficial *La Gaceta*, 57-66.

13 Ernst, J. (30 de abril de 2020). Former police chief of Honduras accused of trafficking drugs to US. *The Guardian*.

14 Department of Justice. Southern District of New York (17 de diciembre de 2019). Four International Drug Traffickers Charged with conspiring to Import Cocaine into the United States and Related Firearms Offenses.

lares en efectivo para contribuir a la campaña electoral de Juan Orlando Hernández.

¿REAPERTURA DE LA ECONOMÍA PARA QUIÉN?

La implementación del “Plan de Apertura Inteligente Económica y Social” inició el lunes 7 de junio, a pesar de que el país no cumplía las condiciones epidemiológicas y de salud pública¹⁵ que se deben considerar antes de levantar parcialmente las medidas de aislamiento.

En lugar de demostrar una reducción sostenida de casos positivos, la frecuencia aumenta semanalmente; contrario a fortalecer la capacidad hospitalaria, las autoridades de los principales hospitales públicos aseguran estar al máximo de sus capacidades; contrario a garantizar al personal de salud el acceso a los insumos de bioseguridad necesarios, lo entregado no es suficiente y, en ocasiones, sin la calidad requerida.

El gobierno podría garantizar la subsistencia de miles de familias hasta que las condiciones epidemiológicas y de salud pública puedan cumplirse; sin embargo, ha optado por la reapertura de la economía, que parece estar diseñada en función de beneficiar a determinados grupos de poder económico, y no a partir del compromiso con la protección de la salud y la vida de las personas¹⁶.

Además, el regreso progresivo a los empleos no significa perder de vista la precariedad laboral profundizada por este contexto, pero introducida por el modelo económico neoliberal y caracterizada por la inestabilidad del empleo, la desregulación del mercado de trabajo, la desprotección social de trabajadores y trabajadoras, y la flexibilización laboral que, en mayor o menor medida, son parte de las realidades cotidianas que enfrenta la población asalariada¹⁷.

¿Y QUÉ HAY DEL TRABAJO REPRODUCTIVO?

Finalmente, existe una dimensión del trabajo que, al no ser productivo, difícilmente es considerado dentro de la planificación económica, pese a que son las actividades reproductivas las que sostienen la vida. El trabajo reproductivo o del cuidado, feminizado en su mayoría, puede ser remunerado o no remunerado.

Las trabajadoras domésticas remuneradas, organizadas en la Red de Trabajadoras Domésticas, recientemente denunciaron la inadmisibilidad del Recurso de Amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, por la ausencia de un protocolo de bioseguridad que les garantice trabajar en condiciones mínimas para prevenir el contagio, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos¹⁸.

Actualmente existen 139 mil trabajadoras domésticas, de las cuales el 92% no cuenta con un seguro médico; tienen acceso a un promedio del 37% del salario mínimo reconocido por la Secretaría de Trabajo y realizan jornadas de hasta 14 horas diarias¹⁹. El personal de salud, en particular el de enfermería, que es igualmente feminizado, también es parte del trabajo de cuidado remunerado.

En 2019, junto a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación, las enfermeras denunciaron las intenciones gubernamentales de privatizar la salud y la educación. En tanto que el 15 de junio, durante el estado de excepción decretado por la pandemia, protestaron por la “falta de insumos de bioseguridad”, “abusos de autoridad”, “falta de transporte” y “hostigamiento laboral”.

El trabajo del cuidado no remunerado es una actividad reproductiva igualmente feminizada; este contexto ha significado una sobrecarga de trabajo para las mujeres que, además de trabajar largas jornadas laborales mal remuneradas, asumen el cuidado de hijos e hijas, de la familia y del hogar en general. Hasta la primera semana de junio, las cifras demuestran que son “las amas de casa” las principales afectadas por la Covid-19, seguidas de los y las comerciantes.

15 Banco Interamericano de Desarrollo (2020). Del Confinamiento a la Reapertura: Consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la COVID19. Washington D.C.

16 El Plan de Apertura Inteligente Económica y Social se suspendió entre el 21 y 27 de junio para el Distrito Central y San Pedro Sula, debido al aumento de casos de Covid-19. Actualmente se discute la recomendación emitida por la Mesa Multisectorial, que consiste en reactivar las actividades económicas, a pesar de que el sistema de salud todavía no es capaz de enfrentar un nuevo brote.

17 Talavera, M.E. (2019). “Honduras: Precariedad laboral en la clase asalariada durante el modelo de acumulación neoliberal”. En *Trabajo y nuevas configuraciones de clase en América Latina* (pp. 101-123). Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica de Ecuador.

18 Comunicado de la Red de Trabajadoras Domésticas, 9 de junio de 2020.

19 Plataforma EPU de Organizaciones de Mujeres. 36 periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo de EPU (2020). Informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en Honduras.

PENSAR EN “LA NUEVA NORMALIDAD”: UN EJERCICIO DE RADICALIZACIÓN NECESARIA

Como alternativa, la población ha desarrollado redes de solidaridad y le ha apostado a la organización comunitaria para construir las condiciones necesarias de sobrevivencia ante la pandemia. Tal es el caso de las comunidades garífunas organizadas en OFRANEH, que han desarrollado campañas de información, distribución de insumos básicos, y han gestionado medicinas para fortalecer el sistema inmunológico de la población de tercera edad; han establecido los huertos familiares y comunitarios y los intercambios de alimentos.

Las redes de Mujeres contra la Violencia han regresado a las ollas comunitarias en barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela; se hacen colectas solidarias en barrios y colonias donde hay colectivos del partido Libre, y se escucha el llamado a “*jarreciar la solidaridad!*” del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, mientras distribuye kits de salud comunitaria.

Las victorias de los movimientos sociales y populares existen más allá de lo que se traduce en la política institucional-estatal, pues impactan en las subjetividades políticas en el ámbito privado y público²⁰.

Lejos de traer a la discusión el binomio autonomía o institucionalización, las resistencias comunitarias que persisten o han surgido en el marco de la pandemia, deben permitirnos construir horizontes políticos comunes en los que la principal apuesta esté determinada por la defensa de la vida y la dignidad humana, en el entendido de que inclinar el sentido común hacia políticas —institucionales y comunitarias— justas e

igualitarias, debe asumirse como un compromiso político y ético para no regresar a esa normalidad política y económica que, en palabras de Yayo Herrera, “le han declarado la guerra a la vida”²¹.

Somos responsables uno del otro...

Para esta autora, la sostenibilidad de la vida dependerá de: i) comprender nuestra ecoddependencia y el hecho de que vivimos en un planeta con «límites físicos», la mayoría sobrepasados por la explotación capitalista desmedida, y ii) comprender que la vida humana radica en cuerpos vulnerables o frágiles; es decir, que somos responsables uno del otro, física y emocionalmente, en diferentes niveles y a lo largo de nuestras vidas. Refiriéndose al trabajo reproductivo o de cuidados que, históricamente, ha sido desarrollado por mujeres, partiendo de aquello que es “femenino” en el marco de un mandato patriarcal, dice:

Asumir la finitud del cuerpo, su vulnerabilidad y sus necesidades es vital para comprender la esencia interdependiente de nuestra especie, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad.

En este sentido, el llamado a radicalizarse es justo lo opuesto a la centralidad o neutralidad política. La falta de acción colectiva y radical hoy, representará el afianzamiento de las estructuras políticas económicas y populares del 1% de mañana²².

20 Pleyers, G. (2018). “Los movimientos sociales como productores de la sociedad”, capítulo 5, p. 91. En *Movimientos sociales en el siglo XXI*, Buenos Aires: CLACSO.

21 Herrera, Y. (2018). Sujetos arraigados en la tierra y los cuerpos. Hacia una antropología que reconozca los límites y la vulnerabilidad. Cuadernos de trabajo.

22 Geoffrey Pleyers sostiene que los movimientos del 1% o “movimientos desde arriba”, están conformados por los actores que sostienen la desigual distribución de riquezas. Desde *think tanks* conservadores o libertarios, como “Estudiantes para la libertad”, hasta el uso de los medios para la “manufactura de consensos”; las estructuras populares del 1% se expresan hoy en los movimientos nacionalistas, supremacistas blancos o antiderechos-fundamentalistas religiosos.



La lucha contra la corrupción antes y durante la vigencia de la MACCIH

JOAQUÍN A. MEJÍA RIVERA* y CARLOS JOAQUÍN MÉNDEZ**

Este esbozo de la lucha contra la corrupción, antes y durante la vigencia de la MACCIH, valida la percepción ciudadana de que no existe voluntad política para combatir la corrupción, y que la institucionalidad hondureña es incapaz de hacerlo, sin la presencia de un organismo internacional que la acompañe y la empuje.

1. CORRUPCIÓN Y DESCONFIANZA CIUDADANA

En su resolución 1/18, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que la corrupción es un fenómeno complejo que afecta todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo; también debilita la gobernabilidad, las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y agrava la desigualdad¹.

Sin duda, el impacto de la corrupción en la vida de un país solo es posible por la falta de prevención, investigación y sanción de las personas corruptas; esto, a su vez, erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y provoca el descreimiento de la población en la democracia y el Estado de derecho, al ver que no

se toman “medidas decisivas en la administración de justicia y lucha contra la impunidad y corrupción”².

Todo ello trae aparejado un profundo proceso de deslegitimación democrática, particularmente grave en el contexto de la crisis sanitaria generada por la Covid-19. El más reciente sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) refleja que el 82.5 por ciento de la población no tiene confianza en el gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández, el 71.6 considera que en el último año este actuó con poca o ninguna transparencia, y el 79.2 cree que la corrupción está muy extendida en el gobierno³.

Por otro lado, el Congreso Nacional, que debería aprobar las leyes destinadas a prevenir y sancionar la corrupción —y que aprobó los fondos millonarios para atender la emergencia de la Covid-19—, es una institución sobre la que el 85.7 por ciento de la población tiene poca o ninguna confianza⁴.

* Investigador del ERIC-SJ y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH).

** Pasante de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAH. Asesor Jurídico en el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

1 CIDH. Resolución 1/18. Corrupción y Derechos Humanos. Aprobada en Bogotá, en el marco de su 167 período de sesiones, a los dos días del mes de marzo de 2018.

2 CIDH. *Situación de derechos humanos en Honduras*. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 146. 27 agosto 2019, p. 187, párr. 365.

3 ERIC-SJ. *Sondeo de Opinión Pública. Percepciones sobre la situación hondureña en el año 2020*. Décima edición. El Progreso, Yoro, julio 2020, p. 4.

4 *Ibid.*, p. 5.

En un auténtico Estado de derecho, cuando los poderes ejecutivo y legislativo fallan en su obligación de prevenir la corrupción y la impunidad, las instituciones de justicia juegan un papel fundamental para controlar la legalidad e investigar y sancionar a las personas responsables; por ello, resulta preocupante que el 85.1 por ciento de la ciudadanía considere que magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de las personas ricas, poderosas y corruptas; apenas el 10.7% piensa que defienden los intereses de la sociedad⁵.

Ante los altos niveles de desconfianza ciudadana en la institucionalidad, no es de extrañar lo que revelan dos datos clave del sondeo de opinión pública: primero, que el 70.3 por ciento de la población se opuso a la cancelación del convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); y, segundo, que el 68.9 considere que las instituciones del Estado son incapaces de luchar contra la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional⁶.

Esto es de suma importancia considerando que, según datos del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción (OPCA), existen más de 15 modalidades de corrupción en el país: la sobrevaloración, el soborno, el nepotismo, el desvío de fondos y la evasión fiscal, entre otras⁷.

Con base en lo anterior, es posible afirmar que este fenómeno está profundamente incrustado en las entrañas de nuestro país, causando perjuicios económicos considerables que conllevan al fraccionamiento de la institucionalidad y, paralelamente, socavan la legitimidad del Estado y sus instituciones.

A partir de esa premisa es imprescindible analizar, por un lado, el papel que ha desempeñado el Ministerio Público (MP) en el combate a la corrupción durante los años 2011 a 2015, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y, por otro lado, el papel del MP a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en coordinación con la MACCIH, desde 2016 hasta la cancelación del convenio.

2. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN ANTES DE LA MACCIH

Según datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre 2008 y 2015 el MP recibió 3,471 denuncias de delitos asociados a la corrupción pública; de estas, solo en 283 se presentaron los respectivos requerimientos fiscales y apenas 9 obtuvieron una sentencia condenatoria. En términos porcentuales, solamente en el 0.83% de los casos el MP interpuso un requerimiento fiscal. De los actos de corrupción judicializados durante esos siete años, se cuantificó un total de 3.94 mil millones de lempiras (equivalentes a 180 millones de dólares) como perjuicio patrimonial para el Estado de Honduras⁸.

Como muestra de ello, analizaremos algunos de los casos más relevantes investigados por el MP dentro del espacio temporal de los cuatro años anteriores a la instalación de la MACCIH. Así, en 2011, se instruyó un proceso contra el señor José Rosario Bonano, ex ministro de SOPTRAVI, por los delitos de abuso de autoridad y fraude. Estos actos ilícitos significaron un perjuicio de L12.9 millones para el Estado. En este caso, hubo una irregularidad procesal consistente en la suspensión de la audiencia inicial por la interposición de un recurso por parte de la defensa. No obstante, en 2012 se dictó sobreseimiento definitivo debido a dos cuestiones: por incompetencia del tribunal en razón de la materia y por la incapacidad del MP para acreditar el material probatorio con el que contaba, y la ineficacia de su estrategia de litigio empleada en el juicio⁹.

En 2012, frente a los actos graves de corrupción en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el MP presentó un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude, contra los funcionarios de esta institución: Pedro Arnaldo Pinto, Marco Antonio Vallengillo, Gustavo Adolfo Fonseca, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Perdomo Laínez, Mario Batres y Oscar Rubí Flores¹⁰.

También se incluyó en la acusación a algunos actores externos, como Jorge Lazo Bueso, Milton Bardales, Darío Cardona Valle, José Ventura Soria-

5 *Ibid.*, p. 7.

6 *Ibid.*

7 OPCA. Estudio: La estimación del impacto macro-económico de la corrupción en Honduras. CNA y FOSDEH. Tegucigalpa, 2020, pp. 12-15.

8 ASJ. Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015. Resultados de la respuesta institucional anticorrupción. Tegucigalpa, junio de 2016, pp. 31-40.

9 *Ibid.*, pp. 59-60.

10 "Corrupción en INPREMA: seis culpables y cuatro exdirectivos absueltos". En *Tiempo*, 10 de enero de 2020. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <https://tiempo.hn/inprema-delitos-exdirectivos-audiencia/>

no, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez y Lorenza Saucedá Sánchez. En este caso, el proceso se vio obstaculizado por distintas prácticas dilatorias por parte de la defensa de las personas acusadas, como la interposición de diversos recursos. Pese a ello, hasta el momento se logró la condena de seis de las catorce personas imputadas¹¹.

El 25 de febrero de 2013, el MP presentó un requerimiento fiscal contra los señores Arturo Bendaña (extitular de la Secretaría de Salud [SESAL]), Moisés Torres (ex Gerente Administrativo de la SESAL), Martha Vásquez, María de los Ángeles Fúnez, Mirza Lizeth Ruiz y Cristian Manuel Bautista (exmiembros de la Comisión de Evaluación de Medicamentos) por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de los funcionarios y fraude¹².

El monto del daño económico se elevó hasta los 3.6 millones de lempiras. Sin embargo, Arturo Bendaña, quien era el funcionario público de mayor rango en este caso, quedó en libertad tras dictársele sobreseimiento definitivo por el delito de fraude y haberse conciliado incorrectamente los otros dos delitos con la Procuraduría General de la República, mediante el pago de L 200 mil como restitución, lo que equivale a menos del 1% del daño causado¹³.

Meses más tarde, se presentó un requerimiento fiscal contra el señor Marcelo Antonio Chimirri, ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) en el período 2006-2009, por el delito de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 16.7 millones de lempiras. Inicialmente, se dictó sobreseimiento provisional a su favor, pero se revocó en 2014. Posteriormente, se reprogramó el juicio en cuatro ocasiones y hasta en 2017 se condenó al imputado a nueve años de reclusión¹⁴.

Estrechamente relacionado con el caso anterior, se instruyó un proceso en 2014 contra el señor Jorge Alberto Mendoza Estrada, Juez de Letras Penal, por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, en virtud de su proceder irregular en la causa incoada contra la esposa de Marcelo Chimirri. En este caso también se pu-

so de manifiesto la incapacidad de muchos funcionarios judiciales de someterse al imperio de la ley y al debido proceso, dictándosele al acusado un sobreseimiento definitivo por el delito de prevaricato durante la celebración de la audiencia de declaración de imputado¹⁵.

Sin perjuicio del daño material y patrimonial causado al Estado por los hechos delictivos cometidos, denunciados y procesados hasta entonces, fue en 2015 cuando el aparato gubernamental y su estructura delictiva parecieron llegar a su punto álgido de corrupción, al saquear una de las instituciones más importantes del país: el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

En este caso, la suma de las pérdidas económicas para el Estado sobrepasa los 6 mil millones de lempiras y figuran como responsables al menos 43 personas; entre ellas, los exdirectivos del IHSS Mario Zelaya, José Ramón Bertetty, Arturo Bendaña y John Charles Bográn. Además, el propio Juan Orlando Hernández reconoció que su campaña política había sido financiada con los fondos saqueados¹⁶. Se establecieron 21 líneas de investigación, de las cuales siete fueron judicializadas¹⁷. Hasta el momento, únicamente 13 de las personas acusadas han recibido una sentencia condenatoria firme y, obviamente, el señor Hernández ni siquiera ha sido investigado.

3. EL IMPACTO DE LA MACCIH EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ante los escasos resultados en la lucha contra la corrupción, considerando su magnitud, la indignación ciudadana se expresó en masivas manifestaciones pacíficas que finalmente lograron que el Estado de Honduras suscribiera un convenio con la Organización de Estados Americanos en 2016, con el fin de poner en funcionamiento la MACCIH¹⁸.

En el marco de este Convenio y en aras de la adecuada implementación de un plan de investigación y

11 ASJ. Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015... op. cit., pp. 54-55.

12 *Ibid.*, pp. 49-50.

13 "Con 200 mil Bendaña compensa pérdida de 3.7 millones provocada al Estado". En *Revistazo*, 30 de octubre de 2013. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/773-con-200-mil-benda%C3%B1a-compensa-p%C3%A9rdida-de-37-millones-provocadas-al-estado>

14 ASJ. Judicialización de la Corrupción Pública 2008-2015... op. cit., pp. 65-66.

15 *Ibid.*, pp. 45-46.

16 "El presidente de Honduras reconoce financiación fraudulenta". En *BBC Mundo*, 4 de junio de 2015. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150604_honduras_presidente_hernandez_reconoce_financiacion_fraudulenta_corrupcion_iv

17 Informe de la Comisión Multipartidaria nombrada por el Presidente del Congreso Nacional para investigar los avances relacionados con el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Tegucigalpa, 2015, pp. 5-20.

18 Convenio entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Suscrito el 16 de enero de 2016.

persecución penal integrada, surgió la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFEVIC) en enero de 2017¹⁹, la unidad del MP para investigar casos de redes de corrupción junto con la MACCIH.

El binomio UFEVIC-MACCIH presentó su primer caso, denominado “Red de Diputados”, el 11 de diciembre de 2017, en virtud del cual se acusó a los parlamentarios Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández, Héctor Enrique Padilla Hernández, Eleazar Alexander Juárez Sarabia y Audelia Rodríguez Rodríguez, por el delito de malversación de caudales públicos por un monto de L 8.3 millones.

No obstante, el Congreso Nacional reformó arbitrariamente su Ley Orgánica, mediante la cual reinstauró la inmunidad parlamentaria; así impidió la continuación del proceso y provocó, consecuentemente, el archivo de la causa penal y su remisión al Tribunal Superior de Cuentas²⁰, institución que “puede tardar hasta 10 años para determinar si en los hallazgos de una auditoría existen sanciones y penalidades para los investigados”²¹.

Posteriormente, el 27 de febrero de 2018 se presentó un requerimiento fiscal contra de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, Mauricio Mora Padilla y Saúl Fernando Escobar, en el caso denominado “La Caja Chica de la Primera Dama”²², por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, confabulación para el lavado de activos y lavado de activos. El perjuicio al Estado se cuantificó en L16 millones. La señora Bonilla fue condenada a una pena de 58 años de reclusión, Saúl Fernando Escobar una pena de 48 años de reclusión²³ y Mauricio Mora Padilla fue absuelto por insuficiencia probatoria.

19 Mecanismo Interinstitucional de Cooperación Bilateral entre el Ministerio Público de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA). Suscrito el 18 de enero de 2017.

20 SARAVIDA, Francisco. *Red de diputados: El caso de corrupción que evidenció la complicidad de los tres poderes de Estado de Honduras*. Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Tegucigalpa, 2019, pp. 2-9.

21 *Ibid.*, p. 2.

22 ORELLANA, Danelia. *La condena de la Primera Dama: Un caso que evidencia lo que ocurre cuando se está fuera de las élites de poder en Honduras*. CESPAD, Tegucigalpa, 2019, pp. 2-12.

23 El pasado 23 de julio, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción revocó la prisión preventiva de Bonilla y Escobar, en virtud de haberse alcanzado el plazo máximo para estar con dicha medida, después de que el 3 de marzo la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia condenatoria contra estas personas.

Del caso “Red de Diputados” se derivaron diversas líneas de investigación que permitieron presentar un nuevo requerimiento fiscal en mayo y noviembre de 2018 por el caso denominado “Pacto de Impunidad”. Este significó un considerable retroceso para la justicia hondureña, toda vez que obstaculizó la procedencia de una acción judicial administrativa, civil o penal de cualquier tipo, que tuviera lugar por irregularidades cometidas por los miembros del Congreso Nacional.

Esto ha sido posible gracias a dos reformas aprobadas por el poder legislativo: la ya citada reinstauración de la inmunidad parlamentaria y la aprobación de la Ley Especial para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas Sociales, que “dispone que los diputados, diputadas y servidores públicos no sean objeto de investigación por parte del Ministerio Público, pues, de nuevo, lo serán del Tribunal Superior de Cuentas”²⁴.

Inicialmente, los diputados Román Villeda Aguilar y Tomás Zambrano figuraban en el requerimiento fiscal y, a través de la ampliación del mismo, se incluyó también a los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina. Los cuatro enfrentaban cargos por falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Actualmente, a dos de ellos se les otorgó sobreseimiento definitivo; en cuanto a los otros dos, sus casos se elevaron a juicio²⁵.

El 13 de junio de 2018 se presentó un nuevo requerimiento fiscal por el caso “Pandora”, en el que figuran como imputadas 38 personas por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos. Según los elementos probatorios presentados, se habría causado un perjuicio directo por la cantidad de L 282 millones, destinados al financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional, el Partido Frente Amplio y el Partido Liberal²⁶.

No obstante, en la madrugada del 28 de julio, la jueza natural encargada del caso, dejó en libertad a varios de los funcionarios y exfuncionarios acusados, y reclasificó el delito de lavado de activos por el de encubrimiento, el cual es conmutable; es decir, que

24 SARAVIDA, Francisco. *Red de diputados... op. cit.*, p. 3.

25 SORTO, Mario. *La MACCIH-UFEVIC en el combate de la corrupción e impunidad en Honduras*. CESPAD. Tegucigalpa, octubre de 2019, p. 16.

26 SOSA, Eugenio. *Pandora, el caso de corrupción de la MACCIH que develó cómo se financió la campaña electoral del Partido Nacional en el 2013*. CESPAD. Tegucigalpa, 2019, pp. 2-14.

la pena puede ser sustituida por una menos grave. Actualmente, al menos tres de las personas imputadas cuentan con sobreseimiento definitivo; tres se encuentran prófugas y el resto con medidas distintas a la prisión preventiva²⁷.

El 5 de noviembre de 2018 se presentó requerimiento fiscal por el caso “Caja Chica del Hermano”, contra los señores Wilfredo Francisco Cerrato y Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. En este caso se determinó un daño patrimonial al Estado por un total de L 8.4 millones. Pese al abundante acervo probatorio presentado por la Fiscalía, el 23 de julio de 2019 se ordenó el archivo definitivo del caso por parte de la Sala de Apelaciones, integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes argumentaron que no se había probado el origen de la información financiera que probaba la responsabilidad penal de los imputados²⁸.

De forma complementaria a las líneas de investigación que emanan del caso del desfalco del IHSS, el 4 de diciembre de 2018 se presentó un requerimiento fiscal contra doce exmiembros de la junta directiva de la institución, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. En este caso, el daño económico se elevó a más de 100 millones de dólares por una licitación fraudulenta realizada por los directivos. El inicio del juicio oral y público estaba señalado para el mes de marzo pasado²⁹.

El 11 de diciembre de 2018 se presentó el caso “Arca Abierta”, en el cual se denuncia la apropiación ilegal de fondos del Estado hondureño equivalentes a más de L 21 millones. Estos fondos, que inicialmente estaban destinados a la reducción de la pobreza, fueron desviados a las cuentas personales de los 21 involucrados, entre ellos diputados y exdiputados, a través de la organización no gubernamental “Asociación Planeta Verde”. En 2020, once imputados se beneficiaron con

sobreseimientos, nueve están siendo procesados y en un caso se extinguió la persecución penal³⁰.

Meses más tarde, el 4 de marzo de 2019, se presentó un requerimiento fiscal en el caso “Fraude sobre el Gualcarque” contra dieciséis funcionarios y exfuncionarios por los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles, usurpación de funciones y fraude. Este caso es de especial relevancia nacional e internacional, en virtud de que se deriva de las más de cuarenta denuncias presentadas por la líder ambientalista Bertha Cáceres, asesinada en 2016. El 1 de noviembre de 2019 se dictó auto de apertura a juicio para todas las personas imputadas³¹.

El 18 de marzo de 2019, la UFECIC-MACCIH presentó requerimiento fiscal en el caso “Corrupción y Colusión Patuca III”, en el que diez personas enfrentaban cargos penales por los delitos de fraude, cohecho, soborno doméstico, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. En este caso, los acusados sobrevaloraron los bienes adquiridos hasta en un 149% del valor real en el mercado, lo que se traduce en 4 millones de lempiras sobrevalorados. Antes de la pandemia, se había programado el inicio del juicio oral y público para el 27 de abril del año en curso³².

El 24 de mayo de 2019 se presentó requerimiento fiscal en el caso “Narcopolítica” contra doce imputados; entre ellos, Fabio Porfirio Lobo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado y Deysi María Zúñiga. Este caso surge a partir de las declaraciones brindadas por el narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien afirmó haber contribuido económicamente a la campaña electoral del expresidente Porfirio Lobo Sosa, en contraprestación a los beneficios que posteriormente recibiría su empresa INRIMAR. Los contratos a través de los cuales se benefició a esta empresa, que no reunía los requisitos para contratar con el Estado, sumaron un total de L 68 millones. Hasta la fecha, dos de los imputados (Fabio Lobo y Devis Leonel Rivera

27 *Ibidem*.

28 “Caso Penal cinco: Caja chica del hermano”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-cinco-caja-chica-del-hermano/>

29 “Caso Penal seis: Licitación fraudulenta del IHSS”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-seis-licitacion-fraudulenta-del-ihss/>

30 “Caso Penal siete: Caso Arca Abierta”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <https://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-siete-caso-arca-abierta/>

31 SARAIVA, Francisco. “Fraude sobre el Gualcarque”, el caso de corrupción que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de los ríos en Honduras. CESPAD. Tegucigalpa, 2019, pp. 2-19.

32 “Caso Penal nueve: Colusión y corrupción Patuca III”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-nueve-corrupcion-y-colusion-patuca-iii/>

Maradiaga) guardan prisión en los Estados Unidos, ocho recibieron auto de apertura a juicio, a una se le dictó sobreseimiento definitivo y al último se le inició el proceso recientemente³³.

Finalmente, el 24 de septiembre de 2019 se presentó requerimiento fiscal contra siete personas en el caso “Corrupción sobre ruedas”, por los delitos de abuso de autoridad, fraude, usurpación de funciones y uso de documentos públicos falsos. Estas personas conformaron un esquema que utilizó al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para malversar 11,4 millones de lempiras destinados a la administración del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición denominado “Bono 10 mil”. En noviembre de 2019, las personas imputadas se beneficiaron de medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva³⁴.

4. UN PANORAMA DESALENTADOR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

A partir de la simple descripción de los casos promovidos por el MP antes y durante la vigencia de la MACCIH, podemos llegar a tres conclusiones: en primer lugar, existe una notable diferencia entre las actuaciones investigativas emprendidas por el MP a solas y las realizadas por la UFECIC-MACCIH, caracterizadas por su celeridad, efectividad y productividad.

La UFECIC-MACCIH ha demostrado beligerancia en la lucha contra la corrupción, asumiendo el deber de investigar con diligencia y compromiso, características de las que parece estar desprovisto el MP, cuando actúa sin acompañamiento internacional. Esto se manifiesta en la débil estructuración de una estrategia de litigio, que ha provocado el sobreseimiento de varios de los casos investigados debido a la falta de actividad probatoria, pese a que sí se contaba con el acervo probatorio suficiente para continuar los procesos.

En segundo lugar, se debe destacar que el grado de complejidad que ha implicado la labor investigativa del binomio UFECIC-MACCIH ha sido más elevado que el que enfrentaban los casos presentados por el MP. Entre las acusaciones promovidas por la primera, figuran delitos como el cohecho, las negociaciones

incompatibles con la función pública y el lavado de activos, y están dirigidas contra altos funcionarios, narcotraficantes y personajes políticos y económicos sumamente reconocidos por la sociedad hondureña.

En tercer lugar, pese a los reveses judiciales y las reformas realizadas por el poder legislativo para garantizar la impunidad por actos de corrupción, el binomio UFECIC-MACCIH representó una verdadera amenaza para las redes de corrupción. En consecuencia, resulta sencillo comprender por qué sus limitados éxitos significaron “la crónica de una muerte anunciada”, que se consumó el 17 de enero de 2020, cuando la OEA emitió un comunicado anunciando que el régimen de Juan Orlando Hernández no había renovado el convenio con la MACCIH y, por tanto, daba por finalizadas sus funciones; en consecuencia, se materializaba la extinción de la UFECIC.

Sin la MACCIH, el MP anunció la creación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), cuyo objetivo principal es “la investigación imparcial, aplicación de la ley y el enjuiciamiento de los responsables por la comisión de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción que le fueren asignados por la Dirección General de Fiscalía”, y la evacuación de las líneas de investigación y sustentación de “los casos que fueron judicializados por la UFECIC, utilizando las buenas prácticas adquiridas con MACCIH/OEA”³⁵.

Si bien el nombramiento del fiscal Luis Javier Santos —extitular de la UFECIC—, al frente de la UFERCO es una medida positiva y de alguna manera esperanzadora, es claro que esta nueva unidad nace con limitadas facultades y recursos para poder continuar el trabajo realizado con la MACCIH. Primero, la UFECIC-MACCIH contaba con 41 funcionarios entre fiscales, agentes de investigación, especialistas en recopilación y análisis de información financiera y criminal, y forenses informáticos³⁶, el cual era un número insuficiente para cumplir con sus objetivos; sin embargo, la UFERCO opera con menos personal que la UFECIC, con salarios más bajos y con menos beneficios sociales.

Segundo, si bien la UFERCO conoce y da continuidad a los casos que la UFECIC-MACCIH inició, solo puede asu-

33 “Caso Penal diez: Caso narcopolítica”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-diez-caso-narcopolitica/>

34 “Caso Penal once: Corrupción sobre ruedas”. En *Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la MACCIH*. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <http://www.observatoriahonduras.org/sitio/project/caso-penal-once-corrupcion-sobre-ruedas/>

35 Fiscalía General de la República. Comunicado. “Ministerio Público crea Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción”. Tegucigalpa, 24 de enero de 2020. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <https://www.mp.hn/index.php/author-login/150-enero2020/5345-comunicado-ministerio-publico-crea-unidad-fiscal-especializada-contra-redes-de-corrupcion>

36 SORTO, Mario. La MACCIH-UFECIC en el combate de la corrupción... op. cit., p. 13.

mir nuevos casos de corrupción —como los vinculados con el robo millonario de los fondos destinados a combatir la Covid-19—, si la Dirección General de Fiscales se los asigna; esto le resta autonomía, ya que la UFERCO no puede investigar por iniciativa propia. Además, no se puede ignorar que la dependencia inmediata de la Dirección General de Fiscales es un límite importante para acceder directamente al Fiscal General, Óscar Chinchilla, con quien la comunicación era casi a diario cuando existía la UFECIC-MACCIH³⁷.

Tercero, la aprobación de reformas legislativas para garantizar impunidad en los actos de corrupción —entre las que se incluye la limitación de las facultades investigativas del Ministerio Público—, representa un serio obstáculo. Y, el hecho de que la UFERCO no cuente con recursos suficientes, o al menos con los que contaba la UFECIC-MACCIH, más su falta de autonomía para investigar por iniciativa propia, son dos síntomas que apuntan a la falta de voluntad política de fortalecer el combate a la corrupción de forma competente, imparcial e independiente.

Además, no podemos olvidar la historia y desconocer que el fiscal Óscar Chinchilla ha accedido dos veces a la titularidad del Ministerio Público transgrediendo la Constitución de la República. La primera, cuando el 25 de junio de 2013 Luis Rubí renunció a su cargo de Fiscal General y, de forma inesperada, el Congreso Nacional decidió elegir a Chinchilla, no para terminar el mandato de Rubí que finalizaba en marzo de 2014, sino para un mandato de cinco años.

Pero, además, en el proceso de selección, la Junta Proponente evaluó 37 candidaturas mediante la realización de pruebas psicométricas para evaluar su capacidad intelectual, inteligencia emocional y capacidad de reacción. Con los resultados, trece personas fueron seleccionadas como las más calificadas, dentro de las cuales no se encontraba Óscar Chinchilla. Sin embargo, cuatro miembros de la Junta Proponente aprovecharon su mayoría para torcer el proceso con el fin de incluirlo y, en medio de una serie de irregularidades, fue elegido ilegalmente³⁸.

La historia se repitió cuando Óscar Chinchilla fue reelegido Fiscal General en junio de 2018, en medio de oscuras negociaciones entre el bipartidismo, la embajada de Estados Unidos y ciertos sectores de sociedad civil que promovieron su imagen como el “Fiscal 5 Estrellas”. La ilegalidad de su reelección se basa en el artículo 233 de la Constitución, que establece que el Fiscal General será electo por el Congreso Nacional de una nómina de cinco candidatos seleccionados por una junta proponente. Pero Óscar Chinchilla no estaba incluido en dicha nómina³⁹.

Lo legal y constitucional era reiniciar el proceso para que la Junta Proponente seleccionara y enviara una nueva lista de cinco candidaturas en la que se incluyera la de Chinchilla, en caso de que tuviera las calificaciones necesarias. Como lo señaló la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, “la falta de observancia de la normativa constitucional y del principio de legalidad durante esta elección podría debilitar al Ministerio Público”⁴⁰, lo cual “impide que la población recupere la confianza en las instituciones públicas, en detrimento del Estado de Derecho”⁴¹.

El reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ indica que la confianza ciudadana en el MP y en todo el sistema de justicia no solo no se ha recuperado⁴², sino que continúa en picada, lo cual se profundiza con las acciones y omisiones que, desde las instituciones públicas, brindan impunidad casi absoluta a quienes, en el contexto de la Covid-19, sustraen y malversan el presupuesto público a costa de la vida, la integridad física y psíquica, y la salud de millones de personas en Honduras.

37 Entrevista al fiscal Luis Javier Santos por el Colectivo Quemando Micrófonos, en el marco del evento virtual “Justicia Asintomática”, 3 de julio de 2020. Según el fiscal Santos, la comunicación con el Fiscal General es un aspecto que no se ha podido evaluar con detenimiento, pues la UFERCO nació en enero, y en marzo inició la pandemia, por lo que no se ha tenido la oportunidad de preparar los casos como quisieran o lo harían normalmente, y presentarlos al Fiscal General.

38 MEJÍA RIVERA, Joaquín A. “Un esbozo sobre la situación del proceso de reforma al sector seguridad y justicia en Honduras”. En revista *Envío-Honduras*, Año 11, N° 39, ERIC-SJ. Tegucigalpa, septiembre 2013, pp. 17-19.

39 CIDH. *Situación de derechos humanos en Honduras...* op. cit., p. 22, párr. 23. Fundación para el Debido Proceso Legal. Se busca Fiscal General para Honduras: La crónica de una reelección no anunciada. 11 de julio de 2018. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en http://www.dplf.org/sites/default/files/se_busca_fiscal_general_para_honduras.pdf

40 “OACNUDH expresa su preocupación en relación al reciente proceso de elección del Fiscal General”. Comunicado de prensa. Tegucigalpa, 29 de junio de 2018. Consultado el 5 de julio de 2020. Accesible en <https://oacnudh.hn/oacnudh-expresa-su-preocupacion-en-relacion-al-reciente-proceso-de-eleccion-del-fiscal-general/>

41 CIDH. *Situación de derechos humanos en Honduras...* op. cit., p. 23, párr. 23.

42 El 75.9% de la población tiene poca o ninguna confianza en el MP y el 70.4 cree que la corrupción está extendida en esa institución. El 80.3% tiene poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia y el 74% cree que la corrupción está extendida en tal institución. En ERIC-SJ. *Sondeo de Opinión Pública...* op. cit., pp. 32-33.



Cuarenta años después del Informe MacBride y el tratamiento informativo de la Covid-19

LUCILA FUNES VALLADARES*

A cuarenta años de distancia, la utopía del Informe MacBride parece más lejana que entonces: los paradigmas sociales de aquellos años se derrumbaron y también sus espejismos.

Los países más ricos y avanzados siguen generando más información que el resto del mundo e imponiendo sus ideas y estilos de vida.

Pero lo dicho en este Informe no ha perdido su pertinencia, y menos en tiempos de la Covid-19.

Las confrontaciones del Este-Oeste y del Norte-Sur y la puja de sus países líderes por imponer sus propios proyectos en el concierto de las Naciones Unidas era el escenario que dominaba el mundo en 1976, cuando la XIX Conferencia General de la UNESCO¹, celebrada por primera vez en el continente africano, encomendó a su director general, Amadou-Mathar M'Bow, elaborar una propuesta de comunicación que permitiera transitar hacia un nuevo orden mundial de información y comunicación, “más justo y más eficiente” (MacBride y otros, 1980).

Era una jugada audaz del Movimiento de Naciones No Alineadas, compuesto entonces por más de ochenta países miembros, que desde 1973 vivía su etapa de esplendor —con África a la cabeza en el proceso de descolonización y la lucha contra el Apartheid— e impulsaba nuevas reglas del juego para la información, congruentes con el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que buscaba articular.

No era extraño entonces que el director general de la UNESCO fuera un senegalés quien, cumpliendo con el mandato de la conferencia, asignó la tarea al Pre-

mio Nobel de la Paz de 1974 y cofundador de Amnistía Internacional, el irlandés Sean MacBride, y a quince personalidades más, que conformaban una representación variopinta de ideologías, tendencias políticas, disciplinas y nacionalidades. Este grupo de connotados se constituyó como la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación (CIC, por sus siglas en francés).

Solo una mujer, Betty Zimmerman, formó parte del grupo, más por un azar que por razones de género: Marshall McLuhan, el filósofo canadiense que hizo célebre la frase “el medio es el mensaje” y su concepción del mundo como una “aldea global”, había enfermado y cedió su representación a la directora de Radio Canadá Internacional.

Dos latinoamericanos formaron parte del equipo, Gabriel García Márquez y Juan Somavia, chileno, diplomático y profesional de carrera en las Naciones Unidas, quien años más tarde dirigiría la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En términos económicos, su redacción se situó en los albores del Neoliberalismo y, en términos tecnológicos, en los de la Internet y la comunicación digital (“la explosión tecnológica en la comunicación tiene gran potencialidad y peligro a la vez... depende de decisiones vitales y de dónde y por quién se tomen”). A ambos los

* Periodista.

¹ Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura.

sintió próximos y su propuesta fue como un escudo para defender a los países más débiles y en menor ventaja.

CUARENTA AÑOS DE UNA PROPUESTA FALLIDA

Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en nuestro tiempo, más conocido como el *Informe MacBride*, cumple en 2020 cuarenta años de haber salido a luz, los mismos años de su entierro como propuesta factible, porque entonces, como ahora, el Tercer Mundo podía patear su descontento frente a un orden desequilibrado de contenidos informativos, pero carecer de poder para recomponer ese “desequilibrio”, que caracterizó como el monopolio de los grandes medios, el flujo vertical de la información desde los centros de poder, la escasa diversidad de las fuentes informativas, las falsas noticias, el control corporativo de los contenidos y un largo etcétera.

Las reacciones al alumbramiento no se hicieron esperar. En septiembre de 1980, diario *El País*, de España, reportó que “la mayoría de los países occidentales” se mostró contraria al contenido del informe, por suponerlo una “amenaza a la libertad de información” y un señuelo para que los gobiernos la regularan.

Con la presentación del *Informe MacBride*, la UNESCO también lanzó su propia suerte a los dados. En 1983 Estados Unidos anunció su retiro como Estado miembro, y al año siguiente, Gran Bretaña. Ambos se reintegraron varios años después, cuando estuvieron seguros que el Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación, NOMIC, como se le denominaba, formaba parte del pasado.

Más que un acto de protesta, el retiro fue un mecanismo de censura a la UNESCO complementado con la asfixia económica, similar al actual retiro anunciado por el gobierno de Donald Trump a la Organización Mundial de la Salud.

El *Informe MacBride* es, pues, un documento que adquiere más brillo con el paso de los años, pero a condición de que se le conserve como reliquia y no se le resucite como un plan de acción.

Su inviabilidad política no le resta valor. Por valioso es que fue políticamente inviable. En números, las naciones no alineadas sumaban más que las grandes potencias “responsables” del desequilibrio informativo, pero ese puñado de países podía controlar también el voto de los “no alineados”, que confirmaron estar alienados con la cultura y los mensajes dominantes

y atados a los dictados de las grandes economías del mundo (cualquier parecido con la realidad actual no es ninguna coincidencia).

Aprovechando la conmemoración, este artículo pretende rescatar algunos de los aportes más valiosos del *Informe MacBride* e invitar a sus lectores a reflexionar sobre cómo las lecciones que legó se pueden aproximar a la realidad nacional actual, en tiempos de la Covid-19.

UN DOCUMENTO DE CONSENSO, PESE AL DISENSO

Cuando Sean MacBride aceptó el reto de dirigir la CIC para elaborar el informe de la UNESCO, tenía 73 años de edad y un reconocimiento público en el mundo capitalista y el socialista de entonces (además del Premio Nobel había recibido el Premio Lenin de la Paz, otorgado por la Unión Soviética). Frente al Tercer Mundo lo acreditaba su desempeño, desde 1973 hasta ese momento, como comisionado de las Naciones Unidas para África del Sudoeste/Namibia.

Era una figura honorable y de consenso. Su trayectoria social por la defensa de los derechos humanos y la paz lo acreditaba. Como político irlandés asumió la causa independentista desde su adolescencia, fue ministro de Relaciones Exteriores de su país y dirigió varias organizaciones internacionales; entre ellas, el Fondo Internacional de Prisioneros de Conciencia, Amnistía Internacional (presidente, 1961-75) y, simultáneamente, la Comisión Internacional de Juristas (secretario general, 1963-70).

El resto de miembros de la comisión era diverso en opiniones y puntos de vista, como un ejemplo, por sí mismo, de lo que aspiraba el informe debía ser la diversidad de fuentes informativas que medios y periodistas abordaran para elaborar sus noticias.

En la CIC había críticos incisivos del comunismo, periodistas a los que se vinculó con el fascismo y el espionaje, fundadores de grandes medios de comunicación, escritores afines a las ideas del socialismo, defensores acérrimos de un sistema de control de la información por el Estado, tercermundistas, académicos, sociólogos, funcionarios de gobierno en materia de información. Todos posicionados en sus ideas, nadie con criterios neutrales. Tal vez por esto el informe aclaró que no creía en la neutralidad de la información.

Al final del documento, de casi 300 páginas, se incluyó un breve apéndice de comentarios escritos por algunos de los miembros de la CIC, donde expresan sus disensos o sus anotaciones marginales no siempre re-

flejados en el contenido principal. El gran logro de este informe, como lo expresó MacBride en la introducción, fue alcanzar acuerdos sobre “grandes cuestiones” alrededor de las cuales las posiciones parecían irreconciliables (Id.,1980).

Por supuesto, hubo temas sin concluir e interrogantes sin respuestas; no todos coincidían sobre el significado de “Nuevo Orden”, ni cómo organizarlo e implantarlo, pero, como afirmó MacBride: “no hubo nadie que no estuviese convencido de que se requieren cambios estructurales en el campo de la comunicación y de que el orden existente es inaceptable para todos”.

“Cuando recibimos para su aprobación la versión final del informe me asaltó el deseo de volverlo a escribir de principio a fin”, aunque “transmitía claramente nuestras posiciones”, escribió MacBride, quien resaltó “el mutuo sentimiento de respeto y amistad” que desarrollaron los miembros de la comisión durante el proceso.

LA BÚSQUEDA DE UN OBJETIVO COMÚN

A lo largo de dos años (1977-1979), la comisión, “dotada de completa libertad intelectual”, sesionó en ocho ocasiones, que sumaron dos meses de trabajo (lo principal, dijeron, no era llegar simplemente a conclusiones, sino identificar y analizar los problemas y sus posibles soluciones), y dos meses más para redactar el informe.

A la par, hubo eventos internacionales en diversas regiones del mundo para realizar consultas a centenares de personas (agencias de prensa, emisoras, periódicos, institutos de investigación, organizaciones internacionales, ONG, investigadores, gobiernos, escritores, profesores, profesionales de los medios, etc.) sobre los contenidos de las informaciones, la corrección y el contenido de los hechos, las imágenes, las infraestructuras para generar noticias, los derechos y responsabilidades de los periodistas, la recopilación y la distribución de noticias, los efectos de los avances tecnológicos a futuro, etc.

Como resultado, el informe pareciera a veces una compilación de ideas diversas, incluso contrapuestas, sin seguir necesariamente una secuencia lógica ni temática homogénea, lo que lo hace ir y regresar a un tema que se suponía ya abordado. Sin embargo, busca desembocar en un objetivo común que parte de considerar la comunicación social como la base de toda interrelación social, un motor para el acercamiento y la unificación de las comunidades que puede contribuir a reducir tensiones o arreglar conflictos.

Pero, por encima de la utopía de conciliar pensamientos irreconciliables, hubo criterios pragmáticos. Uno de ellos lo había enunciado McLuhan y lo ratificó el informe (antes de que se creara Internet), en el sentido de que la comunicación había alcanzado dimensiones planetarias, había roto el aislamiento de los países y generaba interdependencia entre las naciones, pero nada de esto hacía desaparecer los desequilibrios, ni las desigualdades, ni los conflictos de intereses, ni los modelos de dominación, aunque “puede ayudar a suavizar su efecto” (MacBride, 1980).

Es posible que el *Informe MacBride* no considerara los alcances de su propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación como un verdadero peligro para las grandes potencias; primero, porque sus autores no creían en el poder omnímodo de los medios y, segundo, porque estaban conscientes de que, para echarlo a andar, primero se debía superar los controles internos de la UNESCO, manejados por las naciones más poderosas. Al respecto, advirtió los “procesos dolorosos” y de muchos años para acatar decisiones que la organización aprobaba en consenso durante sus conferencias internacionales.

No sería extraño suponer que algunos de los que suscribieron el informe estaban conscientes de esta situación, y se prestigiaron como críticos independientes frente a un mundo confrontado.

LO QUE SE VIVÍA...

En los años setenta, la confrontación entre los dos sistemas económicos y políticos existentes después de la Segunda Guerra Mundial alcanzó niveles “estridentes” en todo el mundo. Las noticias que circulaban eran el principal espejo de ese careo (MacBride y otros, Id.).

La Guerra Fría era también una guerra informativa, de ataques y contrataques, de ofensivas y defensivas, de estrategias y repliegues. Muchos veían en los contenidos de los cables de prensa internacional una violación de las grandes potencias a la soberanía de las naciones del “Sur” y a su libre autodeterminación.

Los altos niveles de polarización animaban intensos debates sobre cuál debía ser la función de los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas y su contribución a solucionar los problemas que derivaban del choque.

Fue también un ambiente propicio para el ejercicio del espionaje a través del periodismo, con acusaciones de agentes secretos infiltrados en los medios. El infor-

me afirmó que, en muchos de los casos, los servicios de espionaje asumían el control clandestino de publicaciones. Extremo que iba más allá del concepto tradicional de lo que se considera una “prensa oficiosa”.

En la década de los setenta, los países no alineados se habían constituido como un movimiento fuerte y “alternativo” que demandaba una evolución de las ideas desde la comunicación de masas para fortalecer la paz, promover los derechos humanos, combatir la incitación a la guerra y el racismo, en particular el Apartheid y otras políticas segregacionistas. Concebían la libertad de información como la piedra angular de todas las libertades, por lo que se pronunciaban contra la divulgación de noticias falsas o deformadas y veían en los medios de comunicación vehículos para establecer vínculos de confianza.

Sin embargo, la libertad para informar estaba plagada de obstáculos: asesinatos, hostigamientos, secuestros, detenciones y torturas a periodistas en varios países del mundo²; y formas de control no menos evidentes, como la supervisión de los gobiernos para aprobar contenidos de prensa, sobre todo la internacional, la extensión de licencias de trabajo (en el caso de Honduras, la colegiación obligatoria se impuso desde finales de la década de los setenta, como requisito para ejercer el periodismo), mecanismos legales para aplastar a medios de oposición, leyes de desacato (aprobadas también en Honduras), etc.

Entonces, como ahora, se invocaba la seguridad nacional para imponer censura previa a informaciones políticas, técnicas o industriales o a la libre expresión de opiniones. Y eran comunes otras formas indirectas de controlar a la prensa, mediante el suministro regulado de papel periódico, el otorgamiento de frecuencias radiales y de televisión o el manejo estatal de los servicios de transmisión de la información internacional (telefónico, telegráfico o postal).

La doctrina del *free flow of information*, que en 1946 impuso Estados Unidos en el acta constitutiva de la UNESCO (Quiros, 2013), era de aplicación discrecional.

La era de la comunicación digital apenas despuntaba y lo que existía lo monopolizaban las grandes corporaciones privadas (bancos, industrias farmacéuticas,

etc.) que no tenía interés de compartir sus datos con el llamado “Tercer Mundo”.

El *Informe MacBride* advirtió que la comunicación era una industria en expansión, que “empaca y vende como cualquier otro producto” y relega su “servicio social” a un segundo plano. Desde esa perspectiva, visualizó las noticias como productos comerciales, y vio en los medios a una especie de fábricas que desechan hechos sociales que no son rentables, que “no son noticia”, de acuerdo con el criterio del mercado dominante.

Las consecuencias directas de ese —diríase— racismo noticioso, se manifestaba en un flujo de noticias del Norte hacia el Sur, mas no a la inversa, lo que fomentaba en la población de los países ricos, indiferencia, desconocimiento, desinformación y una concepción estereotipada de los países pobres; y en estos, el consumo desmedido de programas de alta rentabilidad y baja calidad, en detrimento de su identidad cultural y de poca estima a su inteligencia (¿es válido referirse a ello como algo solo del pasado?).

A favor de esta práctica, los publicistas de la información “defendían” a sus consumidores señalando que “las preferencias del público son las que dictan los contenidos”.

... Y SE BUSCABA CAMBIAR...

El *Informe MacBride* sostuvo entonces que, a pesar de la sobrecarga informativa que les llovía a los consumidores de los medios de comunicación, estos no estaban bien informados y no contaban con los elementos suficientes para tomar decisiones correctas, porque había un criterio equivocado de lo que se entiende por “noticia” y por “valores de la noticia”, ceñidos a intereses mercantiles, que, como agravante, compiten entre sí por ser los primeros.

Bajo esa perspectiva, el informe consideró que la noticia, unidad básica de la información, debía ser vista como un recurso nacional y un instrumento para la educación, sin perder de vista el propósito de la comunicación como una fuente para entrelazar a los pueblos y establecer relaciones de respeto mutuo y colaboración.

Su visión de una forma diferente y nueva de hacer noticias se basó en no considerar los hechos como sucesos aislados, sino como procesos, descubrir su interconexión, su dinámica, sus fuerzas históricas, los fenómenos sociales que subyacen en ellos; en suma, su contexto.

2 Al respecto, el *Informe MacBride* citaba que, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Instituto Internacional de la Prensa, en 1977 había 104 corresponsales de prensa encarcelados o desaparecidos en 25 países; y, entre 1976 y 1978, 24 asesinatos de periodistas, 57 heridos, torturados o secuestrados y 13 periódicos bombardeados.

Valoraba, además, la información como un derecho humano y no como una mercancía, capaz de contribuir a crear conciencia, a entender la magnitud económica y política de los problemas, de descubrir la capacidad para participar en la toma de decisiones y volverse un instrumento para la liberación y la eliminación de los prejuicios etnocéntricos.

Entre las funciones principales de la comunicación destacó: la de informar sobre hechos y opiniones para ayudar a tomar decisiones apropiadas; la de socializar conocimientos e ideas para que las personas activen en la vida pública; la de motivar metas y aspiraciones para estimular metas comunes; la de discutir la información disponible para aclarar problemas públicos, facilitar consensos y alertar el interés público; la de transmitir conocimientos para contribuir al desarrollo intelectual, formar el carácter y dotar de habilidades para la vida; la cultural para preservar la herencia cultural y despertar la imaginación y las necesidades estéticas; la de entretener; la de integrar, mediante el acceso a una diversidad de mensajes, para ayudar a entender puntos de vista y aspiraciones de otros.

Para cumplir con esta concepción de la comunicación, dio por sentado que las estructuras de la comunicación y los mensajes no son neutrales y que ningún mensaje es absolutamente objetivo, sustentado en que los juicios están implícitos en la elección del lenguaje que se usa, y en que la imagen de la realidad que proyectan los medios “no puede considerarse jamás enteramente correcta”, pero que la comunicación es eficaz si sus mensajes reflejan los problemas.

... CON UN NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

El *Informe MacBride* hizo suyos los enunciados de la Declaración de la UNESCO de 1978³, que abogaba por una circulación libre y una difusión más amplia y equilibrada de la información; el ejercicio de las libertades de opinión, de expresión y de información; la diversidad de las fuentes y de los medios para que cada persona verifique la exactitud de los hechos y funde sus opiniones sobre lo que acontece; la libertad a los periodistas para informar y facilidades de acceso a la

información; la participación del público en la elaboración de la información; la contribución de los órganos de información a los derechos humanos; garantizar mejores condiciones a los periodistas para ejercer su profesión; un nuevo equilibrio y mejor reciprocidad de la circulación de la información.

El informe agregó, con gran visión, el tema de género, cuando rescató los derechos de las mujeres y su igualdad, afirmando que los medios las trataban como minorías, como un sector sin poder y de escasa participación, tanto en contenidos sexistas —noticiosos o publicitarios—, como en su calidad de periodistas, directoras de medios, editoras o cineastas⁴. También destacó el desinterés de los medios por el movimiento feminista y la débil imagen que fomentaban de ellas.

Los desequilibrios de los sistemas de información y comunicación son “perturbadores e inaceptables”, sostuvo.

Una comprensión literal de su propuesta evidenciaría que no pretendía directamente, ni lo sugería, acabar con los modelos políticos y económicos existentes, ni con los de comunicación que se correspondían; estos “deben respetarse”, sostuvo, pero veía posible establecer líneas generales, objetivos y valores comunes basados en intereses coincidentes para un mundo interdependiente.

Proponía un orden nuevo para los países en desarrollo, que eliminara los desequilibrios y las disparidades en la comunicación, sus estructuras y su dependencia, dando paso a comunidades libres, abiertas e imparciales dentro del entendimiento y la tolerancia.

En sentido más idílico que real, los cambios que planteaba eran de fondo porque buscaban atacar las raíces de las desigualdades de la comunicación, un propósito loable pero irreal, en tanto que estas no son causa sino efecto de otras desigualdades (económicas, políticas, ideológicas y culturales). Por eso se le consideraba un acompañante obligado del Nuevo Orden Económico, que tampoco pudo fructificar.

Fracasado el propósito del *Informe MacBride*, la comunicación fue relegada dentro de la UNESCO como un área puramente técnica, en tanto que el tema de la concentración de la información fue considerado competencia de la Organización Internacional del Comercio (Quiros, Id.), como una ratificación de que los hechos son una mercancía.

3 “Declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de masas al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el Apartheid y la incitación a la guerra”, suscrita por la UNESCO en 1978.

4 El informe destacó que de 3,000 directores de cine que había en ese momento en los Estados Unidos, solo 23 eran mujeres.

PREGUNTAS CUARENTA AÑOS DESPUÉS

A cuarenta años de distancia, la utopía del *Informe MacBride* parece más lejana que entonces, los paradigmas sociales de aquellos años se derrumbaron y también sus espejismos, los países “No Alineados” son más, pero pesan menos; al igual que la propia UNESCO y las Naciones Unidas.

Hoy se vive un desequilibrio similar. Los países con más avances científicos, tecnológicos, culturales o económicos siguen generando más informaciones que el resto del mundo e imponiendo sus estilos de pensamiento y de vida.

En otro contexto, el de la comunicación digital, las nuevas tecnologías potenciaron la inmediatez de las informaciones a su transmisión en tiempo real, desde cualquier lugar del mundo donde se originen hacia cualquier destino. Internet es como una fábrica incesante de aplicaciones que crea la falsa percepción de que cada quien puede ser dueño de su propio medio de comunicación (blog, canal de televisión o radio digital), y hacer uso de su “soberanía informativa” para elaborar el mensaje que desee, sin ser censurado.

Es otra utopía que se refuerza con la pandemia actual de la Covid-19, aprovechando la maravilla del WhatsApp, del Twitter, del Zoom, del Instagram, de Facebook y de tantas otras redes disponibles al alcance literal de un celular en mano.

Una nueva dependencia se ha creado, tanta que un apagón de Google, de Yahoo! o de las redes sociales es capaz de provocar una crisis sin precedentes y acentuar la fragilidad humana y social de los nuevos tiempos.

El informe no cambió el orden mundial de la información, no estaba en sus manos hacerlo, pero sus ideas alentaron a una o dos generaciones de periodistas y comunicadores sociales a repensar su razón de ser profesional.

Hoy, el *Informe MacBride* es un texto académico para periodistas y no periodistas; es cierto que dejó por fuera varios aspectos o no profundizó lo suficiente en algunos (por ejemplo, los conflictos de intereses de empresarios de la comunicación o de periodistas o el problema de la corrupción en la prensa), pero marcó un precedente inevitable de citar.

En tiempos de la Covid-19, sus afirmaciones mueven a pensar: ¿Qué desequilibrios informativos han surgido? ¿Consumimos más informaciones internacionales que nacionales? ¿Qué tan útiles son las informaciones que se reciben? ¿Contribuyen a la toma de decisiones correctas? ¿Qué tipo de fuentes abordan los medios en esta emergencia, son diversas? ¿Son creíbles? ¿Hay controles del Estado o de otros poderes sobre la información que se divulga? ¿Dónde se informa la ciudadanía sobre la Covid-19, a través de los medios o a través de las redes sociales? ¿Existe una diversidad de medios aportando una diversidad de informaciones? ¿Hay una separación clara entre los hechos y las opiniones? ¿Permiten los medios que decidamos por nosotros mismos? ¿Hemos desarrollado capacidades críticas para distinguir la verdad de las *fakenews*? ¿Fiscalizan los medios con rigor la actuación pública respecto al tratamiento correcto de la crisis sanitaria? ¿Tiene el público iniciativas propias para contrastar las informaciones que recibe? ¿Maneja el público la búsqueda de la información o son las redes sociales las que le imponen su agenda sobre qué informarse? ¿Qué seguimiento dan los medios a otras informaciones nacionales o del mundo, o no es algo posible?

Responder estas preguntas puede ayudar a reflexionar sobre los equilibrios y desequilibrios de la información, sobre cómo han evolucionado en los últimos cuarenta años, o —al menos— cuánto han influido las ideas del *Informe MacBride* en nuestras percepciones actuales acerca de estos problemas.



¿Es posible una nueva realidad después de la Covid-19?

EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA*

Aunque apenas se habla de cómo enfrentará el país la post emergencia, el tema es ineludible. Los desafíos son enormes, y estas páginas nos recuerdan que la democratización de la sociedad y el capital debe ser la base de la nueva sociedad. Una pregunta crucial es: ¿Cómo construir una economía humana, evitando el sesgo de beneficiar solo a la gran empresa industrial, agrícola, comercial y financiera?

La crisis humanitaria y de salud como resultado de la pandemia ocasionada por la Covid-19, no solo desnudó la precariedad y las limitaciones del sistema sanitario del país, sino que también exacerbó los problemas estructurales de orden económico, político, social y ambiental no resueltos históricamente en Honduras: pobreza, desigualdad, vulnerabilidad, marginalidad, exclusión, ingobernabilidad, dependencia, clientelismo, corrupción.

UN LIDERAZGO DÉBIL Y POCO CREÍBLE

Un problema fundamental para poder enfrentar con éxito la emergencia y la post emergencia, es la falta de confianza y credibilidad en el liderazgo del gobierno y sus instituciones, que impide forjar la unidad de la sociedad, tan necesaria a fin de que la causa de Honduras no fracase. No hay un liderazgo que genere ánimo y esperanza, creíble, transparente y abierto a los distintos sectores del país.

* Economista con especialidad en economía agrícola, planificación y desarrollo. Fue diputado y candidato a la Presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Se desempeñó, además, como Embajador de Honduras en Alemania y la ONU en Ginebra, Suiza.

La falta de planificación, de una conducción unificada y coordinada, y la constante improvisación, sin un plan de contingencias, se ha traducido en respuestas tardías e inapropiadas a los cambiantes efectos de la enfermedad.

El desborde del sistema de salud ante la propagación del contagio no siempre se ha debido a la insuficiencia de recursos, sino más bien a no contar con el acceso oportuno y eficiente para hacer frente a las prioridades que debieron plantearse desde el inicio de la emergencia (recurso humano, insumos médicos, inversiones en bioseguridad y equipos) y a la absoluta falta de controles y transparencia en el manejo de los fondos públicos, muestra evidente de un gobierno signado por la opacidad.

UNA ECONOMÍA POSTRADA

La economía se encuentra en una crítica situación como resultado de las medidas adoptadas por el gobierno; entre estas las de contención, confinamiento, limitación de las garantías constitucionales y toque de queda, a las que se suma la contracción económica mundial.

Los pronósticos de crecimiento económico para lo que resta de 2020 se sitúan entre -2.9/-3.9% (BCH) hasta -5.8% (Banco Mundial). Las exportaciones podrían caer entre un 20-30% y el consumo, importante motor del crecimiento, ha bajado; el déficit fiscal podría dispararse a -6.7% del PIB y el endeudamiento llegar hasta el 57% del PIB, en tanto que el desempleo afectaría, según cálculos preliminares, a unos 400,000 trabajadores.

No obstante, las reservas internacionales se mantendrán en un buen nivel los próximos seis meses, pese a la caída esperada de las remesas y la inversión extranjera directa.

El proceso de reapertura de la economía todavía es débil e incierto y podría avanzar lentamente en la medida que el contagio vaya en aumento, especialmente en los principales centros urbanos. Hay que recordar que el sector de servicios y comercio, que representa alrededor del 57% de la generación del PIB, ha sido el más duramente golpeado por el cierre de la economía.

El sector de la micro, pequeña y mediana empresa, el mayor generador de empleos e ingresos, ha sufrido una fuerte contracción que amenaza con el cierre de muchas empresas. El alto porcentaje de informalidad económica, casi un 70%, es un factor de alto riesgo desde el punto de vista social y económico.

POST EMERGENCIA Y “NUEVA NORMALIDAD”

Hay que preguntarse qué sucederá cuando pase la fase de emergencia y cómo se enfrentará la post emergencia; hasta ahora no hay respuestas, pues ni siquiera se toca el tema. Se habla de una NUEVA REALIDAD o NUEVA NORMALIDAD sin precisarla, y más parece un lema publicitario.

¿Significa continuar con el mismo modelo de crecimiento económico desigual e inequitativo, o se podrá impulsar un verdadero cambio en la ruta de una economía con crecimiento robusto y sostenido al servicio de la gente (una economía humana)? ¿Podrá esta crisis ser un punto de inflexión? ¿O será otra oportunidad perdida, como sucedió después del huracán Mitch (1998), cuando se condonó la deuda para financiar una Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) que se quedó en el papel?

¿VAMOS HACIA UNA “NUEVA REALIDAD” ECONÓMICA?

En las últimas cuatro décadas, principalmente a partir del Consenso de Washington (1989), las estrategias y las políticas públicas en los gobiernos, en el sector privado, los organismos internacionales, la academia y hasta en la sociedad civil, han sido influenciadas por el pensamiento del liberalismo económico, en su versión moderna conocida como neoliberalismo (a muchos no les agrada el término), siguiendo las escuelas clásicas y neoclásicas de la economía, a las que agregaría el monetarismo de Milton Friedman (1912-2006). Ante la crítica, la respuesta es siempre la misma: hay que proponer una alternativa y, según sus defensores, no las hay o las ignoran.

Miren Etxezarreta (1936) economista e intelectual española, Catedrática Emérita en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, en *¿Para qué sirve realmente... la Economía?*, afirma que «parece haber interés en saber para qué sirve la Economía, si sirve para entender y, en su caso, ayudar a resolver los problemas cotidianos de la sociedad, o si sirve para otras cosas». Por tanto, el principal objetivo de su libro es «revisar las líneas principales del pensamiento económico existente y, partiendo de esta base, ver si es posible incidir en la economía real para lograr los objetivos sociales deseados».

Construir una NUEVA REALIDAD implica establecer un enfoque para que las estrategias y políticas se nutran de un pensamiento económico alternativo, desmarcado del pensamiento dominante de la llamada Economía Ortodoxa o Economía Convencional, que prevalece en la actualidad. La aplicación de ese modelo no ha contribuido a construir un mundo mejor, como lo demuestran las consecuencias de esta pandemia, el cambio climático, y la desigualdad económica y social; globalmente, los más pobres han llevado la peor parte.

REACTIVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA

Concuerdo con Ha-Joon Chang (1963), surcoreano, especialista en economía del desarrollo y profesor de la Universidad de Cambridge cuando, al definir la economía en función de su metodología, señala que «la mayoría de los libros especializados en el tema dan por sentado que existe una sola manera de “hacer economía”; es decir, el enfoque neoclásico. Los peores exponentes ni siquiera se toman el trabajo de informar

a sus lectores de que existen otras escuelas de economía además de la neoclásica» (*Economía para el 99% de la población*).

La salida de la emergencia debe empatar con un plan de reactivación y transformación económica, social e institucional del país con una visión de mediano y largo plazo, entendiendo que la fase de reactivación que seguirá a la reapertura debe comprender una primera fase de al menos 24 meses.

El país requiere un marco económico e institucional claro, estable y confiable que permita establecer las bases de una nueva economía; como lo afirma Franz Hinkelammert en *Totalitarismo del Mercado*:

Estamos frente a una disyuntiva entre democracia o mercado... que exige que un mercado sea conforme a la democracia, y que, por tanto, tenga en su centro no al mercado sino al ser humano.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO: ¿UNA ALTERNATIVA PARA HONDURAS?

Una opción que puede considerarse, aunque no la única —con las adaptaciones requeridas al contexto histórico, político, social e institucional del país—, es el enfoque de la Economía Social de Mercado (ESM) que inspiró el programa de recuperación y reconstrucción económica de la Alemania de la post guerra.

La ESM fue parte integral del proyecto político de la Democracia Cristiana de Alemania y también aplicada en otros países europeos de distintas orientaciones y sistemas políticos. No se aboga por replicar este enfoque, pues se sabe de las diferencias culturales que existen; sin embargo, sus lecciones pueden servir para diseñar y proponer un modelo económico y social ajustado a las condiciones de Honduras.

El economista, político y sociólogo alemán Alfred Müller-Armack (1901-1978), de la Universidad de Münster, y uno de sus principales teóricos y proponentes, la define como la «combinación del principio de la libertad del mercado con el principio de equidad social»; o sea, la libertad de la persona humana complementada por la justicia social.

La ESM propone el concepto de «economía mixta», en la que ve una «alternativa liberal frente a la planificación centralizada de la economía y una alternativa social a la economía de mercado al estilo clásico». La ESM se concibe como una idea abierta y no como una teoría cerrada, cuyo contenido debe concretarse to-

mando en cuenta las condiciones sociales específicas de donde quiera implementarse.

UN ESTADO EMPRENDEDOR, ABIERTO Y TRANSPARENTE

El papel del Estado no solo es regular, normar, garantizar la estabilidad macroeconómica (política anticíclica que es esencial) y la competencia (leyes antimonopólicas) para fomentar el crecimiento económico y el empleo digno, sino también el de proveer bienes y servicios públicos como educación, un sistema de seguridad social que considere un modelo único y universal de salud, pensiones y jubilaciones y una red de protección social. Es decir, un Estado emprendedor y abierto que promueve la innovación, el emprendedurismo y la infraestructura económica básica.

No debe olvidarse que la ESM nace en el marco de los principios sociopolíticos que se derivan del pensamiento socialcristiano, que nace de la Doctrina Social de la Iglesia; y desde mi óptica personal, del humanismo cristiano (de los filósofos franceses Jacques Maritain y Emmanuel Mounier), que son: la solidaridad, la subsidiaridad, la complementariedad entre persona y comunidad, en tanto que el Estado y el mercado deben estar al servicio de la dignidad de la persona humana. La corriente latinoamericana de la Teología de la Liberación plantea la opción preferencial por los pobres (CELAM, Medellín y Puebla), basada en la necesidad de superar la pobreza, la desigualdad y la explotación de la mayoría de la población de América Latina.

¿QUÉ IMPLICA LA ESM?

La ESM provee un marco de principios, instituciones, políticas económicas y sociales y un modo de organizar la economía para lograr el crecimiento económico con equidad social, que es la base del desarrollo humano sostenible. Es necesario un marco institucional estable y confiable con visión de mediano y largo plazo, que garantice las reformas económicas, sociales y ambientales que el país requiere. Un Estado Social moderno, organizado, abierto y transparente, que pueda impulsar las reformas, la planificación estratégica, y que sea el resultado de un consenso social, que aminore el conflicto social y posibilite una genuina reforma política.

Como puede apreciarse, un plan de reactivación y transformación, en el marco de la ESM, debe enfocarse en proponer soluciones a los problemas económicos,

REFLEXIÓN

sociales y ambientales de carácter estructural que han impedido que el país crezca económicamente y se desarrolle. Estancarse en los problemas de la coyuntura o en las soluciones parciales es permanecer en el pasado, volver al inmovilismo en que se vive.

La ESM implica reformas políticas que finalmente consoliden la democracia real y participativa, pero que también propicien cambios en actitudes, conductas, tradiciones y comportamientos que bloquean la modernización del país; o sea, el trasfondo ético y cultural de un proceso mínimo de reformas.

¿POR QUÉ NO?

Finalmente, la democratización de la sociedad y el capital debe ser la base de la nueva sociedad. Superar la pobreza y la desigualdad debe ser el eje de esta propuesta para un nuevo “modelo” o “enfoque”.

El papel de las micro, pequeñas y medianas empresas del campo y la ciudad, y las redes de producción

local sostenibles, deben ser puntos clave de la reforma económica para superar la pobreza, la desigualdad y el desempleo.

¿Cómo traducir la tan acariciada estabilidad macroeconómica en bienestar para la microeconomía y especialmente para la gente? ¿Cómo crear una economía humana, evitando el sesgo de beneficiar solo a la gran empresa industrial, agrícola, comercial y financiera? Estos son los grandes desafíos.

Que sea el comienzo del sueño, de imaginar la utopía. Como decía el Senador estadounidense Robert F. Kennedy (1925-1968), citando al escritor irlandés George Bernard Shaw (1856-1950):

Algunos hombres ven las cosas como son, y dicen, ¿por qué?; yo sueño las cosas como no han sido nunca y digo, ¿por qué no?.

*Hay que preguntarse qué sucederá cuando
pase la fase de emergencia y cómo se
enfrentará la post emergencia; hasta ahora
no hay respuestas, pues ni siquiera se toca
el tema. Se habla de una NUEVA REALIDAD
o NUEVA NORMALIDAD sin precisarla, y más
parece un lema publicitario.*



La respuesta estatal y empresarial ante la Covid-19 y los derechos de las trabajadoras de la maquila en el Triángulo Norte*

YADIRA MINERO RODAS
Abogados sin Fronteras Canadá

Este es un análisis preliminar del impacto de la respuesta estatal y empresarial sobre los derechos humanos laborales de las trabajadoras de la maquila durante la emergencia sanitaria.

A partir de los riesgos identificados, propone algunas estrategias jurídicas desde el uso del derecho y el empoderamiento jurídico de las personas.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo constituye un análisis preliminar, realizado dentro de los primeros tres meses de la implementación de las medidas sanitarias de contención de la Covid-19 en el Triángulo Norte de Centroamérica, a saber, Honduras, Guatemala y El Salvador. Pretende mostrar el impacto de la respuesta estatal y empresarial sobre los derechos humanos laborales de las trabajadoras de la industria textil y del vestuario en estos países. Frente a las denuncias de violaciones a esos derechos, se proponen algunas estrategias jurídicas dirigidas no sólo a la reparación en el contexto de la crisis, sino también a la mejora de las condiciones generales de trabajo de este colectivo en el mediano plazo.

Para su elaboración, se revisaron documentos de instancias internacionales y de sociedad civil, legislación de emergencia emitida por los Estados, así co-

mo pronunciamientos de empresas y organizaciones sociales. Además, se realizó una serie de entrevistas a lideresas, líderes, activistas y abogadas del sector sindical o de asociaciones civiles de mujeres con una larga trayectoria en la promoción de los derechos de las trabajadoras del sector.

I. INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTUARIO PARA LA EXPORTACIÓN Y COVID-19 EN EL TRIÁNGULO NORTE

En los países del Triángulo Norte, la industria textil y del vestuario para la exportación, conocida popularmente como “maquila”, ha constituido una de las prioridades en las políticas de generación de empleo durante los últimos cuarenta años. La operación de corporaciones transnacionales ha sido facilitada por los países huéspedes por medio de un conjunto de medidas que incluyeron: regímenes especiales de exoneración de todo tipo de impuestos, salarios mínimos bajos, desregulación y flexibilización de la normativa de protección laboral y laxitud estatal en la supervisión de las condiciones de trabajo y el impacto ambiental.

* Este trabajo se enmarca en un esfuerzo de Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC) para promover la discusión pública informada sobre el impacto de la Covid-19 en los grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad y las formas de contrarrestarlo a través del uso de mecanismos jurídicos. Este artículo es una adaptación de la investigación de la Sra. Yadira Minero al formato editorial de la revista *Envío-Honduras*, redactada sobre el texto original por el Dr. Andrés Pérez Munguía.

De acuerdo con las estimaciones más recientes, 257,810 personas trabajan en la industria de la maquila en la región, de las cuales el 62% son mujeres. En los últimos años, esta proporción ha descendido a partir de la diversificación de la industria, con la llegada de empresas de hilo y textil, y el desarrollo de actividades de empaque, donde trabajan mayoritariamente hombres.

La industria instalada en Honduras es la más fuerte en cuanto a volumen de exportación y número de personas contratadas, pues representa casi el 50% de la masa laboral de los tres países de la subregión¹.

Estados Unidos es el principal mercado de la producción textil y de confecciones del Triángulo Norte; se calcula que entre el 75 y 80% de las exportaciones se dirigen al mercado norteamericano. Centroamérica, en conjunto, es el tercer exportador de textiles a EE. UU, solo detrás de China y Vietnam².

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA MAQUILA Y LAS TRABAJADORAS

Con la llegada de la pandemia, la producción se paralizó en la mayoría de las maquilas de la región, debido a factores tales como las medidas sanitarias decretadas por los gobiernos; la falta de materia prima para operar por el cierre de fronteras; el incumplimiento de los contratos de producción por las empresas transnacionales, y la cancelación de nuevos pedidos de ropa para las temporadas de otoño e invierno del hemisferio norte³.

Esta situación impactó de forma inmediata en las mujeres, no solo por su participación mayoritaria en la masa laboral de la industria, sino también por la desigual distribución de roles y responsabilidades sociales. Como lo advierte la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las mujeres en la región latinoamericana trabajan el doble que sus parejas en sus hogares⁴.

Con el confinamiento domiciliario y el cierre de centros de trabajo y estudio, la carga de los cuidados, que tradicionalmente ha recaído en las mujeres, se elevó. Así, gran parte de las trabajadoras han enfrentado una sobrecarga de los cuidados de sus hijas e hijos, parejas o familiares enfermos que demandan atención de manera continua. A esto se suma que muchas enfrentan violencia doméstica por parte de sus parejas o que son madres solteras que, ante la falta de ingresos, no tienen forma de llevar alimentos a sus hijas e hijos⁵.

TRES ESCENARIOS POSIBLES

La incertidumbre sobre la duración de la pandemia en el continente americano, y sus efectos sobre la economía, hace pensar en tres escenarios posibles.

El primero y menos esperanzador, implicaría cierres intempestivos y/o declaratorias de quiebra de un buen porcentaje de las empresas, cuyas consecuencias serían despidos masivos y violaciones a los derechos adquiridos del personal.

En este escenario se presentarían casos de impago de salarios e incapacidades por maternidad o riesgos profesionales, del auxilio de cesantía y otras prestaciones sociales. Esta situación respondería a una recuperación lenta de la economía de EE.UU. y hasta una posible relocalización de las empresas estadounidenses en su propio territorio.

Un segundo escenario sería la reconversión de la industria textil y del vestuario, que podría adaptarse a la demanda de mascarillas, batas e insumos médicos u orientar parte de su producción para el consumo local. Esto podría implicar la decisión de empresas de capital estadounidense de basar sus operaciones en Centroamérica, en lugar de China u otros países asiáticos.

En estas circunstancias, el impacto en los derechos de las personas trabajadoras no sería tan significativo a mediano o largo plazo. Siempre se produciría el cierre de un porcentaje de las empresas, pero en menor escala. Las violaciones a los derechos laborales se presentarían durante la etapa de confinamiento domiciliario y cierre temporal de las empresas.

El tercer escenario, el más optimista, sería una rápida reactivación de las maquilas, como resultado de una pronta recuperación del mercado estadounidense y hasta una posible reconversión de la industria o una relocalización en América Central, en lugar de Asia.

1 Las cifras sobre las trabajadoras de la maquila provienen de los sitios web de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (CAMTEX), la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (VESTEX), la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y del monitoreo del Equipo de Investigaciones Laborales (EIL) de El Salvador.

2 Equipo de Investigaciones Laborales, EIL (2019). Exportaciones de textil y confección desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. Boletín impreso, p. 1.

3 Entrevista con Sergio Chávez, director del EIL de El Salvador, realizada el 23/04/2020.

4 Naciones Unidas. CEPAL (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. p. 1. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45335/S2000261_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Entrevista con María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), realizada el 24/04/2020.

Las ventajas comparativas de las transnacionales en Centroamérica pasan por disponer de instalaciones propias en la región, empresas con gran experiencia y capacidad competitiva (tercer lugar a nivel mundial), mano de obra con las calificaciones específicas y existencia de puertos geográficamente cercanos a los EE.UU. En esta situación, las violaciones a los derechos humanos laborales se presentarían durante el tiempo de la crisis sanitaria y social.

II. MEDIDAS SANITARIAS Y LABORALES ADOPTADAS POR LOS ESTADOS DEL TRIÁNGULO NORTE

La respuesta normativa de los Estados de la subregión se ha caracterizado, en términos generales, por el uso de herramientas similares: medidas encaminadas a preservar la salud pública y a aliviar la situación económica de empresas y trabajadores, especialmente del sector formal. Los problemas se han presentado más en la ejecución, donde se reportan situaciones que revelan improvisación, opacidad y, particularmente en El Salvador, descoordinación y conflicto entre los poderes del Estado⁶.

Los recursos destinados a enfrentar la pandemia provienen en parte del incremento de la deuda pública, y la falta de transparencia hace pensar en que “habrá nuevos ricos” y la crisis no podrá abordarse de manera efectiva⁷. A continuación, una breve mirada a los casos particulares.

Guatemala. Se declaró estado de calamidad desde el 17 de marzo de 2020 mediante decretos del Ejecutivo que fueron ratificados por el Congreso. Entre las medidas que se tomaron estuvieron el cierre de fronteras; el cese de actividades en los sectores público y privado, con la excepción de servicios esenciales, y la implantación del toque de queda a nivel nacional⁸. De acuerdo con esta normativa, las maquilas podían permanecer abiertas siempre que obtuvieran una autorización del Ministerio de Economía, aseguraran el cumplimiento de medidas preventivas en el lugar de trabajo y proporcionar transporte a sus trabajadores.

Entre las regulaciones de tipo laboral se estableció que no serían afectados los trabajadores que mostraran síntomas de la enfermedad y que el teletrabajo sería obligatorio para las personas mayores de 70 años y para aquellas diagnosticadas con enfermedades crónicas. Se aprobó, además, un bono de auxilio durante tres meses por 75.00 quetzales diarios (8.00 USD), para las personas inscritas en el Seguro Social⁹. Sin embargo, desde la sociedad civil se teme que las medidas de compensación laboral no lleguen a ejecutarse plenamente, debido a la falta de reglamentación y presupuesto, así como de mecanismos de supervisión¹⁰.

Honduras. También se declaró emergencia sanitaria y estado de excepción desde mediados de marzo, que se han prorrogado desde entonces¹¹. Además, en las primeras semanas de la pandemia se aprobaron dos importantes leyes con disposiciones de tipo fiscal, administrativo, económico y social. Estas son la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19 (Decreto No. 31-2020, de 13 de marzo) y la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19 (Decreto 33-2020, de 2 de abril)¹².

Entre otras medidas, la primera ordena una reasignación presupuestaria para financiar las actividades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La segunda adopta medidas de alivio fiscal para las empresas, como la extensión del plazo para el pago del impuesto sobre la renta y una deducción especial adicional de su renta bruta de 10%, calculada sobre el pago de salarios, si no despiden o suspenden a sus trabajadores durante el periodo de marzo a diciembre de 2020.

Otra de las disposiciones del Decreto 33-2020 es la aportación solidaria para los trabajadores cuyos contra-

6 Entrevista con Montserrat Arévalo, directora de la Asociación de Mujeres Transformando El Salvador (MT), realizada el 24/04/2020.

7 Entrevista con Sergio Chávez, director del EIL de El Salvador, realizada el 23/04/2020.

8 Business Law Partners, BLP (2020). Disposiciones normativas a raíz del COVID-19 en Guatemala, pp. 1-9. En: <https://www.blplegal.com/es/Disposiciones-normativas-COVID19-Coronavirus-Guatemala>.

9 *Ídem*.

10 Entrevista con Mirna Ramírez, coordinadora de la Asociación de Mujeres con Valor por un Futuro Mejor de Guatemala (MUVAFOCUM), realizada el 22/04/2020.

11 Business Law Partners, BLP (2020). Disposiciones normativas a raíz del COVID-19 en Honduras, pp. 1-7. En: <https://www.blplegal.com/es/Disposiciones-normativas-COVID19-Coronavirus-Honduras>.

12 La Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19, fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 31-2020 el 13 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* en la misma fecha. La Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la Pandemia Provocada por el Covid-19 fue aprobada por el Congreso Nacional mediante Decreto No. 33-2020 el 2 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial *La Gaceta* el 3 del mismo mes y año.

tos hayan sido suspendidos. Al respecto, se establecen dos modalidades: una para las personas que han aportado al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y otra para los y las trabajadoras del régimen de zonas libres (maquilas). En este caso, la aportación mensual sería de 6,000 lempiras (aprox. 250 USD), financiados por la empresa (L 2,500) y el Gobierno (L 3,500).

En el mismo sentido, la Secretaría de Trabajo ha permitido a las empresas computar a vacaciones y días feriados el tiempo transcurrido en confinamiento domiciliario, mediando aceptación caso por caso, una medida que ha levantado cuestionamientos sobre su legalidad¹³.

El Salvador. El Estado ha afrontado la crisis sanitaria con la emisión de una gran cantidad de normas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Tan es así que, a solo cinco semanas de la declaratoria de emergencia, ya se habían promulgado 57 decretos¹⁴. Los principales fueron el Decreto Legislativo No. 593, del 11 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia nacional por la pandemia de Covid-19, y el Decreto Legislativo No. 594, del 15 de marzo, Ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para pandemia de Covid-19.

Mediante el decreto de emergencia nacional, se establecieron, entre otras medidas: el confinamiento domiciliario, el control de precios sobre los medicamentos para prevenir o tratar la enfermedad, la protección de la estabilidad laboral de los trabajadores durante la pandemia y hasta tres meses después de terminada la cuarentena, la cancelación de las actividades laborales y académicas, y la suspensión de los términos para el cumplimiento de contratos de servicios. Sin embargo, las maquilas fueron autorizadas a trabajar, a partir del 20 de marzo, mediante decreto ejecutivo.

III. DENUNCIAS Y PREOCUPACIONES DE LAS TRABAJADORAS Y ORGANIZACIONES

Desde el inicio de la pandemia, sindicatos y organizaciones de mujeres han advertido de situaciones contrarias a las disposiciones de bioseguridad laboral apro-

badadas y que comprometían el cumplimiento efectivo y consistente de la normativa aprobada. A continuación, se sistematizan por derechos las denuncias de violaciones que pudieron recabarse de personas entrevistadas de los países estudiados, durante los primeros 50 días de la emergencia sanitaria.

DERECHO AL EMPLEO, A LA ESTABILIDAD LABORAL Y A LA PROTECCIÓN ANTE LA FINALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

La Red de Sindicatos de Maquila de Honduras (RSMH) constató que, al 23 de abril de 2020, 77,332 trabajadores tenían sus contratos suspendidos. Ello representaba el 95% del personal de las 50 empresas monitoreadas por la RSMH, 43 de las cuales cuentan con un sindicato. Las suspensiones de contrato oscilaban entre dos y tres meses¹⁵. Un porcentaje mínimo de las empresas del sector permaneció laborando en la producción de mascarillas y batas para el personal sanitario; en algunos planteles no se observaron las medidas de bioseguridad adecuadas, según indica la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH).

Por su parte, la Federación Autónoma de Sindicatos de El Salvador denunció que 33 empresas habían afectado a sus trabajadores en el marco de la cuarentena, desglosando los datos así: suspensión de contratos y no pago de salarios, 25 empresas; no pago de salarios, 4 empresas; despido de trabajadores, 3 empresas; y, despido de trabajadores por no firmar suspensión de labores, 1 empresa¹⁶.

ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL

La suspensión de la atención presencial de las administraciones laborales en los tres países ha reducido a mínimos su trabajo de tutela de los derechos humanos laborales. Aunque se establecieron mecanismos electrónicos o telefónicos de recepción de quejas, su efectividad no está confirmada y existen reportes de acciones iniciadas que no habrían recibido ninguna respuesta¹⁷.

En este sentido, preocupa la falta de información sobre el número de solicitudes de suspensiones de con-

13 Honduras. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (2020). Comunicado del 26 de marzo. En: <https://covid19honduras.org/?q=secretaria-de-trabajo>. Entrevista con María Luisa Regalado, directora de la CODEMUH, realizada el 24/04/2020.

14 Asociación Salvadoreña de Industriales, ASDI (2020). Estatus de situación de normativa ante emergencia COVID-19: actualización al 10 de abril 2020. En: http://industriaelsalvador.com/wp-content/uploads/2020/04/2.3.-CONTENIDO-NORMATIVA-VIGENTE-ANTE-COVID-19-REVI_10ABR2020.pdf

15 Red de Sindicatos de Maquila de Honduras. Base de datos al 23 de abril 2020.

16 Federación Autónoma de Sindicatos de El Salvador, FEASIES (2020). *Boletín Electrónico*. 25 de abril.

17 Entrevista con Marilyn Sánchez, coordinadora de incidencia de la Asociación de Mujeres Transformando El Salvador (MT), realizada el 21/04/2020.

tratos formuladas por las empresas y las resoluciones que al respecto han tomado los ministerios del trabajo. En El Salvador, por ejemplo, este hermetismo se extiende también a las empresas, que comunican decisiones a sus trabajadoras por WhatsApp, lo cual no puede considerarse un mecanismo formal de notificación, ni constituye prueba en caso de conflicto¹⁸.

Salario. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Textiles, Maquila y Similares de Honduras (FESITRTEMASH) denunció públicamente la negativa de muchas empresas maquiladoras a pagar sus salarios y cuestionó la inactividad de la Secretaría del Trabajo ante esta situación¹⁹. En varios casos se ha tenido que pedir el apoyo de Worker Rights Consortium, una organización no-gubernamental de monitoreo global, que hace presión sobre las marcas internacionales²⁰.

Más preocupante aún serían las situaciones vividas en las empresas que por contratación externa (*outsourcing*) proveen componentes a la industria. Por ejemplo, existen reportes de que en la zona San Andrés Itzapa, a 6 km de Chimaltenango, Guatemala, que fue zona de foco infeccioso de Covid-19, algunos talleres clandestinos habrían interrumpido labores sin pagar a un número aproximado de 200 trabajadoras, indicándoles que las llamarían “cuando pase todo”²¹.

SALUD Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS OCUPACIONALES

En los tres países se ha denunciado que, en algún momento de la pandemia, algunas empresas maquiladoras habrían obligado a trabajar a su personal sin las medidas de seguridad adecuadas o cumpliéndolas solo parcialmente²². En Guatemala se mencionaba, por ejemplo, que en varias maquilas proporcionaban mascarillas, gel y tomaban la temperatura, pero que se continuaba trabajando sin el distanciamiento exigido entre máquinas.

Además del riesgo de contraer la Covid-19, la situación ha impactado también en la disponibilidad de los servicios de salud. Así, en Honduras se reportaba que, debido a la cuarentena, a muchas mujeres con problemas de salud ocupacional se les cancelaron sus citas en el IHSS, interrumpiendo tratamientos en curso. En otros casos, se reprogramaron cirugías o se interrumpieron tratamientos²³.

DERECHO A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

Según se examinaba en el primer apartado de este trabajo, algunos escenarios respecto al impacto de la crisis sanitaria sobre la industria de la maquila prevén la posibilidad de reestructuraciones y reconversiones.

De ser ese el caso, los cierres, fusiones, reubicaciones u otros cambios en los giros y denominaciones de las empresas podrían generar riesgos para la continuidad de las organizaciones sindicales; o podrían proporcionar la coyuntura propicia para despedir personal sindicalizado o perteneciente a organizaciones de mujeres.

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO Y EL HOGAR

También en el caso de una reestructuración de la maquila, las mujeres embarazadas, las que se encuentran gozando de licencias por maternidad, del tiempo de lactancia, o quienes se hayan acogido a estos beneficios recientemente, estarán entre los grupos de riesgo que podrían verse afectadas por despidos o impagos, a juzgar por experiencias anteriores en la industria.

Desde una perspectiva más integral, y como se explica en el primer apartado de este artículo, la sobrecarga de cuidados a hijos, parejas y familiares mayores o enfermos, así como la mayor exposición a la violencia doméstica, son riesgos adicionales que el confinamiento domiciliario ha impuesto sobre las mujeres trabajadoras.

IV. ESTRATEGIAS JURÍDICAS RECOMENDADAS

La orientación de la industria de la maquila al mercado internacional hace patente que cualquier estrategia que se proponga debe tener en cuenta a las corporaciones transnacionales y a los consumidores finales quienes, al ejercer presión sobre las grandes marcas, terminan influyendo en el empresariado y los

18 Entrevista con Montserrat Arévalo, directora de la MT, realizada el 24/04/2020.

19 Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Maquila, Textiles y Similares de Honduras, FESITRTEMASH (2020). En: <http://cgthonduras.org/wp-content/uploads/2020/05/1.png>

20 Entrevista con Damisela Mayes, procuradora del Programa Maquila de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT), realizada el 20/04/2020.

21 Entrevista con Marta Callejas, coordinadora del Comité Semillas de Mostaza, de Guatemala, realizada el 24/04/2020.

22 Para Honduras puede verse: ESITRTEMASH (2020), en: <http://cgthonduras.org/wp-content/uploads/2020/05/1.png>. Para El Salvador, entrevista con Marilyn Sánchez, coordinadora de incidencia de la MT, realizada el 21/04/2020.

23 Entrevista con María Luisa Regalado, directora de la CODEMUH, realizada el 24/04/2020.

Estados de la región. En función de los riesgos para los derechos de las trabajadoras que se han identificado, se proponen las siguientes estrategias desde el uso del derecho y el empoderamiento jurídico de las personas.

Derecho al empleo, a la estabilidad laboral y protección ante la finalización de los contratos. Exigir el establecimiento de un seguro contra el desempleo; incidir en la creación de un fondo para el pago de auxilio de cesantía y demás derechos adquiridos, en caso de cierre intempestivo, insolvencia o quiebra de las empresas maquiladoras; y, generar un debate en la región sobre la responsabilidad solidaria de las marcas y corporaciones transnacionales con sus trabajadoras en esta crisis.

Acceso a la justicia laboral. Exigir la incorporación inmediata de personal para la recepción de denuncias e inspección en las vías administrativas y judiciales; requerir la puesta a disposición de información pública sobre las violaciones a los derechos humanos laborales; reclamar a las autoridades del trabajo un informe sobre la situación del empleo en la maquila que incluya, al menos, el número de personas que dejó de recibir sus salarios o que fue despedido, así como los casos en que dichas autoridades han restituido sus derechos; y, promover el debate desde las organizaciones sindicales y de mujeres sobre el uso de los mecanismos de queja de los tratados de libre comercio.

Derecho al salario. Exigir por las vías legales disponibles el pago de los salarios dejados de percibir desde comienzos de la cuarentena; identificar y denunciar a las corporaciones transnacionales que no han realizado estos pagos, en alianza con organizaciones de los países consumidores, y sumarse a las iniciativas, como la de WRC, para que las corporaciones transnacionales creen un fondo para el pago de los salarios y demás derechos dejados de percibir durante la crisis.

Descanso y días feriados. Demandar la anulación o inconstitucionalidad de las medidas gubernamentales que implicaron la pérdida del derecho al descanso y días feriados, y documentar los despidos y demás presiones de las empresas a las personas trabajadoras para que renunciaran a estos derechos.

Protección frente a los riesgos ocupacionales. Exigir la incorporación de la Covid-19 como enfermedad ocupacional, en función del sistema de organización del trabajo en las maquilas; requerir el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en todos los planteles y su monitoreo por expertos independientes; documentar los casos de empresas que estén exigiendo la firma de exoneraciones de responsabilidad en caso de contagio o muerte por Covid-19, con miras al uso de los recursos internos o internacionales que procedan, y documentar los casos de despidos que comprendan personas con dictámenes de reubicación, pensiones o enfermedades ocupacionales otorgadas o diagnosticadas previamente.

Libertad sindical. Documentar los cierres y despidos masivos que afecten a las personas agrupadas en sindicatos y organizaciones de mujeres y demandar su reintegro, en caso de despido.

Equidad de género en el trabajo. Documentar los casos de mujeres despedidas en período de maternidad o lactancia; exigir el pago de todos los derechos de maternidad en caso de cierres de empresas; en su caso, demandar judicial o administrativamente el goce de estos derechos o la reintegración laboral, y generar debate sobre la urgencia de una política de corresponsabilidad en los cuidados en el hogar, que incluya campañas de sensibilización y medidas laborales que permitan disminuir la sobrecarga que actualmente sufren las mujeres trabajadoras.

Circuito criminal

No habíamos salido del asombro por el sobreseimiento a Rosa Elena de Lobo por el caso “Caja chica de la Dama”, cuando dejaron en libertad a los políticos que saquearon 282 millones de lempiras; la diosa Temis advierte que en esta aberrante impunidad se sitúa el latrocinio de cien mil millones de lempiras destinados a la emergencia por el Coronavirus.

Estas decisiones evidencian que la Corte Suprema de Justicia, en vez de garantizar el imperio de la ley, se convirtió en el imperio de la impunidad y se ajustó como correa de transmisión del circuito criminal construido por Juan Orlando Hernández. Este circuito lleva una década en construcción, según documento de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, durante la cual Juan Orlando y su grupo avanzaron en controlar el Estado para aumentar sus ganancias y ventajas sobre sus competidores y asegurarse impunidad.

El comportamiento de la Corte Suprema de Justicia recuerda el testimonio de Fredy Nájera, diputado extraditado, quien detalló los pagos con dinero del narcotráfico a diputados para elegir la lista de candidatos que presentó Juan Orlando para integrar la actual Corte, que se eligió tal como la presentó su majestad.

Hoy la estructura funciona a la perfección: desde ahí se negocia y se extorsiona, según cálculos políticos de sus operadores. Si está dentro del circuito seguirá operando, y las cartas de libertad y los sobreseimientos estarán a la orden del día; pero los demás cuidémonos porque, con la misma fuerza que protege, el circuito criminal persigue y condena a quienes defienden los bienes naturales y la libertad de expresión, como ocurre con los pobladores de Guapinol y con la diputada María Luisa Borjas.

Las acciones de Argueta y compañía encajan con la percepción de la ciudadanía, expresada en el Sondeo de opinión pública del ERIC, donde se establece que el 80 por ciento de la población cree que magistrados, jueces y fiscales defienden los intereses de los ricos y poderosos, y de los corruptos. La afirmación está sintonía con el 80 por ciento que no confía en la Corte Suprema de Justicia, y el 74 por ciento que considera que la corrupción está muy extendida en dicha institución.

Ese circuito criminal desmontó la MACCIH y la UFECH, que investigaron y documentaron el caso Pandora, y hoy ese mismo circuito deja en libertad a los responsables, tal vez porque se acerca el proceso electoral y seguramente necesitan nuevos “pandoros”. No fue por gusto que el 70.3 por ciento de la población se manifestó contra la cancelación del convenio de la MACCIH, mientras que el 68.9 piensa que como país somos incapaces de enfrentar la corrupción sin el apoyo de una instancia internacional. Con organización y audacia podremos romper ese circuito y sacar sus manos criminales de los asuntos públicos; esa es una tarea política de la década que comenzamos.

Envío

Honduras

AÑO 18 • N° 62 • AGOSTO 2020

Únase usted también a los lectores de *Envío-Honduras*



Una visión crítica de la realidad y una respuesta a los desafíos de Honduras en el siglo XXI.

Suscríbase llamando a los teléfonos 2647-4227, 2648-1412 y 2648-1413, escribiendo al Apartado Postal No. 10, El Progreso, Yoro, o al e-mail: enviohonduras@eric-sj.org

También puede hacerlo personalmente, en la sede del ERIC-SJ ubicada en Casa San Ignacio, Zona de la Compañía, contiguo al Instituto Técnico Loyola, El Progreso.

PUESTOS DE VENTA:

- **Tegucigalpa**
Librería Guaymuras, Avenida Paz Barahona,
Edificio Barrientos, N° 1212
Teléfono: +504 2222-4140 / +504 3367-3941
- **El Progreso**
Radio Progreso
Librería La Comuna
Casa San Ignacio

Precio: L 50.00



ALBOAN



CONTRIBUYENTES SOLIDARIOS

www.eric-sj.org